Cámara Federal de Casación Penal

Registro Nº 627/22

///nos Aires, a los 03 días del mes de junio del año dos mil veintidós, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo establecido en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), asistidos por el secretario actuante, a los efectos de decidir en el presente legajo **Nº CFP 7650/2014/TO1/56/CFC44** del registro de esta Sala, caratulada: **"Silva Cardenas, Carlos y otros s/ recurso de casación"**, de cuyas constancias **RESULTA:**

I. Que con fecha 8 de julio del 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de esta ciudad, resolvió –en lo que aquí interesa-: *"**I. RECHAZAR el RECLAMO DE NULIDAD de la totalidad de este juicio** realizado por las defensas de Williams Triana Peña, Germán Emilio Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Guillermo Adolfo Heisinger, Mario Alberto Lara Guerra, Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Carlos David Pardey Rozo y Carlos Miguel Potes Ramírez, por violación a los principios de inmediatez, continuidad y oralidad, en los términos exigidos para la observancia de los principios constitucionales de debido proceso legal, defensa en juicio, imparcialidad del juzgador y acceso a la jurisdicción en tiempo oportuno, con costas, por no darse en el presente caso, los requisitos fijados en los artículos 166, 167, 170 y concordantes –todos ellos a `contrario sensu´-, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación). **II. RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD** por falta de Requerimiento Fiscal de Instrucción, la actuación irregular de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la falta de seguimiento de los carriles normales de atribución de la causa al Juez competente y el incumplimiento de la acordada 37/12 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en cuanto a la adjudicación de causas, interpuesto por las defensas de Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Williams Triana Peña, Carlos David Pardey Rozo, Carlos Miguel Potes Ramírez, Germán Emilio Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Mario Alberto Lara Guerra, Diana Cristina Suárez Heredia, Edilberto Vargas Fernández, Víctor Alfonso Camargo López, Juan Alberto Banesevich, Jorge Eliécer*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Ramírez Cuartas y Gabriel Esteban Zilli, sin costas, por no darse en la especie, las causales previstas en los artículos 166, 167, 170 y concordantes, todos ellos a `contrario sensu´, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. ***III. RECHAZAR EL PEDIDO DE NULIDAD*** *interpuesto por las defensas de Williams Triana Peña, Mario Alberto Lara Guerra, Germán Emilio Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Juan Alberto Banesevich, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas y Gabriel Esteban Zilli, en relación a todas las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24 en las presentes actuaciones, porque habrían sido dispuestas sin motivación suficiente, sin costas, toda vez que el Tribunal no advierte que aquí se reúnan los recaudos de los artículos 166, 167, 170 y concordantes- todos `a contrario sensu´-, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.* ***IV. RECHAZAR el reclamo de NULIDAD*** *realizado por las defensas de Williams Triana Peña, Guillermo Adolfo Heisinger, Mario Alberto Lara Guerra, Germán Emilio Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Diana Cristina Suárez Heredia, Edilberto Vargas Fernández y Víctor Alfonso Camargo López, respecto de los actos acusatorios y de todos los autos de imputación y mérito desde el inicio de la causa hasta la oportunidad en que el Ministerio Público Fiscal y la querella realizaran sus alegatos, inclusive, por no haberse determinado en ellos el objeto procesal ni haberse descripto correctamente las conductas atribuidas a cada uno de los imputados, sin costas por no darse en autos los supuestos establecidos en los artículos 166, 167, 170 y concordantes todos `a contrario sensu´, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación…* ***VII. RECHAZAR el planteo de NULIDAD*** *del inicio de la causa 13528/13 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1, Secretaría 1 de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires en razón de haberse llevado adelante sin una hipótesis delictiva determinada, sin costas (artículos 166, 167, 170 y concordantes, todos a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).* ***VIII. RECHAZAR el planteo de NULIDAD*** *de la incorporación de los legajos de escuchas telefónicas formados a raíz de las intervenciones telefónicas ordenadas oportunamente en la causa 13528/13 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1, Secretaría 1 de la localidad San Isidro, provincia de Buenos Aires, interpuesto por las defensas de Williams Triana Peña y Mario Alberto Lara Guerra, por afectación del principio de preclusión procesal, toda vez que no se han acreditado en el legajo las circunstancias aludidas por los Dres. Mariano*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Silvestroni y Catalina Santoro, sin costas (artículos 166, 167, 170 y concordantes `todos a contrario sensu´), 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación… ***XI. RECHAZAR el planteo de NULIDAD*** *de los decretos del 16 de septiembre de 2015 obrante a fs. 1806/15 por el cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24 ordenara la apertura e inspección de la mercadería ingresada bajo la destinación nº 15052EC01006767S en el depósito fiscal `BINDER´, correspondiente a la operación documentada por la empresa ´EURO EXPORT S.R.L.´ del 17 de septiembre de 2015 obrante a fs. 1826/55 por el que el Juzgado antes señalado ordenó los allanamientos en autos, interpuesto por la defensa de Juan Alberto Banesevich, Jorge Eliecer Ramírez Cuartas y Gabriel Esteban Zilli, por encontrarse viciada la voluntad del Juez Instructor al disponerlos, por no haberse hallado los vicios invocados por el Dr. Germán Carlevaro, sin costas (artículos 166, 167, 170 y concordantes todos `a contrario sensu´), 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.-* ***XII. CONDENAR a GERMÁN EMILIO MARÍN LÓPEZ*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE DIEZ MIL PESOS ($ 10.000), INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, LAS INHABILITACIONES FIJADAS EN EL ARTÍCULO 876, INCISOS e), f), g) y h) del CÓDIGO ADUANERO y al pago de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional y en los que intervinieron más de tres personas, en grado de tentativa –dos hechos, identificado el primero como "Kétchup" ocurrido el 29 de agosto de 2014, en el sector de partidas de la terminal `A´ de la empresa `Qatar Airways ´ del Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", donde se incautó la cantidad de 945,5 gramos de cocaína con una pureza del 49,5 % y el segundo denominado `Arroz´ ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal `BINDER´ (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe), donde se secuestró la cantidad de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56%; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización –hecho ocurrido el 17 de enero del año 2015 cuando se requisó la cantidad de 84.955 gramos de clorhidrato de cocaína con un grado de pureza de alrededor del 70 al 98% en las diferentes muestras en el interior de la vivienda ubicada en la calle Niceto Vega 5035 de la Ciudad*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Autónoma de Buenos Aires y miembro de una asociación ilícita, calidad mantenida al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014, hasta el 17 de septiembre del año 2015, todos en concurso real entre sí, por haberse probado las hipótesis de los acusadores. (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45, 55 y 210 del Código Penal; artículos 863, 865 inciso "a", 866 segundo párrafo, 871, 872 y 876, incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero; art. 5° inciso "c" de la ley 23737 y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)… ***XIV. CONDENAR*** *a* ***CARLOS OLMEDO SILVA CÁRDENAS*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACION ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, LAS INHABILITACIONES FIJADAS EN EL ARTÍCULO 876, INCISOS e), f), g) y h del CODIGO ADUANERO, al pago de las costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional y en los que intervinieron más de tres personas, en grado de tentativa –un hecho, identificado como `Arroz´ ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal `BINDER´ (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe),donde se secuestró la cantidad de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56% y asociación ilícita, en calidad de miembro, éste ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015, que concurren en forma real por haberse demostrado las hipótesis de los acusadores (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45, 55 y 210 del Código Penal; artículos 863, 865 inciso "a", 866 segundo párrafo, 871, 872 y 876, incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)…* ***XVI. CONDENAR*** *a* ***GABRIEL ESTEBAN ZILLI*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISION, multa de cinco mil pesos ($ 5000), INHABILITACION ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, LAS INHABILITACIONES FIJADAS EN EL ARTÍCULO 876, INCISOS e), f), g) y h) del CODIGO ADUANERO, al pago de las costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional y en los que intervinieron más de tres personas en grado de tentativa –un hecho, identificado como `Arroz*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

´ ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal "BINDER" (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe), donde se secuestró la cantidad de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56% y el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, los que concurren en forma real por haberse demostrado las hipótesis de los acusadores (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45, 55, 189 bis, inciso 2, primer párrafo del Código Penal; artículos 863, 865 inciso "a", 866 segundo párrafo, 871, 872 y 876 incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)… ***XVIII. CONDENAR a WILLIAMS TRIANA PEÑA*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE SIETE (7) AÑOS DE PRISION, INHABILITACION ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, y al pago de las costas del proceso, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro, ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015, por haberse demostrado la hipótesis de los acusadores (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45 y 210 del Código Penal y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación).* ***XIX. ABSOLVER libremente y sin costas a WILLIAMS TRIANA PEÑA,*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, en orden a los hechos identificado como "Kétchup" ocurrido el 29 de agosto de 2014, en el sector de partidas de la terminal "A" de la empresa "Qatar Airways" del Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" y "Arroz" ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal "BINDER" (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; así como en relación con el hecho vinculado al secuestro de material estupefaciente en la vivienda ubicada en la calle Niceto Vega 5035 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 17 de enero de 2015 por los que fuera acusado, por no haberse demostrado las hipótesis de los acusadores (artículos 3, 402, 530 y 531 estos dos últimos dos `a contrario sensu´ del Código Procesal Penal de la Nación).* ***XX. CONDENAR a MARIO ALBERTO LARA GUERRA*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISION, INHABILITACION ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, y al pago de las costas del proceso, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015, por*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

haberse demostrado la hipótesis de los acusadores (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45 y 210 del Código Penal y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)… ***XXII. CONDENAR*** *a* ***JORGE ELIÉCER RAMÍREZ CUARTAS*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO PENAL, LAS INHABILITACIONES FIJADAS EN EL ARTÍCULO 876, INCISOS e), f), g) y h) del CÓDIGO ADUANERO y al pago de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional y en los que intervinieron más de tres personas en grado de tentativa –un hecho, identificado como `Arroz ´ ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal `BINDER´ (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe), donde se secuestró la cantidad de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56% y asociación ilícita, en calidad de miembro, hecho ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015, que concurren en forma real, por haberse demostrado las hipótesis de los acusadores (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45, 55 y 210 del Código Penal; artículos 863, 865 inciso "a", 866 segundo párrafo, 871, 872 y 876 incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)…* ***XXV. CONDENAR a JORGE ENRIQUE TRUJILLO SÁNCHEZ*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, y al pago de las costas del proceso en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro; hecho ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015 por haberse demostrado la hipótesis de los acusadores, la que se tiene por compurgada en razón del tiempo cumplido en detención (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45 y 210 del Código Penal y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)…* ***XXVII. CONDENAR a JUAN ALBERTO BANESEVICH*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, LAS INHABILITACIONES FIJADAS EN EL ARTÍCULO 876, INCISOS e), f), g) y*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

*h) del CÓDIGO ADUANERO y al pago de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional en grado de tentativa –un hecho identificado `Arroz´ ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal `BINDER´ (sito en la calle 1721 -exBiedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe), donde se secuestró la cantidad de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56%, por haberse demostrado la hipótesis de los acusadores; la que se tiene por compurgada en razón del tiempo cumplido en detención (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45 del Código Penal; artículos 863, 866 segundo párrafo, 871, 872 y 876 incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)… **XXIX. CONDENAR a JUAN CARLOS OJEDA,** de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACION ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, y al pago de las costas del proceso, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro, hecho ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015, por haberse demostrado la hipótesis de los acusadores; la que se tiene por compurgada en razón del tiempo cumplido en detención (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45 y 210 del Código Penal y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación). **XXX. CONDENAR a CÉSAR ANDRÉS MACÍAS LOOR,** de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONDENA, CON MÁS LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL CODIGO PENAL, y al pago de las costas del proceso, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro, hecho ocurrido al menos desde comienzos del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015, por haberse demostrado la hipótesis de los acusadores; la que se tiene por compurgada en razón del tiempo cumplido en detención (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 45 y 210 del Código Penal y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)… **XXXII. ABSOLVER libremente y sin costas a EUGENIO NADIN ARDILA ANGULO**, de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro por el que fuera acusado, por no haberse demostrado la hipótesis de los acusadores (artículos 3, 402, 530 y 531 estos*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

últimos dos "a contrario sensu" del Código Procesal Penal de la Nación). ***XXXIII. ABSOLVER libremente y sin costas a CARLOS DAVID PARDEY ROZO,*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro por el que fuera acusado, por aplicación del principio de la duda (artículos 3, 402, 530 y 531 estos últimos dos `a contrario sensu´ del Código Procesal Penal de la Nación).* ***XXXIV. ABSOLVER libremente y sin costas a CARLOS MIGUEL POTES RAMÍREZ,*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro por el que fuera acusado, por no haberse demostrado la hipótesis de los acusadores (artículos 3, 402, 530 y 531 estos últimos dos `a contrario sensu´ del Código Procesal Penal de la Nación).* ***XXXV ABSOLVER libremente y sin costas a GUILLERMO ADOLFO HEISINGER,*** *de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro por el que fuera acusado, por no haberse demostrado la hipótesis de los acusadores (artículos 3, 402, 530 y 531 estos últimos dos `a contrario sensu´ del Código Procesal Penal de la Nación)",* cuyos fundamentos se dieron a conocer el día 7 de septiembre de 2020.

II. Contra ese pronunciamiento se dedujeron los siguientes recursos de casación:

1) La doctora Ximena de las Mercedes Requeijo abogada por la Dirección General de Aduanas - AFIP, División Causas Penales por Narcotráfico, con el patrocinio letrado de Pedro Alberto Manuel Parra**,** interpuso un recurso de casación contra los puntos **XXXII; XXXIII; XXXIV y XXXV** de la sentencia, el que fue concedido por el tribunal *a quo* el 7 de octubre del 2020 y mantenidos en esta instancia el 13 de octubre del mismo año.

Fundó sus presentaciones en el inciso 2° del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Entendió que la resolución recurrida adolece de inobservancia de las normas que el código de forma establece bajo pena de nulidad, incumpliendo con los requisitos establecidos en los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPPN.

Sostuvo que contiene una fundamentación aparente en violación a las reglas de la lógica, la

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

experiencia y el sentido común, lo que la torna arbitraria.

a. De la valoración de la prueba efectuada por el tribunal respecto de **Eugenio Nadin Ardila Angulo**, indicó que *"…esta parte querellante considera que la sentencia absolutoria a la que arriba el Tribunal resulta equivocada toda vez que los elementos valorados aisladamente respecto a la conducta desplegada por Angulo los hacen arribar a una conclusión muy alejada respecto a la participación real del imputado en los hechos"*.

En tal sentido, señaló que el tribunal *"…analizó de manera fragmentada tanto la prueba obrante específica respecto de Angulo dentro del conjunto de sus consortes de causa, hoy condenados, y como miembro activo de la organización en la cual él se encontraba inserto y el aporte concreto que Angulo efectuó para esta organización narco criminal, de hecho sostenemos que su viaje a la Argentina es precisamente para formar parte de esta organización que venía prosperando, y es convocado por el propio Silva Cárdenas el cual lo acoge en su domicilio justamente por ser de su conocimiento previo, ser de su confianza y mantener una relación de amistad con él"*.

Sobre esa base, alegó *"¿Cómo un líder narco criminal -Silva Cárdenas hospedaría a alguien en su propio domicilio particular sin cerciorarse de su entero compromiso para con sus negocios espurios? ¿Acaso alguien permitiría el acceso a su ámbito más íntimo a un simple amigo de la escuela de policías de Colombia? Creemos que estos dos interrogantes no hacen más que demostrar la extrema confianza de Silva Cárdenas en Ardila Angulo, confianza que este último pretendía capitalizar apostando a la prosperidad económica prometida a su novia"*.

En virtud de ello, solicitó se revoque la resolución absolutoria respecto a **Ardila Angulo** y lo considere miembro de una asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), condenándolo a la pena de siete (7) años de prisión, solicitada por esa querella al momento de efectuar el alegato, más la inhabilitación absoluta por tres años (cfr. art. 12 del CP).

b. Valoración de la prueba respecto de **Carlos**

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

David Pardey Rozo y **Carlos Miguel Potes Ramírez**.

En primer lugar, respecto de **Pardey Rozo** indicó que "*…esta querella entiende que Pardey Rozo por su grado de educación estaba en conocimiento y colaboraba en forma activa dentro de la organización manejando y proveyendo de documentación legal respaldatoria, logística como celulares o chips, entregando sobres con dinero en efectivo, cambiando dinero, facilitando un lugar seguro para reuniones o encuentros de sus jefes fuera del ojo público*".

Señaló que el imputado –a su entender- tenía pleno conocimiento de para quien trabajaba, de dónde provenían los fondos que él cambiaba de pesos a dólares, de euros a dólares, las exorbitantes cantidades de dinero y cuál era su rol específico dentro de la organización.

Apuntó que el tribunal en su fallo omitió valorar "*…1) las conversaciones telefónicas donde quedó acreditado que sacaba pasajes aéreos y de buquebus a otros miembros de la organización; 2) el cambio de grandes cantidades de dinero de miembros de la organización y utilizando para ello un circuito informal lo que prueba también que conocía muy bien el origen ilícito de esos fondos; 3) facilitó la tramitación de documentación migratoria a otros miembros; 4) proveyó de chips y telefonía celular; 5) proveyó de su propia vivienda para que miembros de la organización mantuviesen reuniones; 6) quedó establecido que cuando le hablan de sumas de dinero exorbitantes como lo es 10 millones de pesos no solo no se asombró sino que brindó una solución a cómo lo iba a cambiar a dólares (en partes); 7) quedó establecido que cuando le hablaban en código, tampoco se sorprendió sino todo lo contrario entendió perfectamente el código y pudo contestar (uno de los ejemplos fs. 1296/1310 Ibarra Ramirez le dijo `que le consiga un remis a la niña para que venga con eso" y Pardey Rozo le contestó "ya está llegando a la casa y tiene eso´, en suma consideramos que hay prueba suficiente respecto a la participación de Rozo que el Tribunal dejó de valorar para centrarse de manera parcializada al momento de analizar la conducta del imputado lo que le hizo arribar a una conclusión equivocada*".

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Concluyó que *"…el aporte que desde su específico rol Pardey Rozo desplegó, ese APORTE (consistente en prestar su domicilio, cambiar dinero, entregar dinero, asesorar con trámites migratorios, facilitar chips y telefonía celular, ut supra destacado) ese APORTE es el que brindó a la sociedad delictiva investigada y es por el que debe responder dado que quedó probado que su trabajo fue vinculante a la dinámica del grupo"*.

Por ello, solicitó se revoque la sentencia recurrida y se condene a Carlos David Pardey Rozo como miembro de una asociación ilícita (art. 210 del C.P) a la pena de siete (7) años de prisión e inhabilitación absoluta por tres años más (cfr. art. 12 del CP).

Por otro lado, respecto a la prueba valorada en contra de **Potes Ramírez**, señaló *"…que resulta a todas luces equivocada y constituye un análisis parcializado de la prueba existente ya sea porque no fue sopesado en su conjunto o manifiestamente fue dejado de valorar lo cual hace llegar a una conclusión equivocada lo cual queda plasmado en la sentencia absolutoria a su respecto"*.

Entendió que *"…Potes Ramírez con su aporte llevó a cabo, y resultó ser un miembro activo, con un aporte que se puede verificar en más de una oportunidad y a sabiendas de que formaba parte de esta asociación ilícita investigada. Intentar, como pretende el Tribunal, hacer un análisis desde la propia perspectiva del imputado y partir desde un punto hipotético de si pudo o no representarse que su jefe (Vargas) integraba una asociación criminal no se encuentra ajustado a un análisis con sana crítica y la lógica que deviene impuesta para un pronunciamiento de esta naturaleza"*.

Sostuvo que *"…la participación de POTES RAMIREZ consistió en recibir y ejecutar órdenes y directivas de sus superiores (MARIN LOPEZ, VARGAS FERNANDEZ Y HENRY IBARRA RAMIREZ), dar cumplimiento a esas directivas y asistirlos en sus requerimientos con fines criminales"*.

Cuestionó la interpretación efectuada por el *a quo*, pues sostuvo que *"…pareciera que como no tenían un nivel de vida lujoso es prueba suficiente para eximirlos de su*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

responsabilidad nuevamente dejando de lado toda la demás prueba en su contra y desconociendo que en este tipo de organizaciones no todos sus miembros gozan de un alto estándar de vida sino que hay estratos claramente identificados y niveles altos y bajos. Nada dice el tribunal respecto a los antecedentes penales obrantes en USA y respecto a una causa por drogas y nada dice tampoco de su viaje a Sudáfrica conforme los informes de los investigadores, siendo que era una persona de escasos recursos, pero que pese a ello logra tramitar con ayuda de Pardey Rozo tarjetas de crédito en un banco de la argentina y hasta el canje de un pasaje aéreo por el sistemas de puntos o millas, que obviamente fueron adjudicadas al gasto de esas tarjetas de créditos".

En definitiva señaló que *"[q]ueda claro también, a esta altura que tanto Pardey Rozo y su carrera a ganarse la `lealtad de Marín López´ conforme el mismo Tribunal sostiene y Potes Ramirez (el cual tiene innumerables pruebas de `lealtad´, basta el ejemplo del servicio de cable colocado en la casa de Vargas Fernández a su nombre) que ambos estaban en el nivel más bajo de la organización, eso no quiere decir que no pertenecieran a la misma, de hecho todo lo contrario, no solo quedo probado que pertenecían sino que tenían perspectivas de un futuro en la organización, como en el claro ejemplo de Pardey Rozo que hacía lo que se le pedía para ganarse esa `lealtad´"*.

Por ello, solicitó se revoque la sentencia absolutoria respecto al imputado Potes Ramírez, y se lo condene por ser miembro de una asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), a la pena solicitada por la querella, consistente en siete años de prisión y la inhabilitación absoluta por tres años más (cfr. art. 12 del CP).

c. Valoración de la prueba respecto a **Guillermo Adolfo Heisinger.**

La parte querellante entendió que *"…el Tribunal yerra en su análisis respecto al accionar desplegado por Heisinger como si el mismo fuera materia de análisis respecto al objeto procesal que está bajo investigación en otra causa seguida contra su persona por lavado de dinero y*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

por ese motivo se lo exime de responsabilidad en esta investigación y en esta asociación ilícita comprobada en los presentes actuados".

En base a ello, indicó que *"…la gran cantidad de empresas y las maniobras descriptas por Heisinger pareciera que lo colocan para ser analizado en el contexto del objeto procesal de la causa seguida exclusivamente por lavado de dinero y automáticamente lo excluyen de los presentes actuados, cuando esta parte sostiene y probó (…) que el accionar de Heisinger no solo existió y es verificable en esta causa sino que con su `aporte´ quedó vinculado a la dinámica de este grupo de personas que fueron condenadas en esta causa"*.

Explicó que el aporte consistió "*…en todo el asesoramiento legal necesario para crear una estructura societaria de apariencia legal, como así también de los documentos de identidad (DNI) ofreciendo su propio domicilio de la calle Alvear, necesarios para llevar a cabo el asiento de miembros de la organización en la República Argentina, como esta querella manifestó al momento de alegar. Aporte que además del asesoramiento legal tenía y sin lugar a dudas estaba a su disposición lista para ser ofrecida una estructura societaria sólida para ser utilizada por sus clientes los cuales hoy algunos se encuentran prófugos y otros condenados en esta misma investigación"*.

Remarcó que "*…no era menor la cantidad de empresas de las cuales formaba parte [Heisinger] y que no tenían cuit activo, por lo cual entendemos que estaban en situación de stand by o dormidas pero constituidas con anterioridad y preparadas para utilizarlas cuando la organización las requiriese"*.

Aunado ello, señaló que el tribunal tampoco analizó el viaje que efectuó el imputado con Lara Guerra a Uruguay, en tal sentido apuntó que no encuentra sustento "*…la explicación brindada a su respecto por el propio Heisinger, justificando el viaje a Uruguay con Lara Guerra porque Triana Peña quería exportar o mandar embriones de una raza a Colombia, lo cierto es que no figura ningún documento aduanero que valide o respalde sus dichos, la exportación de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

embriones lleva no solo una presentación de PERMISO DE EMBARQUE y controles aduaneros sino también la intervención de terceros organismos como el SENASA, y no obra ninguna tramitación ni documentación al respecto que validen sus dichos".

Por último, advirtió el Tribunal no tuvo en cuenta la educación y alto grado de formación académica del nombrado, sosteniendo que "*…no podía desconocer para quien trabajaba, a quien asesoraba y de donde provenían los pagos por sus honorarios profesionales. Es más el imputado se aventura a desafiar tanto el contexto donde está inmerso como la prueba en su contra y manifiesta abiertamente: `no hay fotos mías contando plata´, lo cual es verdad, no no existen fotos de Heisinger contando dinero pero muy lejos esta esa situación de borrarlo y/o alejarlo del contexto donde si está inmerso y el contexto es nada menos que una organización narco criminal y lo cierto es si hay en la causa escuchas telefónicas que hacen alusión a sumas importantes de dinero, conversaciones con Lara Guerra desde su teléfono 1148152251 (fs. 865/876), las cuales ni Heisinger ni su defensa pudieron explicar y mucho menos derribar*".

Es por ello que solicitó se revoque la sentencia absolutoria y se condene al imputado Guillermo Adolfo Heissinger por ser miembro de una asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), a la pena solicitada al momento de efectuar la acusación consistente en siete años de prisión y la inhabilitación absoluta por tres años más (cfr. art. 12 del CP).

Hizo reserva del caso federal.

2) Los defensores particulares de **Williams Triana Peña**, doctores Julio E.S. Virgolini y Mariano H. Silvestroni, interpusieron recurso de casación contra los puntos **I; II, III; IV; VII y XVIII** de la sentencia, el que fue concedido el día 7 de octubre de 2020 y fue mantenido en esta instancia el día 13 de octubre de ese mismo año.

Fundamentaron su recurso en los arts. 456 y concordantes del CPPN; art. 18 CN, art. 8 CADH, art. 14 PIDCyP y doctrina del precedente Casal -Fallos 328:3399-.

a. En primer lugar, advirtieron en la

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

resolución recurrida *"…la existencia de duda al utilizar siempre el condicional para referirse a las circunstancias que involucran a nuestro cliente, incurriendo con ello en una violación del principio de inocencia, en falta de fundamentación en los términos del art. 404 del Cppn y, consecuentemente, en arbitrariedad manifiesta"*.

En base a ello, sostuvieron que *"…denotan duda y no certeza y por ello resultan inconciliables con el dictado de una sentencia condenatoria (…) en particular en cuanto hace a esta causa y a esta sentencia, la existencia de duda no requiere ni siquiera acudir al examen de la prueba reseñada en la sentencia: surge de las propias palabras utilizadas por el Tribunal en su argumentación y por ello torna aplicable la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes Vega Giménez y Carrera".*

Así, solicitaron que se deje sin efecto la sentencia condenatoria, se aplique al caso el principio de inocencia, y se disponga la absolución de Williams Triana Peña por el delito por el que fue condenado. En subsidio, solicitaron la anulación de la sentencia por falta de fundamentación y arbitrariedad (cfr. arts. 404 y 456 inc. 2 CPPN).

b. Por otro lado, señalaron la falta de pruebas en contra de su asistido. Indicaron que "*…se afirma que WTP integró una asociación ilícita que funcionó entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, pero resulta ser que durante ese lapso apenas estuvo unas pocas horas en el país*".

Explicaron que "*…visitó la Argentina con destino a la ciudad de Iguazú para mantener una reunión respecto de la cual el Tribunal no ha podido establecer ni su contenido ni sus pormenores y ha reconocido expresamente… la situación de duda respecto del carácter y los motivos de la intervención de nuestro cliente*".

Por ello, señalaron que "*…la sentencia valora (para considerarlo miembro de la banda), el hecho de ser hermano de su supuesto jefe (Erman Triana Peña) y el haber concurrido a una reunión en la ciudad de Iguazú `quizá´ por pedido de su hermano (…) Esa falta de evidencias respecto de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

WTP está expresamente reconocida en la sentencia cuando en el capítulo relacionado con nuestro cliente se cita expresamente a los investigadores, admitiendo que "Pucci y Robledo, coincidieron que ***la investigación sobre Williams Triana Peña, 'no se había profundizado'"***.

Se quejaron de que la Fiscalía durante los alegatos hizo alusión a "los Triana Peña", indistintamente, incluyendo en ese conjunto a Erman Triana, a Johana Triana, al esposo de ésta (Chucho), a otros hermanos y familiares, y a Williams Triana Peña.

Por ello, sostuvieron que "…*esa referencia global es otra confesión más de que no hay pruebas respecto de WTP* [en efecto] *Yohana y `Chucho´ se encuentran a derecho frente a la justicia argentina, declararon en la causa conexa por lavado de activos y jamás ningún fiscal ni juez les atribuyó los hechos que (arbitrariamente, sin juicio previo y sin pruebas) les atribuye esta sentencia para fundar la condena respecto de WTP".*

Señalaron la inexistencia de un sistema racional de valoración probatoria, deduciendo que "…*el Tribunal no expresa el recorrido intelectual seguido por el razonamiento y no explicita las razones profundas de la convicción (no de la certeza) en el veredicto* (…) *la defensa requirió del Tribunal un esfuerzo intelectual superador de la precariedad de los alegatos de la acusación. No lo logró".*

Indicaron que la sentencia es arbitraria por haber violado las reglas racionales de valoración de la prueba, *"…sus fundamentos se reducen a un enredo de transcripciones de procedimientos policiales salpicado de distintas conjeturas o de apreciaciones sólo expresadas en potencial"*.

También, se quejaron de que *"…el Tribunal repitió el principal de los errores del alegato acusatorio de la fiscalía, toda vez que… no hizo otra cosa que fundar su conclusión en la reunión de solo dos circunstancias ambiguas y conjeturales… [u]na de ellas está representada por la relación familiar entre WTP y su hermano sospechado de narcotráfico, y la otra… por la presencia de WTP en una reunión con dos coimputados, presencia que la sentencia*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

interpreta en función de aquella misma relación familiar como lo estableció en su momento James Frazer y lo desarrolló luego Ken Wilber: la regla de la semejanza y la del contagio".

Infirieron que "*…la totalidad de la evidencia disponible en esta causa ha sido interpretada en clave de similitud y cercanía… vulnera el derecho de defensa, porque lo que hace la sentencia es expresar el prejuicio de los jueces, lo que tienen in pectore, sus sensaciones que en definitiva son las mismas sensaciones de los policías que intervinieron, pero no transmiten las verdaderas razones por las cuales pretenden soportar la tesis de que WTP es culpable, y eso no es confrontable racional o lógicamente"*.

Sostienen entonces que "*…decanta en una decisión que se basa en la semejanza y en la contaminación: todos los imputados son colombianos, algunos son parientes entre sí, un gran número de ellos se conocen: ergo están todos en lo mismo, si uno es narcotraficante todos lo son".*

c. En otro orden de ideas, se agraviaron de la errónea aplicación de la ley sustantiva respecto a la aplicación del tipo del art. 210 del CP.

Concibieron que la sentencia no pudo afirmar con certeza cuáles serían las conductas concretas de WTP que permitirían ser consideradas una "intervención" en la banda.

A su modo de ver, la resolución recurrida "*…afirma la existencia de una asociación ilícita que operaba en la Argentina entre agosto del 2014 y septiembre del 2015 (importando estupefacientes que luego nuevamente serían exportados a otros países y brindando una apariencia legal a los activos producidos a partir de estas operaciones) y otorga a WTP la calidad de supuesto intermediario entre los estratos superiores e inferiores de ella (sin precisar ningún acto concreto en el que se refleje inequívocamente ese rol de intermediación)".*

Señalaron la "*…falta de intervención en los `delitos de la banda´ (como es el caso merced a la absolución), es preciso acreditar comportamientos concretos, que sean distintos a los delitos, que no se identifiquen con ellos, pero que permitan establecer dicha pertenencia con el*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

grado de permanencia temporal y organización que exige el tipo penal. Por lo menos debería haberse probado un flujo más o menos constante de aportes a la existencia de una organización permanente… afirmar que WTP era un enlace calificado supone atribuirle una actividad permanente o constante en la organización. Pero ésta bajo ningún punto de vista se encuentra acreditada, ni descripta fácticamente al reconstruir los hechos del caso, pues no se han registrado conversaciones ni reuniones ni intercambio alguno con los restantes imputados; tampoco actividades conjuntas, no vivía en Argentina al momento de acaecidos los hechos imputados; los investigadores reconocen no haberlo investigado ni seguido; se toma conocimiento de su existencia casi al finalizar la investigación; su vinculación con la presente causa tan solo reside en una reunión".

Asimismo, sostuvieron que la sentencia es contradictoria, *"…el hilo conductor que el Tribunal establece entre estos tres sucesos (hallazgo de droga, reunión en la casa de Erman y consecuente reunión en Iguazú) es: a) débil, porque la reconstrucción de esa reunión en la sentencia no se corresponde con los hechos relevantes que la describen; b) falso toda vez que, cualquiera haya sido el objeto de esa reunión, éste es aún desconocido y por lo tanto no puede ser interpretado como un elemento común que permita conectar los tres sucesos"*.

También, apuntaron que no existen evidencias para afirmar que Vargas Fernández hubiese estado retenido involuntariamente en Paraguay, ni que su viaje a ese país se relacione de algún modo con su defendido o con el motivo del viaje de Ibarra Ramírez y Marín López a Iguazú.

Por otro lado, creyeron que "[o]*tro de los argumentos alegados por el Tribunal para sostener una conexión entre la reunión en Iguazú y los estupefacientes hallados en Niceto Vega reside en la afirmación de la ausencia de voluntad de Henry Ibarra Ramírez y Marín López para concurrir a ésta, la cual se funda únicamente en la expresión usada por Henry (`a él también lo citaron´) cuando le explica a su amante que no lo acompañaría al viaje, pues también concurriría Marín López junto con su esposa, lo que*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

podría develar el oculto amorío de Henry… Esta interpretación no se desprende de la prueba obrante en la causa y ello revela su carácter conjetural; es por demás absurda, pues no es verosímil que dos personas que viajarían coercionados a una reunión para ser careados por un supuesto superior por la pérdida de más de 80 kg de cocaína (lo que en la tesitura del Tribunal podría ser un evento de riesgo), lo harían acompañados de sus parejas para, luego de la reunión, salir de paseo y recorrer tranquilamente las cataratas del Iguazú, como efectivamente hicieron".

Por ello, precisaron que el único hecho que se le atribuye a su defendido es haber concurrido a la reunión en Iguazú, lo que -a su modo de ver- no alcanza para subsumir la conducta en el tipo del art. 210 del CP.

d. En otro orden de ideas, alegaron la omisión de tratamiento de la actividad económica legal de Williams Triana Peña.

Así, adujeron que "*…nuestro cliente acreditó no sólo que ganó la lotería una sola vez en toda su vida, sino también su solvencia económica y la de su esposa, junto con la multiplicidad de negocios que llevaba a cabo de modo continuado… [l]a defensa presentó diversos informes contables que reflejan la evolución de su patrimonio entre los años 2004 a 2014, en los que para su mejor comprensión se discrimina el análisis de cada uno de los años y se le añade una explicación técnica"*.

Señalaron puntualmente la importancia del relato de Jorge Luis Bolaños, quien explicó no sólo la vida de la familia Triana Peña en Colombia, ya que era amigo de la familia, sino que también ratificó el principal motivo por el cual Erman Triana Peña migró a la Argentina, esto es, el secuestro y posterior asesinato de uno de sus hijos (Nicolás), de 11 años de edad, a manos de la guerrilla colombiana y luego a raíz de un enfrentamiento con el ejército.

En base a ello, sostuvieron que "*…el Tribunal no examina ni toma nota de estas evidencias cuando, inversamente, considera como una relevante prueba de cargo la falta de acreditación de la solvencia económica de los*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

imputados".

Remarcaron que esta circunstancia contradice los propios fundamentos de la absolución de Heisinger, abogado que asesoraba y llevaba adelante los emprendimientos de los Triana Peña en la Argentina, pues *"…[e]stá claro que con relación a Heisinger, la actividad económica a la que éste asesoraba no era tapadera de nada"*.

e. En cuanto a la determinación de la pena impuesta, se quejaron de que al momento de considerar los agravantes sólo se mencionó el nivel de instrucción de su defendido.

En tal sentido, señalaron *"…nunca se explica en la sentencia cómo las circunstancias agravantes se aplicarían respecto de WTP en tanto… nunca fue investigado en la causa… sólo se lo vincula a ella como consecuencia de la aludida reunión en Iguazú y a su relación filiatoria con Erman… durante el periodo en el cual el Tribunal afirma funcionó la asociación ilícita se encontraba viviendo fuera del país… acreditó no solo la licitud de su patrimonio y negocios comerciales sino también el nivel de vida que tenía en el exterior… ninguna evidencia hay de que mi cliente conociera a los restantes miembros de la presunta banda, por lo que jamás podría atribuírsele la cantidad de miembros como agravante… sólo se constató un hecho concreto (reunión de Iguazú) que lo vincularía con personas a su vez vinculadas a la banda, mientras que respecto de otros imputados (que recibieron una pena menor por la imputación referida al delito de asociación ilícita) se ha constatado multitud de intervenciones, de comportamientos vinculados y lazos estrechos"*.

Sostuvieron que no concurren circunstancias agravantes que justifiquen la imposición de cuatro años por encima del mínimo legal, *"…tampoco se justifica el silencio de la sentencia con relación a concurrentes circunstancias atenuantes, como el tiempo prolongado de prisión preventiva, que además importó la imposibilidad de ver a su familia, y el tiempo de duración del juicio en sí mismo que generó una indefinida y dolorosa situación de incertidumbre. Además, debe valorarse como atenuante su permanencia en detención*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

preventiva durante la cuarentena".

En definitiva, indicaron que la sentencia inobservó las pautas de los arts. 40 y 41 del CP y que se apartó de las circunstancias comprobadas de la causa.

f. Por último, apuntaron agravios vinculados a la formación de la causa, a su desarrollo y a la formulación de las imputaciones.

Señalaron que *"[e]sta parte (en ocasiones en solitario y en otras de forma conjunta con otras defensas) formuló un conjunto de planteos de nulidad que la sentencia rechazó de forma dogmática incurriendo, en tres falacias troncales: a) Invocar la excepcionalidad de las nulidades como criterio rector. La falacia radica en que, si es necesario invocar ese criterio restrictivo, es porque hay un vicio que, por dicha excepcionalidad, no amerita una sanción semejante. Pues de ser así, debió el Tribunal explicar cuál era ese vicio que no ameritaría tal sanción, lo que no hizo, demostrando que la invocada excepcionalidad es una pura afirmación dogmática que encubre la falta de tratamiento de los planteos de la defensa; b) Invocar ambiguamente una presunta extemporaneidad… c) Modificar el planteo de las defensas y, en consecuencia, responder algo diferente a lo planteado: de la lectura de la sentencia parecería ser que hemos planteado nulidades fundadas en puras formalidades, cuando en verdad lo que concretamente planteamos es que la formación de la causa fue ilegal (basada en mentiras) y que esa ilegalidad y esas mentiras se arrastraron a lo largo de diversos actos procesales permitiendo el fórum shopping, la falta de determinación del objeto procesal por parte del órgano competente para hacerlo y la ejecución de una formidable excursión de pesca que llevó a intervenir teléfonos porque sí y a formular imputaciones globales e imprecisas"*.

Respecto a la nulidad del inicio de la causa, indicaron que fue ilegal, *"…un armado de la SIDE que pretendió conectar al Sr. Silva Cárdenas con una causa anterior (Biodiesel) que no pudo ser justificada por los investigadores y tampoco en la sentencia condenatoria, que hizo que se formara una especie de legajo (un*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

desprendimiento) que permitió evitar el sorteo de ley y la formulación de un requerimiento Fiscal violando el debido proceso y la imparcialidad judicial".

Concretamente apuntaron que la sentencia no refuta que *"…[n]o existe ninguna prueba que corrobore la existencia de las supuestas constancias que surgirían de una causa que tramita en la provincia de Córdoba que avalarían la información brindada por ese organismo de inteligencia… Jamás se pudo establecer a lo largo de todo el proceso la supuesta conexión de Carlos Silva Cárdenas con la causa de Biodisel… Tampoco pudieron acreditarse las supuestas operaciones de narcotráfico de Silva Cárdenas en Chile… Es inverificable la supuesta existencia de fuentes confidenciales a las cuales aluden… Los presuntos hechos de narcotráfico a los que se alude pero jamás se especifican, habrían ocurrido fuera del país, no componen la hipótesis delictiva y no fueron acreditados… No se determinaron cuáles son los supuestos indicios recogidos por contrainteligencia… Cuando se individualizó al presunto `Charly´ este no era Silva Cárdenas… No se pudo establecer ninguna conexión ya sea por la existencia de un vínculo subjetivo entre las personas investigadas o por uno objetivo en virtud de los hechos investigados… Esta causa inicia con dos líneas de investigación paralelas: por un lado, la Side que aporta los aludidos datos falsos entre los que se encuentra el nombre de Silva Cárdenas y, por el otro lado, la Gendarmería Nacional que supuestamente investigaba los elementos secuestrados en la causa Biodisel. Como la línea investigativa de la Gendarmería Nacional no conduce a ninguna nueva evidencia el magistrado desecha la misma y decide unificar la investigación de la Side con la de Gendarmería Nacional, momento a partir del cual se desvanece la investigación respecto de los elementos provenientes de la causa Biodisel y prevalece la hipótesis de Silva Cárdenas"*.

Por otro lado, respecto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, apuntaron que *"…las intervenciones dispuestas en las resoluciones de fecha 4/6/14 (fs. 280/5); 2/7/14 (fs. 321/2); 23/7/14 (fs. 366), 21/7/14 (fs. 372) y de todas las demás que son su consecuencia,*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

fueron infundadas y todo lo que dice la sentencia para sostener lo contrario no es más que un refrito de afirmaciones dogmáticas y referencias de otras piezas del expediente que no tienen relación con el teléfono intervenido".

En cuanto a la nulidad por falta de determinación del hecho, los defensores memoraron que *"… las citas de Maier y Sancinetti que desgranamos en los alegatos sobre los recaudos de una acusación en cuanto ésta debe establecer las circunstancias de modo, lugar y tiempo de una conducta concreta que permita realizar luego el proceso de subsunción legal. Lo cierto es que el Tribunal no se tomó en serio ni la doctrina judicial ni la opinión de la jerarquizada doctrina. Y, en consecuencia, la sentencia recurrida se aparta de la doctrina judicial de la Corte y convalida una nulidad de orden público (de esas que conforme el art. 168 Cppn pueden ser dispuestas en cualquier momento procesal), una vez más mediante afirmaciones puramente dogmáticas que, como no podía ser de otro modo, la hacen caer en su propia trampa: ella misma (la sentencia) no puede atribuirle a WTP una conducta concreta que pueda ser sometida luego al proceso de subsunción legal"*.

Respecto a la falta de oralidad y ruptura de la continuidad del juicio, mencionaron que *"[c]uando la Casación examine las actas de debate verá que el juicio nunca fue continuo, sino que siempre se desarrolló al filo de los 10 días hábiles transformando una excepción en regla. La sentencia no lo niega, pero a pesar de ello rechaza la nulidad (…) Es inaudito el argumento de la sentencia en cuanto pretende poner en cabeza de las defensas la responsabilidad de las demoras (cuando dice que alegamos varios días), primero, porque denota el poco valor que se le asigna al derecho de defensa (al Tribunal parecería importarle más sus problemas de agenda que dar a las defensa el tiempo necesario para ejercer su labor) y segundo porque el alegato de esta defensa (el más largo) no superó las 8 horas lo que si demoró tres semanas fue por la dinámica (inconstitucional) impuesta por el propio Tribunal. Luego vino la cuarentena, los sucesivos pedidos de habilitación de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

feria desestimados, la espera de un programa especial que confeccionó el Consejo de la Magistratura, para finalmente terminar el juicio mediante una plataforma (Google meet) que existe desde hace varios años y que se podía haber utilizado desde el primer día de la cuarentena".

Puntualmente, entendieron que el tribunal *"… hizo suyas las conclusiones escritas de `los investigadores´ respecto de las cuales no permitió a las defensas interrogar en lo atinente al fundamento de las mismas, desoyendo el resultado de la oralidad: precisamente porque en las audiencias orales no se produjo prueba de cargo (…) no hubo oralidad porque no hubo continuidad y porque el juicio fue una representación: y entonces se dicta una condena sobre la base de informes no confrontados (porque no se permitió confrontar), desnaturalizándose así la esencia de la oralidad"*.

Finalmente, indicaron que mantenían la nulidad vinculada a la causa conexa por lavado de activos, en tanto ella requiere de la incorporación de elementos probatorios que no han sido producidos durante el juicio oral.

En definitiva, solicitaron se case la resolución impugnada, se haga lugar a las nulidades interpuestas y, en subsidio, case la sentencia recurrida y se dicte la absolución de WTP.

3) El Fiscal General, doctor Diego Velasco, interpuso recurso de casación contra los puntos **XIX** y **XXXV**, el que fue concedido por el tribunal *a quo* el día 7 de octubre de 2020, y mantenido en esta instancia el día 9 de octubre del mismo año.

Fundó la vía impugnativa en ambos incisos del art. 456 del CPPN, y en la doctrina de la arbitrariedad.

En primer lugar, el representante del Ministerio Público Fiscal efectuó una sinopsis de lo alegado en la audiencia de debate oral, analizando la conducta de cada uno de los imputados, la materialidad de los hechos y la asignación de responsabilidad, incluyendo la pena que solicitó respecto a cada uno de ellos.

Luego, recordó lo alegado por las defensas de William Triana Peña y Adolfo Heisinger en el debate.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Así, posteriormente se abocó a analizar -por separado- la situación de William Triana Peña y de Heisinger en base a los fundamentos dados por el tribunal *a quo* para absolverlos.

Indicó que "*…si bien el Tribunal tuvo por probado la existencia de una organización en fecha aún no determinada pero antes del mes de agosto de 2014 y hasta el 17 de septiembre de 2015, dedicada a cometer entre otros delitos el del tráfico ilícito de estupefaciente, ha realizado una incorrecta evaluación de los hechos y de los elementos probatorios, toda vez que esta parte ha logrado demostrar tanto la intervención como la pertenencia jerárquica de Williams TRIANA PEÑA en la organización, situación que a nuestro entender fue evaluada por el tribunal de manera contradictoria y sesgada*".

En tal sentido, destacó "*…la existencia de una organización narcocriminal trasnacional dedicada al tráfico y contrabando de estupefacientes, la cual estaba en manos de los hermanos Williams y Erman TRIANA PEÑA, quienes tenían un total control sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo y eran obedecidos por los integrantes de los eslabones inferiores*".

Sostuvo que de "*…de las intervenciones telefónicas y de las tareas de campo que fueron corroboradas en las audiencias por los oficiales de las distintas fuerzas de seguridad que intervinieron en esta investigación… Williams y Erman eran los jefes de la organización y se encontraban en igual de condiciones: eran lo mismo. Así se referían LARA GUERRA y HEISINGER cuando hablaban por teléfono*".

Remarcó que Lara Guerra en los emails que enviaba con las rendiciones de cuentas se los mandaba tanto a Willo (Williams) como al Mono (Erman).

También apuntó una conversación del abonado 4815-2251, producida el día 8 de agosto de 2015, grabada en el CD n° 366 de la que se desprende que "*…a modo de chiste Heinsiger explica a qué se dedica: negocios ilícitos*".

En base a ello, sostuvo que "*…todos sabían que Willo tenía problemas relacionados con los estupefacientes y*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

que no iba a poder abrir una cuenta a su nombre".

Por lo que entendió que *"…fueron indicios que hacen presumir de la pertenencia de Williams en la jerarquía de la organización"*.

Recalcó la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Iguazú provincia de Misiones luego de que el 17 de enero de 2015 fueron hallados por personal de la Policía Federal Argentina 85 kilos de cocaína que se encontraban en la casa ubicada en Niceto Vega 5035, de esta ciudad.

Y concluyó que del análisis de las intervenciones telefónicas y seguimientos se determinó que los imputados habían sido citados de urgencia para dar explicaciones de la pérdida de ese material estupefaciente, y que esta situación responde a la existencia de una autoridad y de una verticalidad en manos de Williams Triana Peña.

Por ello, cuestionó que el tribunal oral "…*tuvo por probado que la casa de Niceto Vega 5035 pertenecía a la organización criminal y que después de ese hallazgo MARIN LOPEZ, VARGAS FERNANDEZ e IBARRA RAMIREZ fueron citados a dar explicaciones ante Williams TRIANA PEÑA pero sin embargo considero que de las evidencias la organización criminal estaba* [sólo] *en cabeza de Erman TRIANA PEÑA"*.

Y señaló que estos argumentos son incorrectos, infundados y sesgados, ya que ha quedado demostrado que Williams TRIANA PEÑA se encontraba en el mismo nivel que su hermano Erman TRIANA PEÑA y además tenían control de los hechos de tenencia y contrabando de estupefacientes.

Consideró que "…*en los casos como el presente en el que se investiga y se juzga a una organización dedicada al crimen organizado se debe realizar un esfuerzo lógico distinto de un caso individual, ya que las organizaciones utilizan distintos elementos para proteger a sus jefes y en todo caso excluir a los fungibles. En este sentido, de las reglas de experiencia podemos concluir que en una organización los jefes u organizadores nunca están en contacto con el material estupefacientes el cual se encuentra en poder del eslabón fungible o inferior, como así en algunos casos tampoco tienen contacto con el dinero. Por lo tanto, existieron pruebas directas e indicios que hicieron deducir*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de manera lógica que Williams TRIANA PEÑA se encontraba en una posición en la cual manejó, conoció y organizó las actividades ilícitas aun cuando se encontraba en el exterior".

Asimismo, indicó que a la hora de analizar la calificación legal, esa parte había adoptado por una coautoría funcional, es decir, que cada uno que interviene desarrolla una actividad esencial para que el hecho se produzca, y que cada uno desarrolló una actividad que era esencial para que el hecho se produzca.

Por ello, consideró que si bien Williams Triana Peña no estuvo en Niceto Vega, ni en Ezeiza, ni en Rosario cagando el arroz, determinada que fuera la existencia de la organización, su rol en las intervenciones telefónicas y de las tareas de inteligencia que se fueron llevando a cabo sobre todo al momento de darse la reunión en Iguazú, determinaban que organizó y controló la realización de estas operaciones. Subrayó las conversaciones que tuvo con Mario Lara Guerra, Heisinger y su propio hermano.

Por todo lo expuesto, entendió que no se han seguido las previsiones que el Código Procesal impone, por cuanto en la especie, el fallo carece de una fundamentación adecuada lo que lo torna arbitrario.

Respecto a la situación liberatoria de Guillermo Adolfo Heisinger, el representante del Ministerio Público Fiscal estimó que se había realizado una arbitraria evaluación de los hechos y de la prueba.

Ello así pues, a su modo de ver "*…a lo largo del debate ha quedado completamente corroborado que Guillermo Adolfo HEISINGER, más allá de su rol como abogado a través del cual intervenía en los negocios lícitos tenía pleno conocimiento y participaba de las actividades ilícitas de la familia TRIANA PEÑA"*.

Remarcó que de las intervenciones telefónicas se desprende que "*…el 90% de la actividad de HEISINGER estaba relacionada con los TRIANA PEÑA y con su colaborador Ignacio ALTUVE quien lo asesoraba en algunos negocios"*.

Transcribió una conversación de abril de 2015, donde el imputado le consulta a Ignacio Altuve por la

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

apertura de una cuenta en Suiza, y donde éste último le explica que "…*William ya no podía tener una cuenta en Suiza porque podía llamar la atención*".

También señaló, para reforzar su postura, el viaje conjunto con Mario Lara Guerra a Montevideo realizado a mediados del mes de marzo de 2015, que fue pagado por este último, donde se dirigió a la zona bancaria, al igual que el viaje realizado ya avanzado el 2015 a Suiza para finalizar el diseño financiero que se desprende de sus conversaciones, respecto de dinero de Erman y William Triana Peña.

Apuntó también la comunicación nro. 39 obrante en el legajo del abonado 113114-2251, la cual se efectuó dos días después de la pérdida de 85 kilos de cocaína halladas en el inmueble de Niceto Vega 5035, y surge que Heinsinger tenía conocimiento de lo sucedido y que Mario Lara Guerra tenía que irse a planificar la reunión en Iguazú.

En otro orden de ideas, señaló que al momento de llevarse a cabo el allanamiento en su domicilio, Heisinger manipuló su celular e intentó comunicarse con Luzmarina Col que se hallaba en Colombia, esposa de Nelson TRIANA y con Yohana TRIANA, situación que cobró relevancia cuando posteriormente se realizó el allanamiento en el domicilio de Yohana Triana Peña y no pudo ser hallada.

Por ello, entendió que el accionar del nombrado encuadraba en la figura de la asociación ilícita, toda vez que efectivamente el imputado formaba parte de una asociación criminal pues tenía pleno conocimiento y participaba de las actividades ilícitas de los hermanos Triana Peña.

Indicó que el tribunal efectuó una errónea interpretación de los hechos y que basó la sentencia en fundamentos aparentes que afectan gravemente el procedimiento penal.

Por ello, solicitó que se revoque la sentencia de fecha 7 de septiembre de 2020, puntualmente los puntos **XIX** y **XXXV** y se condene al nombrado de acuerdo a lo solicitado oportunamente por esa parte.

Hizo reserva del caso federal.

4) Las doctoras Catalina Santoro y Luciana

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Mariel Taricco, defensoras particulares **de Mario Alberto Lara Guerra**, interpusieron recurso de casación contra los puntos **III; IV; VIII y XX** de la sentencia recurrida, el que fue concedido por el tribunal *a quo* el día 7 de octubre de 2020 y mantenido ante esta instancia el día 13 de octubre del mismo año.

Sustentaron su recurso en el inciso 2° del art. 456 del CPPN.

En primer lugar, se agraviaron del rechazo de las nulidades planteadas en la instancia anterior, destacando "*…el hecho de encontrarse sometido a un proceso turbio, irregular e inseguro que no garantizó en modo alguno resultados confiables… sumando a la situación de indefensión generada por la falta de precisión del hecho imputado y por la imposibilidad de controlar la cadena de custodia de la prueba, especialmente en referencia a las escuchas telefónicas debido a la inexistencia misma de los soportes magnéticos que contendrían las grabaciones*".

a. Respecto a la nulidad por indeterminación del hecho imputado en la acusación, indicaron que habían solicitado la nulidad de todos los actos de imputación y mérito desde el inicio de la causa hasta las acusaciones formuladas en el debate.

Indicaron que los arts. 347 y 351 CPPN exigen una *"relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos", bajo pena de nulidad. Pues, entendieron que "…la correcta intimación y descripción del hecho imputado, a lo largo de todo el proceso, posibilita el respeto por el principio de congruencia y éste, a su vez, posibilita el adecuado ejercicio de la defensa en juicio (Art. 18 CN)"*.

En tal sentido, señalaron que "[*e*]*l Sr. Fiscal basa su acusación en un solo informe firmado por el investigador Pucci, que hace referencia a una escucha, que no está transcripta, entre el Sr. Marín López y Lara Guerra, y con ello infiere conductas e imagina conductas. Pero la conducta concreta no está. No se la describe de manera precisa y circunstanciada. No describen un hecho real del mundo realizado por mi cliente. Faltan todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y así atentan contra*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

su defensa eficaz".

Citaron jurisprudencia del Alto Tribunal y doctrina.

b. Por otro lado, se agraviaron del rechazo de la nulidad de la intervención de la línea telefónica de Lara Guerra.

Entendieron no existían elementos que legitimaran la intervención telefónica de Lara Guerra, afectando sin motivo los arts. 18 y 19 de la CN.

Adujeron que "…*la intervención de la línea de nuestro asistido, no sólo fue una medida desproporcionada, sino que también fue ilegitima, ya que el día 27 de febrero de 2015, el Gendarme Pucci, se presentó en forma espontánea en el Juzgado Federal nº 12, a fin de prestar declaración testimonial y manifestó que le fue informado de un posible laboratorio o cocina de estupefacientes en la localidad de Torcuato"*.

Consideraron que, en vez de intervenir un número de una persona desconocida para la causa, violentando el art. 18 CN, podrían haberse llevado adelante otras medidas no invasivas.

Además, indicaron diversos vicios en torno a las escuchas telefónicas que, a su modo de ver, impiden su utilización como prueba de cargo.

Señalaron que "…*las grabaciones no han estado a disposición de las defensas, en la mayoría de los casos solo contamos con una transcripción o un resumen. En este contexto, la incorporación de las escuchas al proceso es inválida. En este caso esos recaudos deberían cumplirse (y no se cumplieron) en relación con los siguientes actos: a) identificación del dispositivo de conexión; b) identificación del abonado que se está grabando; c) grabación de la conversación; d) resguardo de la cinta; e) sucesivas aperturas, escuchas y utilización de las cintas por tanto le causan un perjuicio a nuestro".*

c. También se quejaron del rechazo de la nulidad de la incorporación de los legajos de escuchas telefónicas de la causa 13.528/13.

Sostuvieron que "…*la incorporación por lectura*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de los legajos de escuchas telefónicas de los Sres. Erman Triana Peña, Lara Guerra y Heisinger de la causa 13.528/13… autorizada por el Tribunal con fecha 09/10/18 afectó el principio de preclusión procesal, ya que se había rechazado dicha incorporación en la resolución del 1/12/16 y en la del 12/07/18".

Recordaron que "[*l*]*a causa 13.528/13 inició cuando a partir del programa televisivo `Hora Clave´ la Dra. Arroyo Salgado se anotició de que en Nordelta estarían los principales narcotraficantes del mundo, por lo que decidió formar una causa y remitirla a la Fiscalía para que formule requerimiento de instrucción. Sin embargo, el Sr. Fiscal, cuando formuló requerimiento de instrucción manifestó que: "de la lectura de autos no resulta posible divisar una hipótesis concreta de delito", pero igualmente dio impulso a la causa ordenando distintas medidas a partir de las cuales se inició una incursión de pesca, conforme lo manifestado por la testigo Octaviano: `el Magistrado interventor requirió a esta preventora profundas y exhaustivas tareas de investigación a fin de determinar si en Barrios cerrados y/o countries localizados en la ciudad de Tigre, entre los que se destaca la zona de Nordelta, se estarían llevando a cabo acciones interjuridiccionales organizadas destinadas a traficar sustancias estupefacientes con participación de ciudadanos extranjeros, indicando la realización de un análisis pormenorizados objetivo y crítico sobre las bases de datos de las que tiene esta dependencia"*.

"Y así es como la testigo Octaviano, según sus propios dichos en debate, comenzó a recorrer la zona de Nordelta en busca de narcotraficantes. Y en esa búsqueda, que duró casi dos años, fue encontrando elementos que fue incorporando, como por ejemplo anotaba los dominios automotores de todas las personas que ingresaban a las distintas casas del barrio Nordelta, individualizaba a los titulares y se los investigaba. Como no había una hipótesis delictiva, se investigaba a personas fundamentalmente por su nacionalidad: colombianos que presuntamente se dedicarían al narcotráfico. Ninguna evidencia que se haya producido en una causa iniciada de esta manera puede ser incorporada como

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

prueba en este expediente".

d. En otro orden de ideas, cuestionaron los hechos mediante los cuales el tribunal entendió que Lara Guerra era parte de la asociación ilícita.

Señalaron que "*…se lo condenó por el hecho de asociación ilícita, siendo que el análisis fue forzado, dado que aquellos `hechos´ que el Tribunal analizó para concluir que `tomó parte´ en la asociación, se contradicen con la prueba".*

Rebatieron afirmaciones que efectuó el tribunal *a quo* en la sentencia recurrida, así señaló *"[e]n cuanto a que la propiedad en la que residía el Sr. Lara Guerra sea propiedad de Erman Triana Peña, es una afirmación totalmente FALSA, ya que se contradice la prueba existente en el expediente. Esta defensa no sabe cómo el Tribunal arribó a dicha conclusión, dado que del domicilio de nuestro asistido se secuestró el contrato de compra-venta del inmueble, firmado el día 23 de agosto de 2011, siendo el comprador el Sr. Mario Lara Guerra, con un valor de transacción de U$S 58.000, como así también se secuestró la escritura realizada el 15 de agosto del año 2014, por ante el Escribano Marcelo Miguel Cambiaso".*

Así, consideraron que *"…esta prueba documental, fue incorporada por lectura. Evidentemente el Tribunal arribó a una conclusión en forma arbitraria, sin siquiera analizar la prueba incorporada".*

También, *"[s]egún el Tribunal Lara Guerra participó de una reunión junto a Henry Ibarra Ramiréz y Erman Triana, el día 17 de enero de 2015 – día del hallazgo del material estupefaciente en la casa de Niceto vega - a las nueve de la mañana, para que Erman les impartiera instrucciones a ambos subordinados para que averiguaran sobre lo ocurrido, afirmación que resulta FALSA, toda vez que se contradice con la prueba incorporada al debate".*

Con relación a ello, estimaron que *[é]sta afirmación realizada por el Tribunal es totalmente errónea, dado que únicamente analizó transcripciones telefónicas que no se condicen con las grabaciones, es decir que no son textuales, sino que son meras interpretaciones – en este caso*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

errónea - de lo que se escucha".

Aseveraron que la reunión no existió, y señalaron que *"…estamos frente a dos miembros de una Aestupefaciente, pero, sin embargo, uno de ellos estaba de jarana en el Dakar y el otro organizando un viaje para irse el lunes a Punta del Este - que efectivamente viajó, un par de días después y en avión-. Estas situaciones no resultan compatibles con la hipótesis sostenida".*

Asimismo, señalaron que *"[t]ampoco existió la supuesta reunión a primera hora de la mañana, dado que las antenas y las comunicaciones del 17 de enero de 2015 nos muestran otra cosa".*

En otro orden, refutaron que *"…el Sr. Henry Ibarra Ramirez, se mudó a la casa del Sr. Erman Triana Peña y el Sr. Lara Guerra tuvo que ver en esta decisión, afirmación FALSA".*

Indicaron que *"[l]o inexplicable de la conclusión a la que arriba Gendarmería y es tomada por el Tribunal, es que en el informe donde explican que lo obligaron a mudarse, analizan una comunicación donde manifiesta que compró el inmueble. Cabe señalar que, ninguno de los protagonistas de este episodio fue traídos a juicio y por tanto esta conclusión no pudo ser contrastada con los mismos".*

Por otro lado, rebatieron que "…*Lara Guerra era un sujeto fiel para la familia Triana Peña y que entregaba a modo de mensualidad, una suma dineraria a Henry Ibarra Ramirez y a German Marín López, por orden de Erman Triana, para sostener la estructura delictiva, afirmación FALSA".*

Explicaron que *"[l]o curioso, es que no existe ningún informe elaborado con el abonado de Mini -Mario Lara Guerra-, donde se haga referencia este tema. Si bien los gendarmes sostuvieron lo de la `mensualidad´ durante el juicio, lo cierto es que de los informes no surge en forma inequívoca que la `mensualidad´ realmente haya existido. Tampoco existe algún llamado o algún mail donde se ordene el pago mensual, ni siquiera se puede establecer el monto del mismo, de forma tal que no es posible afirmar que ese*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

supuesto `pago mensual´ sostenía la organización criminal".

Y entendieron que *"…con respecto a este punto, se ha incorporado prueba documental, que da cuenta de todo ello. Esta información, podría haber sido constada con testigos, es decir con todas aquellas personas que recibían los pagos y que eran parte de la actividad comercial, sin embargo, no se convocaron a los mismos, tomando una visión parcializada de los hechos".*

e. Por último, respecto al tipo penal escogido por el tribunal *a quo*, sostuvieron con citas doctrinales de Patricia S. Ziffer que no se ha podido demostrar la acción típica que el tipo exige, el "tomar parte".

Así, infirieron que ***"…****el Juzgador, se limitó a tomar las conclusiones erróneas… a las que arribó la gendarmería, hablando de una supuesta `mensualidad´".*

En tal sentido, indicaron que *"Si realmente hubiera existido la `mensualidad´, habría que ver cuál sería el monto de la misma y de qué forma cubría las necesidades de todos los miembros de la organización y que relación tendría la misma con los ilícitos que le fueron atribuidos a la organización".*

Por otro lado, señalaron que *"…a esta supuesta organización se le achacaron tres ilícitos, pero lo curioso es que en ninguno de ellos tuvo participación nuestro asistido, como así también resulta curioso que a quienes les imputaron el hecho denominado `narco arroz´ – Zilly, Rámirez Cuartas y Banesevich-, no se los condenó por el delito de asociación ilícita".*

Y entendieron que *"…la valoración de la prueba, como las propias conclusiones del Tribunal, nos llevan a la conclusión de que no se trató de una asociación ilícita, con los alcances que desde un principio se intentó darle, sino que se trató de una simple banda, que se asemeja al agravante del art. 11 inc. c de la ley 23.737 y al art. 865 inc. a del Código Aduanero… es decir el Tribunal no realizó el análisis básico requerido en el derecho penal, que es la subsunción del hecho en la norma, analizando tanto el tipo objetivo, como el tipo subjetivo".*

También mencionaron que *"…de los fundamentos*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de la sentencia, surge que la supuesta `asociación ilícita´ se encuentra compuesta por el Sr. Erman Triana Peña, Yoana Triana Peña y Henry Ibarra Ramirez – entre otros-; pero, lo curioso es que estos tres individuos a quienes se les da por probada su participación no han sido llevados a juicio oral, es decir, no han ejercido su derecho de defensa en juicio. Es más, la Sra. Yoana Triana Peña, ni siquiera reviste la calidad de imputada en los presentes actuados".

Por todo lo expuesto, sostuvieron que no se encontraba probado el delito de asociación ilícita, como así tampoco la participación de Mario Lara Guerra, por ello solicitaron se case la resolución recurrida y se resuelva conforme a derecho.

Hizo reserva del caso federal.

5) El doctor Pedro Martino, defensor particular de **Jorge Enrique Trujillo Sánchez** interpuso recurso de casación contra los puntos **III; IV; VIII y XXV** de la sentencia, el que fue concedido el 7 de octubre de 2020 y mantenido en esta instancia el día 15 de octubre del mismo año.

Fundamentó el mismo en el inciso 2° del art. 456 del CPPN.

Sostuvo que la sentencia atacada, se sustentó en una instrucción y debate que detentaron actos procesales nulos y en una arbitraria apreciación de la prueba ilegalmente obtenida (teoría del fruto del árbol venenoso) que tornó nula toda la actividad procesal posterior y sus efectos.

Entendió que existió violación al art. 18 de la CN y se vulneró el principio de legalidad, debido proceso y defensa en juicio.

En cuanto a la condena por el delito de asociación ilícita indicó que "*…la sentencia presenta un vicio explícito que se reconoce expresamente la existencia de duda al utilizar siempre el condicional para referirse a las circunstancias que involucran a Trujillo Sánchez, incurriendo con ello en una violación del principio de inocencia, en falta de fundamentación en los términos del art. 404 del Cppn y, consecuentemente, en arbitrariedad manifiesta*".

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Sostuvo que *"…de las escuchas… todas las conversaciones de Trujillo versan sobre cuestiones comerciales normales, sin ningún tipo de argumentos de los investigadores respecto de `dialogo en clave´. No existe prueba alguna de afán de pertenencia de Trujillo Sánchez a una Asociación de tres o más personas para delinquir"*.

Asimismo, detalló que *"…el teléfono tanto del Sr Marín López como de Trujillo Sánchez, son teléfonos de uso familiar comunes… No se ha encontrado en las pericias telefónicas, material alguno que vinculara a Trujillo Sánchez con actividad delictiva alguna"*.

También asentó que *"…todos los pagos encomendados por Marín López al Sr. Trujillo Sánchez son indubitablemente legales, dado que respondían como probó ésta defensa a un mutuo ante escribano que el Sr. Martins Frutoso había firmado con el Sr Marín López. La única gestión que utiliza el a-quo para involucrar a Trujillo Sanchez parte de un hecho totalmente legal e indubitado en el debate, ya que ninguna parte redarguyó de falsedad el instrumento público (mutuo), y mucho menos probó ilegalidad alguna del pago"*.

Señaló que la sentencia carece de un sistema de valoración racional de la prueba, *"Y no es porque el Tribunal no hubiera sido advertido de la precariedad lógica de los alegatos acusatorios o no hubiera sido el receptor de pedidos expresos para que se pronunciara puntualmente sobre el sistema valorativo a emplear en la sentencia. Todo lo contrario: cuatro horas (entre dos alegatos de dos defendidos) de esta defensa estuvieron dedicados a recrear histórica y conceptualmente un sistema lógico objetivo de valoración de las evidencias, de modo que cualquier decisión provenga de la demostración de la existencia o inexistencia de una conexión racional entre evidencia e hipótesis fáctica. Pero nada de eso ocurrió"*.

En efecto, entendió que el sistema utilizado por el tribunal *a quo* no expresa el recorrido intelectual seguido, y no explicita las razones profundas de la convicción (no de la certeza) en el veredicto, lo que la torna arbitraria.

Por lo demás, señaló que adhirió a las

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

nulidades que cada una de las defensas del resto de los imputados planteó en la causa. Sostuvo que cada una de ellas serán tratadas en el mejoramiento de los agravios que se hará en oportunidad de la audiencia del art. 454 del CPPN.

En definitiva, solicitó se case el interlocutorio recurrido, y se decrete la absolución de Jorge Enrique Trujillo Sánchez.

Efectuó reserva del caso federal.

6) El doctor Carlos Tomás Beldi, defensor particular de **Carlos Olmedo Silva Cárdenas** interpuso recurso de casación contra los puntos **I; II; III y XIV** de la sentencia recurrida, el que fue concedido el día 7 de octubre de 2020 y mantenido en esta instancia el día 14 de octubre del mismo año.

Fundamentó el mismo en ambos incisos del art. 456 del CPPN.

En primer lugar, se agravió del rechazo de las nulidades planteadas en la instancia anterior.

a. Respecto a la nulidad del juicio oral, alegó que el tribunal *a quo* aseveró que "…*todas las actuaciones llevadas a cabo por el Tribunal, en el marco de la pandemia de Covid 19, se enderezaron tanto a lograr la prosecución del juicio como a evitar perjuicios a las partes*". Sin embargó, contrarrestó dicha afirmación sosteniendo que existieron las siguientes irregularidades *"… i) La realización de audiencias al filo de los diez días hábiles como regla de desarrollo del juicio; ii) La citación de solo tres o cuatro testigos por audiencia de los cuales con suerte concurría la mitad; sin admitirse la citación de más testigos por audiencia; iii) El rechazo sistemático a pedidos de las defensas relativos a: aa) la reducción del número de testigos; bb) la fijación de más de una audiencia semanal; cc) la habilitación de fines de semana para realizar audiencias; dd) el inicio de las audiencias con puntualidad en lugar de las demoras habituales; ee) la habilitación de los fines de semana y de la feria judicial de enero 2020 con la finalidad de poder concluir con el juicio; iv) La prórroga de las prisiones preventivas, sobre la base de cálculos de duración del juicio que no podían ser cumplidos y que nunca*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

fueron cumplidos, ni antes, ni mucho menos luego de la cuarentena; v) El rechazo sistemático de todos los pedidos de libertad o de morigeración de la detención, salvo en los casos en que los imputados cumplieron (conforme la pena máxima pedida por las acusadoras) el tiempo para gozar de la libertad condicional. Ninguna de estas irregularidades se encontró justificada".

También, expuso que *"[s]e afirma también en la sentencia que el conflicto en torno a la falta de expediente digital obtuvo una rápida solución al brindar acceso a todas las defensas a los escritos presentados por las demás. Si bien es cierto que el Tribunal adoptó esta decisión no es menos cierto que la misma no otorgó ninguna solución a la falta de digitalización del expediente propiamente dicho, el cual jamás fue subido al sistema Lex 100. Lo mismo ocurre con la prueba que se encuentra en poder del Tribunal y, por sobre todas las cosas, aquella que se encuentra al resguardo de Gendarmería Nacional, como ser las escuchas telefónicas efectuadas en esta causa, elementos a los que no se ha tenido acceso desde el 20 de marzo del corriente".*

Asimismo *"…el Tribunal efectúa una dogmática interpretación del art. 365 en virtud de la cual estima que el contexto del Aspo puede asimilarse a la suspensión del debate oral por 30 días prevista por dicha norma, plazo temporal que afirma no se encuentra superado en esta causa. Dicha interpretación resulta por demás arbitraria toda vez que el mencionado artículo alude a la imposibilidad de reemplazo del juez, del fiscal o del defensor circunstancias estas que no acaecieron en las presentes actuaciones toda vez que ni los jueces ni las partes han tenido una imposibilidad material de participar de las audiencias de debate y el Tribunal, desde el 20 de Marzo del corriente, tuvo a su disposición múltiples plataformas digitales, algunas gratuitas y otras pagas, en las cuales podría haber dispuesto la consecución del juicio, máxime cuando la mayoría de los imputados se encontraban privados de su libertad y asistían a las audiencias, con anterioridad al Aspo, de modo digital".*

Así señaló que *"[n]inguna de esas opciones fue adoptada por el Tribunal cuando no existía impedimento alguno*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

para ello, sino que, pese a la privación de libertad de los imputados por casi cuatro años, el Tribunal escogió esperar a que el Consejo de la Magistratura dispusiese de un programa, habilitase a todas las partes al mismo y lo pusiese en funcionamiento. Circunstancia, esta última que jamás se pudo llevar a cabo de modo regular lo que motivó que finalmente se utilizase un sistema gratuito y público como el Jitsi Meet".

b. Respecto a la nulidad del inicio de la causa, forum shopping y ausencia de requerimiento de instrucción fiscal, sostuvo que *"…Se observa con una simple lectura de la nota obrante a fs. 7/8, suscripta por Horacio García, que la misma se encuentra dirigida al magistrado sin indicación alguna de causa, a diferencia de todas las restantes notas e informes remitidos por dicho organismo de inteligencia al mencionado juzgado, lo que evidencia la ausencia de una causa a la cual remitir esta falsa información. Entonces, jamás puede afirmarse que dichas actuaciones se encuentran aprobadas de modo previo por ningún magistrado ni tampoco que las mismas se llevaron a cabo en el marco de una causa penal. No existió ninguna resolución previa que ordene o apruebe dichas actividades en el marco de ninguna causa"*.

Así, aseveró que el tribunal justificó *"…la formación ilegal de una causa por parte de los Servicios de Inteligencia, la falta de sorteo y el fórum shopping y la excursión de pesca".* Y no reparó en que *"…i) No existe ninguna prueba que corrobore la existencia de las supuestas constancias que surgirían de una causa que tramita en la provincia de Córdoba que avalarían la información brindada por ese organismo de inteligencia; ii) Jamás se pudo establecer a lo largo del todo el proceso la supuesta conexión de Carlos Silva Cárdenas con la causa de Biodisel; iii) Tampoco pudieron acreditarse las supuestas operaciones de narcotráfico de Silva Cárdenas en Chile; iv) Es inverificable la supuesta existencia de fuentes confidenciales a las cuales aluden; v) Los presuntos hechos de narcotráfico a los que se alude pero jamás se especifican, habrían ocurrido fuera del país, no componen la hipótesis delictiva y no fueron acreditados; vi) No se determinaron*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

cuáles son los supuestos indicios recogidos por contrainteligencia; vi) Cuando se individualizó al presunto `Charly´ este no era Silva Cárdenas. Además, Silva Cárdenas jamás fue mencionado con el apodo Charly en toda la causa; vi) No se pudo establecer ninguna conexión ya sea por la existencia de un vínculo subjetivo entre las personas investigadas o por uno objetivo en virtud de los hechos investigados; viii) Esta causa inicia con dos líneas de investigación paralelas: por un lado, la Side que aporta los aludidos datos falsos entre los que se encuentra el nombre de Silva Cárdenas y, por el otro lado, la Gendarmería Nacional que supuestamente investigaba los elementos secuestrados en la causa Biodisel. Como la línea investigativa de la Gendarmería Nacional no conduce a ninguna nueva evidencia el magistrado desecha la misma y decide unificar la investigación de la Side con la de Gendarmería Nacional, momento a partir del cual se desvanece la investigación respecto de los elementos provenientes de la causa Biodisel y prevalece la hipótesis de Silva Cárdenas".

Señaló que la SIDE se arrogó facultades investigativas que expresamente se le encontraban vedadas, violando con ello lo dispuesto por los arts. 2 inc. 3, 3 y 4 inc. 1 de la Ley 25520 (vigente al momento de los hechos).

También, señaló que el desprendimiento de una causa no puede ser usado como excusa para obviar la remisión de la causa a la fiscalía en los términos del art. 180 del CPPN.

Afirmó que se omitió de modo inconstitucional la intervención del MPF en la decisión de promover la acción penal, en la determinación del objeto procesal y en la orientación de la investigación, delegándose inconstitucionalmente en la SIDE y en el magistrado instructor. Todo ello sin ningún tipo de justificación y afectándose la garantía de juez natural y derecho a la jurisdicción (arts. 18 y 116 CN, 8 CADH, 18 DADH y 14 del PIDCyP), la imparcialidad del juzgador y el debido proceso legal (art. 18 CN y 8 CADH, 18 DADHy 14 del PIDCyP).

c. Respecto a la nulidad de las intervenciones telefónicas dispuestas en la causa, arguyó que "*…no encuentra*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

ningún sustento probatorio o, cuanto menos, argumental pues el Tribunal se limita a resumir el derrotero de intervenciones telefónicas, sin examinar ni refutar los argumentos de esta defensa y sin jamás expresar las razones por las cuales las considera válidas, es decir, cuáles son los elementos objetivos idóneos que permiten justificar cada una de ellas".

Entendió que *"[n]o existió ningún seguimiento o intervención telefónica que hiciera sospechar que Felipe Silva Cárdenas o su novia tuviesen alguna relación con cualquier acto de narcotráfico.* En efecto, señaló que *"…se ordena la intervención del celular de Felipe argumentando que el mismo se encontraría vinculado con las presuntas actividades de tráfico ilícito cuando no existe ningún informe o evidencia que permita siquiera sospechar la vinculación de Felipe con la investigación que llevaba a cabo el magistrado. Puede observarse, entonces, como la sentencia no solo omite analizar los fundamentos brindados por esta defensa, sino que tampoco expone cuál o cuáles son los elementos objetivos idóneos que permiten justificar la intervención del mencionado teléfono al igual que la de ninguno de los restantes cuya nulidad se solicitó, pues estos no existen; violando con ello tanto el derecho de defensa en juicio de nuestro cliente como así también la motivación exigida por los arts. 123, 399 y 404* del Cppn, reglamentarios del art. 18 de la CN".

Además, planteó la nulidad por la imposibilidad *"de interrogar a los testigos con total libertad y amplitud probatoria"* durante el debate oral.

En otro orden de ideas, cuestionó el hallazgo del depósito Binder y la faltante de las grabaciones de dicho depósito que fueron entregadas a la autoridad aduanera, por no haber podido ser controladas por las partes.

d. Por otro lado, alegó falta de motivación del monto de pena impuesta a su asistido, pues lo consideró desmesurado.

Respecto al delito de Asociación ilícita enrostrado, indicó que *"…jamás se explicó como mi asistido es parte de la asociación ilícita si al momento de dos de los*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

hechos que formaron parte del juicio se encontraba en Colombia… esta defensa sostiene que no ha existido organización alguna por parte de mi defendido que permita subsumir la conducta reprochada en las citadas normas penales".

Cuestionó que *"…se hable de asociación ilícita cuando los imputados aprehendidos en el deposito Binder no fueron condenados por la misma. Con una forzosa interpretación se condena a mi asistido por tal delito (asociación ilícita), pero se absuelve a Zilli del mismo, a Banesevich y a Rodriguez Cuartas, condenados por el delito del arroz".*

Señaló la existencia de un concurso aparente de leyes, pues consideró *"…la posibilidad de concurso aparente derivada de la naturaleza preparatoria del delito de asociación ilícita puesto que si se trata de un delito de preparación la comisión de un delito específico debería absorber la punibilidad por el asociarse. Según esta opinión, y siguiendo la doctrina de Stratenwenh con relación al fundamento de la punición excepcional de los actos preparatorios… se ha dicho que este delito, por ser de peligro abstracto debe ser aplicado únicamente cuando no se ha dado principio de ejecución a las conductas reprimidas por la ley sustantiva".*

En función de ello, sostuvo la vulneración al principio de "non bis in idem", por la doble imposición de pena, es decir, por preparar el delito y por consumarlo.

Por último, postuló la inconstitucionalidad del tipo penal de Asociación ilícita.

Expresó que *"…la figura de asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal ha sido motivo de abundantes críticas por parte de la doctrina penalista. El uso abusivo de esta figura con fines persecutorios, unido a la ambigüedad legislativa que lesiona el principio de legalidad, la fueron desacreditando paulatinamente".*

Indicó que la sentencia dictada importa una inobservancia y errónea aplicación de la ley substantiva (art. 456 inc. 1 del CPPN), en cuanto incurre en una inadecuada subsunción típica de las conductas reprochadas, en

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

los tipos penales del art 210 del Código Penal; artículos 863, 865 inciso "a", 866 segundo párrafo, 871, 872 y 876, incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero.

También, señaló que incurre en inobservancia de las normas que el código de rito establece bajo pena de nulidad absoluta (art. 456 inc. 2), en tanto Silva Cárdenas –a su modo de ver- ha sido sometido a un estado de indefensión, ya que se dicta con fundamento en actividad nula llevada adelante por agentes de la SIDE sin el debido conocimiento y control por parte del órgano jurisdiccional.

Así, solicitó se haga lugar al recurso y: a) se dispongan las nulidades planteadas; b) en subsidio de lo anterior se disponga la absolución de Carlos Olmedo Silva Cárdenas y c) en subsidio de lo anterior, se anule la sentencia dictada por arbitrariedad y se reenvíe para el dictado de otra conforme a derecho.

Hizo reserva del caso federal.

7) El doctor Germán Carlevaro, defensor público oficial en ejercicio de la defensa técnica de **César Andrés Macias Loor, Juan Carlos Ojeda, Jorge Eliecer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli y Juan Alberto Banesevich** interpuso recurso de casación contra las puntos **XI; XVI; XXII; XXVII; XXIX y XXX** de la sentencia recurrida, el que fue concedido por el tribunal *a quo* el día 7 de octubre de 2020 y mantenido ante esta instancia el día 15 de octubre del mismo año.

En los términos del art. 456 y ctes. del CPPN fundamentó su recurso.

a. En primer lugar, se agravió del rechazo de la nulidad planteada respecto de los decretos de fs. 1806/15 –que ordenó el registro de la mercadería encontrada en el depósito fiscal Binder- y de fs. 1826/55 –que ordenó los allanamientos dispuestos en autos-.

Sostuvo que el Tribunal no dio debida respuesta a la nulidad planteada, por lo que se configuraba una causal definida de arbitrariedad.

Para fundamentar sus agravios, hizo alusión a Martins Fructuoso, afirmando que *"…se trataba de un hombre muy enigmático que apareció en la causa de manera repentina,*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

justo en momentos en que en la causa no pasaba absolutamente nada, luego de meses y meses de investigación, luego de horas y horas de escuchas telefónicas".

Cuestionó las tareas investigativas del personal del Departamento de Interceptación y Captación de la Comunicaciones (DICOM), indicando que *"…si no se hubiera dado ese `mágico´ hallazgo de Martins Fructuoso en Retiro, a punto de subirse al ómnibus con destino Rosario, `encuentro´ del que, desde luego, descreemos, los investigadores seguramente hubieran perdido su rastro, nunca hubieran llegado a Rosario, o en el mejor de los casos nunca hubieran dado con los domicilios de la calle Mercante. Por ende, nunca hubieran secuestrado la droga en el depósito Binder".*

Destacó *"…la manera inverosímil en que la investigación da con él, sentado en un bar de la estación de ómnibus de Retiro junto a… Ramírez Cuartas [y] la `suerte´ que había tenido este señor Martins Frutuoso de abandonar Rosario -y nuestro país- justo cuando se iniciaban los allanamientos… lo llamativo que resultó para esta defensa, que en las órdenes de detención (fs. 2026/8) que llevaron los investigadores a Rosario no figurara el nombre se este personaje; que no se ordenara el allanamiento de la finca de la calle Humboldt donde se alojaba y que no se hubiera decretado la prohibición de salida del país pese a que lo había anunciado previamente conforme la escuchas… que el Estado Nacional no había demostrado mucho interés en lograr su comparecencia en nuestro país para dar las explicaciones del caso. En definitiva, creo que resulta claro la falta de fundamentación del Tribunal al responder nuestro planteo de nulidad, pues ha desatendido argumentos centrales para la dilucidación del caso"*.

b. En otro orden de ideas, planteó la atipicidad por falta de configuración de los requisitos del tipo objetivo.

Planteó que nunca se pudo determinar la cantidad de material estupefaciente hallado en el arroz secuestrado, pues a su modo de ver, la pericia habla de un porcentaje del 56%, se está refiriendo, no al 56% de esos 12 kilos de arroz, sino al 56 % de esa sustancia líquida -pasada

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

por el cromatógrafo- que pudieron extraer de aquel puñado de arroz. O sea, 56% del líquido extraído de ese puñado de arroz, no 56% del peso toral del arroz.

Entendió que, había cierta cantidad de estupefacientes impregnada en el arroz, pero en una cantidad significativamente menor, infinitamente menor, a los 6 kilos (resultante de calcular erróneamente el 56 % de los 12 kilos totales).

En base ello, sostuvo que "*…ni siquiera se puede afirmar que, impregnada en el arroz, había cuanto menos una cantidad suficiente como para constituir siquiera una dosis umbral [por lo que] no se encuentra probado siquiera, que sea posible volver a la cocaína a su estado inicial (o sea previo al proceso de impregnación en el arroz) de manera que pueda ser comercializada y consumida*".

Por ello, concluyó que la conducta reprochada y calificada como contrabando de estupefacientes agravado, resultaba atípica por tres razones; porque no está probado que en el arroz se hubiera impregnado material con efecto estupefaciente en los términos del art. 77 del CP, es decir, material prohibido susceptible de producir dependencia física o psíquica, la conducta calificada como contrabando resultaba atípica porque no se sabe si ese material puede ser devuelto a su estado inicial y de ese modo ser comercializado, que es uno de los requisitos típicos del segundo párrafo del art. 866 del CA, y porque no se encontraba satisfecho el requisito típico de la cantidad, que exige esa figura, "inequívocamente destinado a ser comercializada".

Señaló que durante el alegato postuló la atipicidad por falta de configuración de los requisitos del tipo objetivo del delito de contrabando, por esas tres razones muy definidas y que el tribunal no dio acabada respuesta en la sentencia recurrida.

Destacó la declaración en la audiencia del perito Báez.

En base a lo declarado por el perito, sostuvo que "*…nunca pudo hacerse un estudio cuantitativo del material estupefaciente impregnado en el arroz. Que lo único que pudo hacerse en el laboratorio, fue establecer un porcentaje de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

presencia de cocaína en el líquido que fuera extraído del puñado de arroz que fuera pasado por el cromatógrafo. O sea 56% del líquido resultante del tamizado del puñado de arroz, no 56% del puñado de arroz como se sostiene en la sentencia, producto de un malentendido que se mantiene desde la instrucción pese a las precisas aclaraciones del perito Báez en la audiencia".

En efecto, indicó que *"[e]s cierto que se realizó un tamizado y es cierto que se efectuó un lavado con solvente. Ahora luego de ello se obtuvo un líquido que sí, efectivamente en un 56 % se trataba de cocaína. Pero lo que es incorrecto y nunca sucedió es que se haya podido separar la sustancia pulvurulenta conteniendo cocaína. El perito Báez fue enfático en que ese procedimiento no se hizo, porque no cuentan con los elementos técnicos para hacerlo y que no sabría cómo hacerlo. Tampoco sería correcta la interpretación de que cada grano de arroz contenía un 56 % de clorhidrato de cocaína. Es impensable imaginar un grano de arroz mitad arroz y mitad cocaína… el porcentaje de 56% se refería al porcentaje hallado en la sustancia liquida que fuera separada de cada grano de ese puñado de arroz"*.

Por esas razones, es que solicitó la absolución de Zilli; Banesevich y Ramírez Cuartas.

c. Por otro lado, se agravio de la responsabilidad atribuida a Juan Carlos Ojeda y Cesar Andrés Macias Loor en el delito de asociación ilícita.

Señaló que *"…por fuera de esas conversaciones telefónicas, nada se podía encontrar que vinculara a* [sus] *asistidos con la asociación ilícita que se diera por probada"*.

Apuntó la falta de respuesta a un planteo formulado por esa parte en forma expresa, en el sentido de que no es posible arribar a un veredicto condenatorio con la única apoyatura de conversaciones telefónicas.

Sostuvo que las intervenciones telefónicas carecen de valor probatorio autónomo, pues requieren de la concurrencia de otros elementos de prueba para dar por ocurrida una conducta típica o por ocurrido un hecho. Citó jurisprudencia para sustentar su postura.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Así, afirmó que "…*la persona que la sentencia presenta como Cesar Andrés Macias Loor, no es César Andrés Macias Loor… el teléfono usado en esa oportunidad con el interlocutor de Marín López no es el teléfono de mi defendido. Nunca se le atribuyó el teléfono 1133577242, que es el teléfono que utiliza esta persona que habla con Marín López. El teléfono que usaba mi asistido está identificado y de hecho fue intervenido y no es ese*".

Por otro lado, también advirtió que "…*no es la voz de mi defendido… porque esa persona que se presenta como Andrés en la conversación (por lo demás mi asistido no era llamado por su segundo nombre) es seguido y fotografiado en el restaurante `Forrest Gump´ y claramente NO es César Andrés Macias Loor*".

Además, respecto a las intervenciones telefónicas remarcó que *"[l]a enorme mayoría de ellas –y las que supuestamente más los comprometen-* [estarían] *contenidas aparentemente en CDs que no están, que nunca se encontraron, que nunca pudieron ser escuchados por el Tribunal y por las partes y por ende fuera de todo control de las partes*".

En base a ello, entendió que "…*en la mayoría de los casos, se trata de resúmenes o transcripciones parciales, mechadas con comentarios de los investigadores, incluidas en informes suscriptos por los jefes Pucci y Robledo, quienes en general y según ellos mismos refirieron en la audiencia, no eran los que realizaban las escuchas y las transcripciones*".

E indico que "…*si bien es cierto que estos informes que contienen –entre otra información- estos resúmenes y transcripciones parciales, han sido incorporados por lectura, ello lo fue con la férrea oposición de las defensas, comprometiéndose el tribunal a darle su verdadero alcance probatorio*".

Recordó que su alegato, con relación a Macias Loor y a Ojeda, giro en torno a los siguientes puntos; que contra ellos sólo había escuchas telefónicas; que muchas de esas escuchas no estaban en el Tribunal y no pudieron ser controladas por las partes, y que de todos modos el contenido de esas escuchas no daba cuenta de su membresía en una

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

asociación ilícita.

También, hizo hincapié en que no se había probado que en la quinta de la calle Reviso en Monte Grande, se hubiera guardado material estupefaciente; tampoco que hubiera habido un robo de ese material en ese lugar, en efecto señaló que el robo se produjo en el departamento de Macias Loor de la calle Humahuaca.

Señaló que, "[*l*]*a sentencia no evalúa en forma individual la situación de cada imputado (algo que también le cabe a la situación de Ramírez Cuartas) en relación con la asociación ilícita; no se explica cuál fue el aporte de cada uno de ellos; cuales fueron los actos demostrativos de esa membresía; el vínculo entre mis asistidos y la asociación; porque no podemos hablar de una participación meramente accidental y marginal que excluya cualquier atisbo de permanencia (claramente no probada); no responde al argumento y al sinsentido que significa que una persona integre una banda dedicada a cometer delitos vinculados con el tráfico de drogas y después no se pruebe su participación en ninguno de los hechos comprobados (más allá del carácter autónomo del delito)*".

En síntesis, concluyó que "…*para arribar a las condenas de mis asistidos Macias Loor y Ojeda se ha recurrido a prueba no debidamente incorporada; se ha menoscabado el derecho de defensa y la posibilidad de controlar la prueba de cargo y se ha parcializado arbitrariamente la prueba, desechando sin razón aparente, otras que eran relevantes y necesarias para la dilucidación del caso".*

d. Se agravió también de la responsabilidad atribuida a Gabriel Esteban Zilli y Juan Alberto Banesevich en el delito de contrabando agravado.

Sostuvo que sus argumentaciones no han sido siquiera consideradas por lo que, al igual que en otros puntos, la sentencia resulta arbitraria y debe ser descalificada.

Alegó que *"…ambos (Ramírez Cuartas también) fueron víctimas del accionar delictivo de Martins Frutuoso y de sus adláteres. Que ambos actuaron, usando la terminología de la teoría de la autoría mediata tradicional, como meros*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

instrumentos sin dolo. Como meros instrumentos no responsables. Que siempre actuaron sin conocimiento de lo que otros pergeñaban y que no estaban al tanto de que una minúscula parte del arroz que se disponía a ser exportado, estaba a su vez impregnado con una minúscula cantidad de material estupefaciente".

Apuntó que "[*l*]*a sentencia… se extiende en una reseña acerca de algunas reuniones en las que habrían participado algunos imputados y en las que, deduce, se habría ido pergeñando y preparando la maniobra delictiva de exportación"*.

Consideró que *"…el grupo de investigados solía conversar en forma criptica, que no se llamaban por sus nombres, que cuando se citaban para reunirse no decían dónde, que realizaban maniobras de contrainteligencia, etc. Nada de esto ocurría con Zilli (y tampoco con Banesevich y Ramírez Cuartas) quienes se llamaban por su nombre, se citaban dando direcciones, entraban y salían juntos de los encuentros y no realizaban maniobras de contrainteligencia"*.

Es por ello que sostuvo que la sentencia recurre a una interpretación rebuscada en perjuicio de los intereses de sus asistidos.

Criticó que los sentenciantes se hayan apoyado en los dichos de Miguel Ángel González, pues consideró que "[*s*]*us sospechas acerca del cambio de lugar de salida de la mercadería, recogidas en las sentencia, fueron despejadas por la testigo despachante de aduana Stella Maris Franchiscutti, quien le resto toda sospecha de irregularidad al asunto, argumentando que a lo sumo ello elevaba en algo los costos. Lo mismo sus sospechas con relación a que la mercadería hubiera ido en primer término al depósito del barrio de Arroyito antes de ir a Binder"*.

También, indicó que la sentencia da cuenta en forma reiterada de una supuesta discusión entre Zilli y Ramírez Cuartas sobre un líquido "para felinos" que se interpretó que se trataba de un líquido para enmascarar olores y evitar de ese modo ser detectado por los canes de las fuerzas de seguridad.

Respecto de ello, señaló que "…*esa*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

conversación nunca existió entre estos dos interlocutores. Se trata de uno de los tantos errores del Comandante Pucci quien a lo largo de su exposición confundió nombres y circunstancias en más de una docena de veces conforme ya fuera denunciado. La falta de indicación acerca de la ubicación del soporte en donde estaría esta conversación nos da la pauta de su inexistencia".

En otro orden de ideas, apuntó que la sentencia menciona como una circunstancia cargosa la copia del poder de dónde surge que Banesevich y Frutuoso, el 11 de junio de 2015, firmaron un contrato de gestión de negocios por el término de seis meses y partir del cual Banesevich se comprometía a realizar las gestiones y negociaciones apropiadas, sin embargo entendió que "*…nadie va a dejar por escrito, ante una escribanía, la constitución de una sociedad criminal"*.

Indicó que la sentencia sostiene que los nombrados Zilli y Banesevich junto a otras personas "acondicionaron" el material estupefaciente dentro del cargamento de arrocin, previo a su ingreso en el depósito fiscal "Binder". Respecto a ello, consideró que resulta una *"…afirmación absolutamente dogmática desde que, como se advierte de la prueba recolectada, no se sabe ni cuando, ni dónde, ni cómo sucedió ese acondicionamiento. Es más ni siquiera se sabe si fue con carácter previo al ingreso de la mercadería en Binder"*.

Asimismo, señaló que en la sentencia también se afirmó que Frutuoso y Zilli, a través de Trujillo Sánchez, pero especialmente de Ramírez Cuartas, se vincularon con Marín López, entendiendo que esta afirmación resultaba dogmática sin ningún sustento probatorio.

En tal sentido, adujo que "*la sentencia no indica en que se basaron para afirmar aquello… no nos queda otra opción que afirmar que de ningún modo, de acuerdo a la prueba incorporada, las cosas ocurrieron de ese modo"*.

Por ello, consideró que este tramo de la sentencia también debe ser descalificado pues carece de la debida fundamentación.

e. Además, se agravió de la responsabilidad

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

atribuida a Jorge Eliazer Ramírez Cuartas en los delitos de contrabando agravado y asociación ilícita.

Indicó que la sentencia incurre en una serie de contradicciones y de afirmaciones dogmáticas que ameritan su descalificación como acto jurisdiccional válido.

Señaló que una de esas afirmaciones dogmáticas era que su asistido "cumplía directivas" de Marín López, que realizaba "diversas tareas" que éste le encomendaría.

En efecto, explicó que Ramírez Cuartas no participó de ninguna reunión en donde se fue preparando y armando esa operatoria que luego se demostró ilícita.

Se agravió que la sentencia lo ubica en una supuesta reunión en el bar "Starbucks" del 25 de agosto de 2015, en la que participado además Frutuoso, Trujillo Sánchez y Marín López. Pero, a su modo de ver, no hay ningún elemento serio de prueba, que indique que esa reunión se llevó a cabo.

Insistió en que "*…no se registró una sola conversación de Ramírez Cuartas, ni sospechosa ni no sospechosa, pues resulta claro que aquella supuesta discusión con Zilli respecto del `líquido para los felinos´ nunca existió y se trató de uno más, entre los tantísimos errores de Pucci, que confundió a los interlocutores cuando vino a declarar al debate*".

f. Por último, se agravió de la pena impuesta a Gabriel Esteba Zilli.

Criticó los agravantes utilizados por el tribunal *a quo*, sostuvo que "*…todo quien resulte condenado por un hecho de contrabando calificado, seguramente habrá tenido la formación suficiente como para intentar o consumar una operación aduanera de exportación… valorar la instrucción formal como agravante implica realizar una doble valoración de circunstancias contenidas en el tipo penal, lo cual se encuentra vedado*".

También, señaló que "*…nunca se pudo determinar el grado de pureza del material encontrado en Binder. Sino apenas el porcentaje (54%) de clorhidrato de cocaína que presentó el líquido que pudo separarse del arroz, más no el porcentaje del total de la cocaína impregnada… ni siquiera ha sido posible establecer pericialmente cual es la cantidad*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

total de estupefaciente que se habría impregnado en una pequeñísima cantidad de arroz contenida en una bolsa que a su vez se habría hallado dentro de un costal de arrocín".

Además, indicó que no se puede valorar la afectación al control aduanero y a las fronteras, debido a que se incurre nuevamente en una doble valoración de circunstancias que ya se encuentran contenidas en el tipo penal.

El Tribunal valora como agravante el hallazgo de droga en el domicilio de Zilli, pese a que es un hecho que no forma parte de la imputación formulada, por lo que entiende que resulta absolutamente improcedente acrecentar el monto de pena escogido respecto de Zilli basándose en un hecho que jamás le ha sido atribuido.

En base a ello, adujo que *"[n]o existió contradictorio…* [advirtió] *afectación al debido proceso y a la garantía de defensa en juicio; por lo que este tramo de la decisión en crisis debe ser descalificado, adecuándose, por consecuencia, la pena recaída respecto de Zilli"*.

Por último, estimó que *"…en su caso se verifica una desproporción respecto de las penas escogidas respecto de los imputados que, de acuerdo a lo afirmado en el mismo decisorio, ostentaban los más altos niveles de responsabilidad. Es evidente que se ha omitido considerar la ubicación que detentaba Zilli dentro de la estructura criminal según el rol que las propias contrapartes le asignaron"*.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la sentencia en lo que a la pena impuesta a Zilli se refiere y se le asigne una nueva.

Hizo reserva del caso federal.

8) El doctor Pedro Martino, defensor particular de **Germán Emilio Marin López**, interpuso recurso de casación contra los puntos **III; IV; VIII y XII** de la resolución recurrida, el que fue concedido el 7 de octubre de 2020 y mantenido ante esta instancia el día 15 de octubre del mismo año.

Fundamentó el mismo en el inciso 2° del art. 456 del CPPN.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Sostuvo que la sentencia atacada, se sustentó en una instrucción y debate que detentaron actos procesales nulos y en una arbitraria apreciación de la prueba ilegalmente obtenida (teoría del fruto del árbol venenoso) que tornó nula toda la actividad procesal posterior y sus efectos.

Entendió que existió violación al art. 18 de la CN y se vulneró el principio de legalidad, debido proceso y defensa en juicio.

En cuanto a la condena por el delito de asociación ilícita indicó que "*…la sentencia presenta un vicio explícito que se reconoce expresamente la existencia de duda al utilizar siempre el condicional para referirse a las circunstancias que involucran a Marín López, incurriendo con ello en una violación del principio de inocencia, en falta de fundamentación en los términos del art. 404 del Cppn y, consecuentemente, en arbitrariedad manifiesta*".

Transcribió parte de la declaración prestada por su defendido durante el debate oral, a fin de explicar los negocios lícitos que había desarrollado su defendido en Argentina.

Señaló que la sentencia carece de un sistema de valoración racional de la prueba, "*Y no es porque el Tribunal no hubiera sido advertido de la precariedad lógica de los alegatos acusatorios o no hubiera sido el receptor de pedidos expresos para que se pronunciara puntualmente sobre el sistema valorativo a emplear en la sentencia. Todo lo contrario: cuatro horas (entre dos alegatos de dos defendidos) de esta defensa estuvieron dedicados a recrear histórica y conceptualmente un sistema lógico objetivo de valoración de las evidencias, de modo que cualquier decisión provenga de la demostración de la existencia o inexistencia de una conexión racional entre evidencia e hipótesis fáctica. Pero nada de eso ocurrió*".

En efecto, entendió que el sistema utilizado por el tribunal *a quo* no expresa el recorrido intelectual seguido, y no explicita las razones profundas de la convicción (no de la certeza) en el veredicto, lo que la torna arbitraria.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Por lo demás, señaló que adhirió a las nulidades que cada una de las defensas del resto de los imputados planteó en la causa. Sostuvo que cada una de ellas serán tratadas en el mejoramiento de los agravios que se hará en oportunidad de la audiencia del art. 454 del CPPN.

En definitiva, solicitó se case el interlocutorio recurrido, y se decrete la absolución de Jorge Enrique Marín López.

Hizo reserva del caso federal.

III. Durante el término de oficina (arts. 465 cuarto párrafo y 466 del CPPN) se efectuaron las siguientes presentaciones:

a. El doctor Raúl Omar Pleé, Fiscal General Subrogante de la Fiscalía Nº 3 ante esa Cámara Federal presentó breves notas, y entendió que debía hacerse lugar al recurso fiscal interpuesto, a cuyos fundamentos se remitió, sobre todo en lo que respecta al análisis efectuado por el Fiscal General de la instancia anterior acerca de la plataforma fáctica acreditada durante el debate oral y público, sólo efectuó algunas consideraciones en lo respecta al encuadre jurídico penal.

Señalo que "[*e*]*n este tipo de organizaciones jerárquicas, de las que forman parte gran cantidad de personas, cuyos aportes individuales son necesarios para el éxito de las operaciones que conforman su objeto, las órdenes y la coordinación de cada hecho llevado a cabo en ese marco -que se atribuye independientemente de la pertenencia a la banda criminal-, se encuentra a cargo de una o varias personas que actúan como jefes de la organización, cuyo rol consiste en la dirección, control, supervisión, etc., del accionar de los otros miembros de la banda, y que, además, generalmente se encuentran físicamente lejos del lugar concreto en el que se ejecutan cada uno de esos hechos, que pueden ser cometidos en forma simultánea por distintos miembros de la asociación ilícita, pero bajo las directivas de una misma persona*".

Entendió que dicho rol lo detentaron los hermanos Triana Peña, ubicando a Williams Triana Peña en una posición jerárquica dentro de la asociación ilícita, en

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

virtud de la cual correspondía atribuirle responsabilidad penal en los hechos de narcotráfico por los que fue absuelto.

Adujo que "*…no sólo se deriva de los diversos indicios que fueran remarcados por el Fiscal en su recurso, sino también de prueba directa que así lo acredita. Pues, aquella reunión que el imputado lideró y para la cual debió cruzar la frontera desde Brasil hacia Iguazú (Misiones, Argentina), sin seguir directivas de su hermano sino actuando de forma autónoma, no sólo demuestra el poder de mando de Williams Triana Peña, al ser quien daba las órdenes y ante quien los demás miembros debían justificar sus actos, en concreto, dar explicaciones ante el desmantelamiento de la organización criminal y el secuestro del estupefaciente en el domicilio de la calle Niceto Vega; sino que, además, evidencia su necesaria intervención en él, como líder y organizador.*

También señaló que en varias ocasiones, quienes declararon en el debate lo hicieron de forma confusa, identificando erróneamente a los imputados, confundiendo las personas de Erman alias "Mono" y Williams alias "Willo", lo que *"…da cuenta de que las órdenes las daban indistintamente uno u otro, pues no sería posible que entre los miembros confundan a la persona ante la cual debían responder"*.

Asimismo, remarcó las diversas escuchas telefónicas que lo sindicaban como un eslabón jerárquico dentro de la asociación ilícita. Puntualmente, detalló la investigación efectuada sobre el teléfono de Mario Alberto Lara Guerra.

Por ello, sostuvo que "*…la absolución del imputado en orden a los hechos puntuales de narcotráfico que aquí se cuestiona, guarda estricta relación con su errónea consideración como un mero miembro de la banda criminal, en tanto, la valoración de la prueba en los términos reclamados por la acusación, le hubiese permitido al a quo no solo ubicar a Williams Triana Peña en el lugar de mando que ocupó dentro de la organización, sino también, y consecuentemente con ello, tener por configurada su responsabilidad penal en los ilícitos concretos cometidos por aquella*".

Explicó cómo funciona una organización

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

criminal como la liderada por los hermanos Triana Peña, e indicó que sin perjuicio de la ausencia física del imputado Williams Triana Peña en cada uno de los hechos de narcotráfico, su aporte fue favorecedor, indispensable y determinante para su ejecución.

Por otro lado, respecto a la absolución del imputado Guillermo Adolfo Heisinger por imperio de lo dispuesto en el art. 3º del código de rito, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro por el que fue acusado, entendió que "*…el análisis tanto fáctico como jurídico llevado a cabo por el Tribunal respecto a este imputado no resulta acertado*".

Indicó que Heisinger realizaba "*…una actividad esencial en lo que hace al funcionamiento de la organización y consistió en el diseño y planificación de un importante entramado de sociedades comerciales, conformado por distintas personas vinculadas con los comportamientos delictivos imputados, que se encargarían de manejar el flujo de los fondos obtenidos*".

Tuvo en cuenta que, el hecho "*…de que el encausado conociera o no al resto de los miembros de la organización, ello no impide que detente la calidad de miembro. Es que, conforme fuera expuesto en la descripción de los hechos probados por el tribunal, Heisinger tenía contacto estrecho con los dos líderes de la organización criminal, Erman y Williams Triana Peña, así como también con la hermana de ellos, Johana y su marido, Jesús Humberto García Herrera, alias `Chucho´*".

Remarcó que "*…el delito de asociación ilícita se atribuye de manera independiente respecto a cada delito individual que cometa la banda, por lo que el argumento del Tribunal acerca de que la conducta de Heisinger estaría siendo investigada en el marco de otra causa por lavado de activos, no resulta idóneo para eximirlo de responsabilidad por su pertenencia a la organización*".

Citó doctrina y jurisprudencia para fundamentar su postura.

En definitiva, solicitó que se haga lugar a su pretensión, se anule la sentencia en cuanto absuelve a

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Williams Triana Peña y a Guillermo Adolfo Heisinger, y se los condene conforme la acusación fiscal reproducida en los alegatos sin necesidad de reeditar el debate, previa realización de la correspondiente audiencia *de visu* prevista en el art. 41 del CP.

b. El doctor Carlos Tomás Beldi, defensor de Carlos Olmedo Silva Cárdenas, presentó breves notas, oportunidad en la cual se remitió a todo lo expuesto en el recurso casatorio, agregando algunas consideraciones.

Se quejó de que la sentencia no evalúa en forma individual la situación de cada imputado, ni explica cuál fue el aporte de cada uno.

Criticó el sinsentido de que "*…una persona integre una banda dedicada a cometer delitos vinculados con el tráfico de drogas y después no se pruebe su participación en ninguno de los hechos comprobados (más allá del carácter autónomo del delito)*".

Señaló la ausencia de pruebas concretas en contra de Silva Cardenas, pues apuntó que la cantidad de teléfonos en la casa de su asistido era por la cantidad de personas que allí vivían; que era común el uso discrecional de apodos; que las personas que estaban junto a Silva Cardenas en la mesa de cumpleaños eran Potes Ramírez y Pardey quienes fueran absueltos; que el arroz es una comida de consumo masivo en Colombia; y que no efectuó maniobras para evitar seguimientos.

Mantuvo la reserva del caso federal.

c. 1) Los doctores Julio E. S. Virgolini y Mariano H. Silvestroni, defensores de Williams Triana Peña se presentaron, reiteraron la reserva del caso federal y se remitieron a cuanto expusieron en el recurso de casación.

Recordaron la crítica efectuada con respecto a la duda reconocida por el propio tribunal en la sentencia, ya que –a su modo de ver- se funda exclusivamente en aserciones de probabilidad y no en afirmaciones fundadas en certeza sobre la ocurrencia de los hechos.

Señalaron que "*…la sentencia se encuentra invalidada por sostenerse en hechos de cuya ocurrencia los jueces dudan, sino que, además, se trata de hechos cuya*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

atribución a WTP es producto de una confusión entre personas, confusión en la que incurren los investigadores y que se reitera en la sentencia".

Así, entendieron *"…nos encontramos ante una situación de duda objetiva que impide la condena, ya que la sentencia que afirma la existencia de una asociación ilícita que operaba en la Argentina entre agosto del 2014 y septiembre del 2015 y otorga a WTP la calidad de supuesto intermediario entre los estratos superiores e inferiores de ella (sin precisar ningún acto concreto en el que se refleje inequívocamente ese rol de intermediación)"*.

Siendo ello así, advirtieron que la resolución recurrida ha inobservado las reglas epistemológicas que rigen la reconstrucción histórica de los hechos en materia penal, como consecuencia directa del principio de inocencia, citando a tal fin a Luigi Ferrajoli en "Derecho y Razón".

Además, aseveraron la falta de determinación de la conducta concretamente atribuida a su asistido.

Señalaron que *"[e]sa indeterminación es consecuencia directa de la falta de pruebas y por eso decimos que los vicios están interrelacionados: como no hay pruebas (y el propio Tribunal lo reconoce al admitir la duda y la ausencia de investigación), todo lo que se dice de WTP es que sería un eslabón intermedio entre los niveles superiores e inferiores de la organización"*.

Por ello, alegaron que tanto las acusaciones como la sentencia son nulas en los términos de los arts. 404 CPPN, 18 CN y 8 CADH.

Citaron doctrina y jurisprudencia para reforzar su postura.

En virtud de ello, entendieron que la sentencia debe ser anulada y Williams Triana Peña absuelto por el delito por el que fue incorrectamente condenado.

2) Luego, efectuaron otra presentación, también durante el término de oficina, contestando las consideraciones esgrimidas por el Fiscal General en su recurso de casación, deducido contra la sentencia que contrabando de estupefacientes (denominados "Ketchup" y "Arroz") y un hecho de comercio de estupefacientes

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

(denominado "Niceto Vega").

Allí, indicaron que "*tres obstáculos para la procedencia de la petición del Fiscal: 1) El primero, formal, porque la petición está enderezada a instar lo que el propio fiscal denomina una "mera revisión" del criterio del Tribunal, que de ser acogida lesionaría la garantía constitucional de la doble instancia; 2) El segundo, que el Fiscal no demuestra la arbitrariedad que invoca y ni siquiera refuta los razonamientos del Tribunal, en tanto se limita a repetir lo que ya dijo (sin suerte) en su alegato acusador; 3) El tercero, que en lo sustancial el Fiscal pretende condenar a nuestro cliente sin pruebas y en función de una sucesión de argumentos demostrativos de duda, más duda y nada más que duda*".

Adujeron que era necesario demostrar la arbitrariedad y que el representante del Ministerio Público Fiscal no lo había hecho.

Además, criticaron la petición de condena del fiscal en el recurso casatorio, pues entendieron que "…*por existir en cabeza del imputado el derecho al doble conforme (según criterio sentado por la Corte nacional en "Casal" y por la CIDH en Herrera Ulloa), no es posible otorgar a la Fiscalía un derecho al recurso que prive luego al imputado, condenado en segunda instancia, de su derecho a recurrir la sentencia de condena*".

También, señalaron la omisión del Fiscal de refutar las absoluciones por los casos "Ketchup" y "Arroz" y de valorar evidencia que vinculen a su defendido con esos hechos.

En suma, consideraron que ninguna prueba concreta existió ni el Fiscal valoró, que permita vincular a Williams Triana Peña con los hechos de narcotráfico por los que fue absuelto.

Formularon reserva del caso federal.

d. 1) La doctora Catalina Santoro, a cargo de la defensa técnica Mario Alberto Lara Guerra, se presentó durante el término de oficina, mantuvo y ratificó los fundamentos del recurso de casación, y volvió a desarrollar la distorsión de una escucha telefónica, que según su

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

entender, fue utilizada como eje principal para vincular a su asistido en la asociación ilícita.

Indicó que *"…al momento de producir los alegatos de la defensa se solicitaron las grabaciones de las escuchas telefónicas… el Tribunal manifestó que las grabaciones de las transcripciones de escuchas no habían podido ser halladas y por lo tanto no se pudo realizar el contralor necesario por parte de esta y las restantes defensas. Lo curioso fue que, al momento de recurrir, esta asistencia técnica requiere nuevamente las grabaciones - por escrito- y las mimas son puestas a disposición. Más curioso resulto que las grabaciones no coincidían con las transcripciones. En puntos centrales que les otorgaban un sentido completamente distinto".*

Sostuvo que ***"…con posterioridad a la sentencia*** *se ha podido demostrar que lo que surgía de las comunicaciones del abonado de mi asistido el día 17 de enero de 2015…* [contradicen] *lo que dice en la sentencia".*

En tal punto, explicó que *"…el hecho de que dijese me pega `la´ arrimadita, da a entender que se trataba de algo acordado con anterioridad y no de algo que surgió imprevistamente, como pretende la Fiscalía. Cabe señalar que estas expresiones responden a modismos colombianos, que en forma evidente los investigadores que transcriben desconocen".*

Asimismo, señaló que una llamada *"…no es la indicada por la acusación y por el Tribunal, en la sentencia, sino que la misma había ocurrido diez horas después a la hora que el Fiscal la colocó en su alegato y el Tribunal en la sentencia condenatoria, lo que le da un sentido completamente diferente porque la desvincula temporalmente del hecho de `Niceto Vega´.*

Por ello, entendió que *"[l]a relevancia, de lo señalado; resulta fundamental para la defensa del Sr. Lara Guerra, toda vez que, la distorsión de la llamada lo vincula a hechos de narcotráfico de los cuales es totalmente ajeno y por tanto lo desvincularía de la asociación ilícita, por la cual fue condenado".*

También adujo que "[l]as transcripciones no

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

son fieles al contenido de las grabaciones. Las transcripciones son parciales, muchas de ellas se consideraron `sin interés para la causa´, por lo cual no todas han sido captadas, descubiertas y por ello no es posible contar con todo el panorama para saber el verdadero significado de las conversaciones".

Hizo reserva del caso federal.

2) Posteriormente, también se presentó respecto de Guillermo Adolfo Heisinger a fin de desarrollar fundamentos en los términos del art. 466 del CPPN, dado el recurso de casación interpuesto por los acusadores.

Sostuvo la inexistencia de arbitrariedad en la sentencia absolutoria. Así, señaló que "*…ninguno de los acusadores, señalaron desaciertos de razones coordinadas y consecuentes, ni el absurdo notorio en la motivación, ni de la estructura lógica y legal del fallo; ni tampoco señalaron la arbitrariedad en las reglas de la sana critica. Ambos acusadores, se limitaron a sostener los mismos argumentos vertidos en sus alegatos, demostrando una mera discrepancia sobre la forma en que los Juzgadores apreciaron los hechos y las pruebas de la causa*".

En otro orden de ideas, alegó la superposición de objetos procesales de la presente causa con el objeto de la causa conexa por lavado de activos en la que todos los imputados (entre ellos Heisinger) se encuentran con falta de mérito.

Así, entendió que "*…los acusadores fincan sus presuntos agravios (al analizar la situación de mi asistido), exclusivamente en cuestiones que se están investigando en la causa por el delito de lavado de activos y en la prueba de esas actuaciones… la querella acuso a mi asistido por un supuesto manejo de fondos provenientes de los hechos de narcotráfico, más específicamente el asesoramiento jurídico para la constitución de sociedades comerciales; de esta forma la acusadora superpuso ambos objetos procesales. Estos argumentos vertidos por el Tribunal, en la sentencia, no fueron refutados por la Querella y por tanto el recurso incoado por la misma resulta infundado*".

Por otro lado, señaló que el fiscal utilizó

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

argumentos erróneos, tales como, que Guillermo Heisinger "…*más allá de su rol como abogado a través del cual intervenía en los negocios lícitos tenía pleno conocimiento y participaba de las actividades ilícitas de la familia TRIANA PEÑA…".*

En base a ello, indicó que "[*e*]*l Fiscal no lo explica, y en lugar de ello repite otra vez el contenido de algunas partes de su alegato, pero sin refutar los razonamientos efectuados por el Tribunal Oral. Es curioso que el Fiscal afirme la arbitrariedad de la sentencia pero que, al mismo tiempo, lleve a cabo afirmaciones arbitrarias y desprovistas de anclaje en los hechos y las pruebas del caso"*.

Criticó la afirmación efectuada respecto a que Yohana Triana Peña está prófuga y que Heisinger la ayudó a escapar.

Así, señaló que *"…[l]a falsedad queda demostrada… por el hecho de que Yohana Triana Peña no sólo se fue de la Argentina sin que nadie ordenara su detención, sino que regresó, y se presentó a declarar en la causa conexa por lavado de activos – el 7 de noviembre de 2017-, en la que se dispuso su falta de mérito y luego volvió a viajar a Colombia… Es evidente, entonces, que el vínculo que se pretende hacer entre mi cliente y las presuntas actividades delictivas de la familia Triana Peña, a partir de ese supuesto aviso para que Johana se escapara, se cae por su propio peso"*.

Además, apuntó que el representante de la acusación valoró en su recurso tres transcripciones telefónicas de la causa 13.528/13, "[*e*]*n primer lugar, no es posible establecer la correspondencia de esas transcripciones con el contenido de las escuchas, ya que las grabaciones no han podido ser cotejadas, toda vez que, el Tribunal negó poseer las mimas, pese a que de las constancias de la causa surge, en forma inequívoca, que están reservadas en Secretaría –proveído del 17/10/18 y 24/10/18-. En segundo lugar, es preciso señalar que esas presuntas conversaciones (sea cual fuere su contenido real) no pueden ser valoradas en forma aisladas, sino que se deben valorar en conjunto con*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

todas las conversaciones constatadas, lo que no es posible porque no todas fueron transcriptas y además, como vimos, las grabaciones no aparecen. Por lo demás, es claro que quien transcribió las conversaciones, no posee conocimientos técnicos acerca de operaciones financieras, ni de sociedades comerciales y por tanto le cambio el sentido a lo plasmado en los legajos de escuchas –las transcripciones son interpretaciones y no son textuales- lo que quita toda razonabilidad a la pretensión del Sr. Fiscal".

En ese sentido, recordó lo manifestado por la oficial Octaviano en cuanto que "*…ninguna de las operaciones comerciales, financieras y demás fue corroborada documentalmente, y que todo se basó en su interpretación de conversaciones (recordemos que ella hacía todo: escuchaba, transcribía, elaborada los informes) y en las búsquedas que realizó por internet"*.

También, cuestionó que el fiscal haya valorado "*…presuntas conversaciones entre Altuve y Heisinger, sin haberlas valorado antes, sin haber contado con la grabación, sin haber citado a declarar a Altuve, sin haber interrogado a Heisinger (quien contestó preguntas) sobre el punto y como todo sustento probatorio de un recurso que, como dijimos, se encuentra manifiestamente infundado"*.

Por todo ello, entendió que los argumentos del tribunal no fueron refutados por el representante del Ministerio Público, y que por eso, su recurso de casación es manifiestamente infundado y debe ser rechazado.

Hizo reserva del caso federal.

e. Los defensores oficiales, doctores Guillermo Todarello y Carolina Belej, a cargo de la defensa de Gabriel Esteban Zilli, Juan Alberto Banesevich, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Juan Carlos Ojeda, César Andrés Macias Loor y Nadin Eugenio Ardila Angulo se presentaron en el término de oficina y sostuvieron los agravios deducidos en el recurso de casación respecto de los primeros cinco de los nombrados.

Asimismo, solicitaron el rechazo del recurso de casación deducido por la parte querellante contra la absolución de Nadin Eugenio Ardila Angulo, en orden al delito

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de asociación ilícita.

En primer lugar, se remitieron en su totalidad a los agravios del recurso de casación presentado por el doctor Germán Carlevaro, solicitaron que se haga lugar al mismo y se disponga la absolución de Zilli, Banesevich, Ramírez Cuartas, Ojeda y Macias Loor.

Asimismo, y para el caso de que no se haga lugar a ello, requirieron la anulación respecto de la pena fijada a Zilli y la determinación de una nueva sanción.

Mantuvieron la reserva de la cuestión federal oportunamente introducida.

Por otro lado, y respecto al recurso de la parte querellante contra la absolución de Ardila Angulo, sostuvieron que las críticas efectuadas por la parte querellante en su recurso evidencian "*…su disconformidad con la manera en que el Tribunal ha valorado esa prueba, y con las conclusiones a las que ha arribado. Pero sin perjuicio de ello, no logra demostrar que esa forma de examinar y meritar las pruebas y elementos indiciarios incurra técnicamente en el defecto de arbitrariedad*".

Entendieron que el recurso de casación no ha rebatido adecuadamente los fundamentos brindados por el Tribunal al absolver a su asistido; por el contrario, ha reiterado su particular visión de los hechos y propuesto, en los mismos términos que en el alegato, la adopción de una distinta solución legal.

Indicaron que "*…el Tribunal acertadamente concluyó que los elementos probatorios arrimados al expediente no aportaron el grado de certeza suficiente para tener por acreditado el hecho imputado y la responsabilidad de nuestro asistido en el mismo. Es decir, entendió que no fue posible determinar que Ardila Angulo actuó con conocimiento y voluntad de formar parte de la agrupación investigada. Tampoco que tenía qué sospechar que su amigo integraba una sociedad criminal*".

Por ello, y por encontrarse comprometida la garantía constitucional que asegura la aplicación del principio *in dubio pro reo*, introdujeron la cuestión federal (art. 14 de la ley 48).

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

IV. El día 18 de noviembre de 2021 se dejó debida constancia de la realización de la audiencia prevista en el art. 468 del CPPN, oportunidad en la cual hicieron uso de la palabra los doctores Carlos Tomas Beldi, Julio Virgolini y Guillermo Todarello. Asimismo, presentaron breves notas los doctores Carlos Tomás Beldi, Pedro Martino, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni (quien estuvo presente en la audiencia) y las doctoras Catalina Santoro y Luciana Mariel Taricco.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Daniel Antonio Petrone, y en segundo y tercer lugar los doctores Diego G. Barroetaveña y Ana María Figueroa, respectivamente.

El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:

I. En primer término, corresponde señalar que los recursos de casación interpuestos por las defensas son formalmente admisibles, pues del estudio de las cuestiones sometidas a inspección jurisdiccional surge que los recurrentes invocaron la errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal. Además, el pronunciamiento es cuestionable por la vía intentada en virtud de lo dispuesto por el artículo 457 del CPPN.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante se encuentran legitimados para recurrir la presente sentencia de conformidad con lo estipulado en los arts. 458 inciso 1° y 460 del CPPN, y teniendo en cuenta que los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del código de rito, los recursos por ellos interpuestos también resultan admisibles.

II. A fin de abordar el tratamiento de los agravios traídos a consideración, cabe consignar los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de la parte querellante, para brindar una mayor claridad expositiva dado el cúmulo de las presentes actuaciones, tal como lo hizo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de esta ciudad en la sentencia recurrida.

Así, se detalló:

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

*"**a) Causa n° 2229…** el requerimiento de elevación a juicio realizado por el Dr. Facundo Machesich, representante de la querella constituida por el Fisco Nacional (AFIP), en el que solicitó la elevación a juicio de las actuaciones y respecto de Mario Alberto Lara Guerra, Guillermo Adolfo Heisinger, Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Nadin Eugenio Ardila Angulo, German Emilio Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Carlos David Pardey Rozo, César Andrés Macías Loor, Juan Carlos Ojeda, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli Y Juan Alberto Banesevich, por considerarlos miembros de una asociación ilícita, en concurso real con tres hechos de tráfico ilícito de estupefacientes, dos en su modalidad de contrabando de exportación de cocaína que se encontraba disimulada y que por su cantidad se encontraba inequívocamente destinada a la comercialización (artículos 864, inciso d) y 866, segundo del Código Aduanero) y un hecho de comercialización de estupefacientes (artículo 5, inciso c) de la ley 23.737)- todos en calidad de coautores-, los cuales a su vez concurren materialmente entre sí en los términos del artículo 55 del Código Penal.*

Así también le atribuyó a Zilli, el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal-de conformidad con las disposiciones del artículo 189 bis, apartado (2), primer párrafo del Código Penal de la Nación- en calidad de autor.

Por su parte –cfr. fs. 5482/93 del principal-, el señor Fiscal Federal, doctor Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6, formuló requerimiento de elevación a juicio en relación a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Guillermo Adolfo Heisinger, Germán Emilio Marín López, Mario Alberto Lara Guerra, Nadín Eugenio Ardila Angulo, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Carlos David Pardey Rozo, César Andrés Macías Loor, Juan Carlos Ojeda, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli y Juan Alberto Banesevich, por considerar que, formaban parte de una organización criminal, junto con otras personas que aún no habían sido localizadas, dedicada a ejecutar actos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el manejo de

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

los fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura delictiva.

Señaló que dichos comportamientos habían tenido repercusión tanto en el orden nacional como a nivel internacional y transnacional, en tanto se habían detectado vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros países (Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros) con idénticos objetivos criminales y respondiendo todos a una sola organización central-con marcada división de roles y verticalismo entre sus integrantes- existente en la República de Colombia.

Puso de resalto que los encartados habían desplegado una compleja mecánica que involucró la disposición de significativos medios económicos y logísticos, y una importante cantidad de sustancias estupefacientes, así como los elementos necesarios para su tráfico y acondicionamiento (balanzas de precisión, bolsas de nylon, teléfonos celulares, selladores e inmuebles, conexiones en el exterior del país, utilización de documentación falsa, etc.).

Diferenció varios estamentos dentro de la organización: en los eslabones superiores, que responderían a las directivas de la banda central en la República de Colombia, ubicó a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, Erman Triana Peña y Williams Triana Peña, cuya función principal sería la administración de los recursos obtenidos del tráfico de drogas -manejo de dinero-, impartiendo las directivas necesarias para la concreción de las actividades de relevancia para la banda y también fiscalizando las funciones desplegadas por quienes los subordinaban. En un nivel más bajo, situó a Edilberto Vargas Fernández, Diana Cristina Suárez Heredia (esposa del anterior), Germán Emilio Marín López, Henry Felipe Ibarra Ramírez y Natalia Obando López, quienes, si bien desarrollaron actividades de cierta jerarquía, respondían a las directivas emanadas de las personas mencionadas precedentemente.

En el nivel medio de la organización -cuyos integrantes llevaron a cabo las órdenes impartidas por los estratos superiores- ubicó a Nadín Eugenio Ardila Angulo

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

(quien respondería a Carlos Olmedo Silva Cárdenas), Víctor Alfonso Camargo López (quien estaría a las órdenes de Edilberto Vargas Fernández), Mario Alberto Lara Guerra (quien respondería a Erman Triana Peña y a Carlos Yorelmy Duarte), Guillermo Adolfo Heisinger (quien también cumpliría directivas de Erman Triana Peña y Carlos Yorelmy Duarte) y Carlos Miguel Potes Ramírez (quien se hallaría bajo las órdenes de su primo Henry Ibarra Ramírez y de Carlos Olmedo Silva Cárdenas).

Finalmente, el Sr. Fiscal de grado mencionó a las personas que estarían vinculadas con las maniobras de transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la droga propiamente dicha: Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Juan Carlos Ojeda, César Andrés Macías Loor, Carlos David Pardey Rozo, un sujeto que respondería al nombre de `Juan Palomo´, Manuel Jesús Puches Frías, Fernando Manuel Martins Frutuoso, Alassana Djaló, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli, Luis Adrián Azula, Juan Alberto Banesevich, Yuriano Valencia Estrada y John Jair Piedrahita Jaramillo.

Entre los sucesos en que tomó parte la organización criminal, manifestó que se habían comprobado los siguientes: a) el intento de exportación de 945,5 gramos de cocaína, con una capacidad para producir alrededor de 9.454 dosis umbrales, los cuales se encontraban ocultos en distintos envoltorios de kétchup. Ello ocurrió el día 29 de agosto de 2014 en el interior del aeropuerto internacional `Ministro Pistarini´, cuando se interceptó y registró el equipaje de Martín Maximiliano Fraire, quien se dirigía a abordar el vuelo QR772 de la empresa `Qatar Airways´ con destino final a Bangkok, Tailandia. En virtud de ello se inició la causa nro. 1167/14 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro 1 de esta ciudad –luego remitida por conexidad a la presente-, en tanto la investigación allí realizada, permitió establecer que Fraire había sido contactado por integrantes de la organización investigada en este expediente, directamente relacionados con Víctor Alfonso Camargo López y Germán Emilio Marín López; b) El almacenamiento de setenta y nueve (79) envoltorios compactados en forma de ladrillos o panes, conteniendo

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

sustancia estupefaciente elaborada a base de cocaína, y de distintas bolsas con la misma droga, todo ello con un peso total aproximado de 84.955 gramos. Esa cantidad de droga fue hallada en el interior del inmueble de la calle Niceto Vega 5035 de esta ciudad, el día 17 de enero de 2015, como consecuencia de una comunicación anónima recibida en el sistema de emergencia telefónica `911´, a través del cual se alertó sobre la comisión de un presunto delito contra la propiedad en ese lugar. Al momento de los hechos vivían en ese domicilio Yuriano Valencia Estrada y John Jair Piedrahita Jaramillo, sujetos que se encuentran relacionados con Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Germán Emilio Marín López y Edilberto Vargas Fernández y c) el intento de exportación de 12.086 gramos de cocaína (con una pureza del 56%) disimulada en arroz a través del puerto de esta ciudad, con destino a las islas de Guinea Bissau y Marruecos. El cargamento fue descubierto el día jueves 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal `Binder´ sito en la calle 1721 -ex Biedma- nro. 7916 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En dicha maniobra, intervinieron en forma directa Germán Emilio Marín López, Fernando Manuel Martins Frutuoso, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli, Luis Aníbal Batistela, Luis Adrián Azula, Juan Alberto Banesevich -detenido en esa ocasión- y Alassana Djaló, a través de quienes se reveló que ese material estupefaciente había sido acondicionado en los domicilios de la calle Víctor Mercante 1135, 1137 y 1141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. También se estableció que la empresa a cargo de la operación fue la firma `Euro Export S.R.L.´ (C.U.I.T. nO30-71040065-9), que había documentado el 11 de septiembre de 2015, una operación bajo la destinación nro. 15052ECOI006767S en el depósito fiscal indicado, tratándose de aproximadamente cuarenta y seis (46) toneladas de arroz, por lo que se ordenó la apertura y verificación de esa carga, oportunidad en que se detectó la cocaína.

A raíz de este último episodio, el 18 de septiembre de 2015 se realizaron allanamientos en diversos domicilios que se encontraban a disposición de la

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

organización, donde se logró el secuestro de más material estupefaciente y elementos vinculados a su tráfico:

1) En el domicilio de la calle Víctor Mercante 1135 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se secuestraron los siguientes elementos: 2566 gramos de cocaína -mucha de la cual estaba en estado puro-, una balanza de precisión modelo SF-400, una balanza de precisión gris sin marca ni modelo, tres bolsas con vestigios de sustancia en polvo blanca, un revólver calibre 32 número de serie 6469 sin marca ni modelo visible y seis municiones, cuatro calibre 357 y dos calibre 45 y una máquina selladora marca `Lipari´, modelo V6003;

2) En el domicilio de la calle Víctor Mercante 1137 de la ciudad Rosario, provincia de Santa Fe, se procedió a la detención de Jorge Eliécer Ramírez Cuartas y se secuestró una balanza de precisión "Digital Scale", una valija con veinte mil pesos ($20.000) en billetes de cien pesos y doscientos noventa mil pesos ($ 290.000);

3) En el domicilio de la calle Víctor Mercante 1141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se detuvo a Gabriel Esteban Zilli y se secuestraron los siguientes elementos: 3.027 gramos de cocaína -mucha de la cual estaba en estado purodistribuida en una bolsa tipo "arpillera" con diez bolsas de nylon, quince municiones calibre 38, cuarenta municiones calibre 22, dos cargadores de pistola calibre 45 con siete municiones en su interior; un rifle marca "Marlin" calibre 22, cincuenta y tres mil doscientos cuatro pesos ($53.204), mil cuatrocientos (U$S 1.400) dólares estadounidenses y un sello de la Subcomisaría 22° de la Policía de Santa Fe;

4) En el inmueble de la calle Florida 191 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se encontraron documentos y boletas relacionados con Gabriel Zilli y Luis Azula. También dos blisters de la firma Personal y una botella que reza "Sinorin Duo" repelente de perros y gatos;

5) En el inmueble de la calle Zabala 1655 piso 2° de esta ciudad, se procedió a la detención de Carlos Olmedo Silva Cárdenas y se secuestraron treinta y seis mil novecientos pesos ($36.900), setecientos veintitrés dólares

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

estadounidenses (U$S 723) y sesenta mil pesos colombianos ($60.000);

6) En el inmueble sito en la avenida Del Libertador 4854, piso 8°, departamento "c" de esta ciudad, se detuvo a Germán Emilio Marín López y se procedió al secuestro de veintitrés mil ochocientos ochenta y tres dólares estadounidenses (US$ 23.883), veinte mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($20.754) y quinientos pesos uruguayos (URU $500);

7) En el inmueble ubicado en la calle Agüero 867, piso 3°, depto. "B" de esta ciudad, se detuvo a Carlos David Pardey Rozo y se secuestraron tres hojas de transferencias al exterior y un pasaporte nro. A0543639 bajo ese nombre, la suma de seis mil seiscientos sesenta y dos pesos ($6662), ciento veintisiete dólares estadounidenses (US$127), novecientos veinte reales (R920), dieciocho mil pesos chilenos ($18.000), ciento cuarenta pesos mexicanos ($140), y ocho teléfonos celulares;

8) En el domicilio de la calle Vera 1245 de esta ciudad, se procedió a la detención de Juan Carlos Ojeda y se secuestraron ocho teléfonos celulares y una balanza de precisión;

9) En el inmueble ubicado en la calle Pacheco de Melo 2107, piso 2°, depto. "B" de esta ciudad se logró la detención de Jorge Enrique Trujillo Sánchez y se procedió al secuestro de una cédula que reza "Government of Canada", una cédula de identidad militar de oficial del Ejército de Reserva de la República de Colombia, una cédula de conducir de la Fuerza Militar de Colombia, un registro consular de la República de Colombia, un permiso de conducir expedido por las autoridades de Canadá -todo ello a nombre de Jorge Enrique Trujillo Sánchez- y la suma de doce mil pesos ($12.000);

10) En el domicilio de la calle Gallo 1106, piso 4°, departamento "C" de esta ciudad, se procedió a la detención de Ardila Angulo Nadín Eugenio;

11) En el domicilio de la avenida Corrientes 2372, piso 4°, depto. "24" de esta ciudad -domicilio a disposición de Jonathan Márquez Ávalos-, se procedió al

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

secuestro de cinco mil doscientos dólares estadounidenses (US$5.200) y sesenta y nueve mil quinientos pesos ($69.500);

12) En el inmueble ubicado en la calle Eugenio Rebizo 150 de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, se secuestró una gran cantidad de documentación vinculada con servicios de Arba, Anses, Claro, Municipalidad por la Propiedad Urbana, Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires y de Cablevisión Fibertel, a nombre de Guillermo Montoto. Dicha vivienda se encontraba a disposición de César Andrés Macías Loor;

13) En la vivienda ubicada en el bloque nro. 2, edificio nro. 2, piso 2° depto. `E´ del barrio `Portezuelo ´ de Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, se detuvo a Mario Alberto Lara Guerra y se secuestraron veintisiete mil seiscientos pesos ($27.600), veinte pesos uruguayos ($20), cincuenta pesos mexicanos ($50), ciento tres mil pesos colombianos ($103.000), cincuenta y nueve mil doscientos tres dólares estadounidenses ($59.203) y ciento sesenta y un mil novecientos euros (€ 161.900);

14) En la habitación nro. 20 del hotel ubicado en la calle Carlos Calvo 2260 de esta ciudad, se procedió a la detención de César Andrés Macías Loor y al secuestro de dos balanzas de precisión.

Además de todo ello, según sostuvo la Fiscalía de grado, la organización criminal contó con un importante entramado de sociedades comerciales, conformado por distintas personas vinculadas con los comportamientos delictivos imputados y que se encargarían de manejar el flujo de los fondos obtenidos. Entre las firmas comerciales que hasta el encuentran las denominadas `SANIS S.R.L.´, `INTERNATIONAL TRADE AND COMERCE ITC S.A.´, "HARD BUSINESS S.R.L.´, `WEALTHY RANCH S.A.´, `SPANO POINT S.A.´, `LETSTRADE S.A.´, "CONNECT PLUS PANAMA", `GUJI S.A.´ y "CRAZY BALL S.R.L.´.

En esta ingeniería societaria, según el Dr. Delgado, había tenido una considerable intervención el imputado Guillermo Adolfo Heisinger, quien fue detenido en su domicilio particular de la calle Alvear 1503, piso 5° de esta ciudad. En tal sentido, tras una serie de allanamientos, se

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

logró el secuestro de una importante cantidad de documentación y archivos informáticos que sugerían que el movimiento comercial de estas personas jurídicas, podría estar relacionado con el comportamiento criminal investigado, y se encuentran bajo investigación en el legajo formado al efecto.

Finalmente, a Gabriel Esteban Zilli también le atribuyó la tenencia en forma ilegítima y sin la debida autorización legal, de un revólver marca `GEM´ calibre 32, serie nro. 6469 -incautado en el domicilio de la calle Víctor Mercante 1135, Rosario, provincia de Santa Fe-; un rifle marca `Marlin´ calibre 22 largo, serie nro. 1.103.747 -hallado en el domicilio de la calle Víctor Mercante 1141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe- y las siguientes municiones: cuatro calibre 357, dos calibre 45, quince calibre 38, cuarenta calibre 22 y dos cargadores de pistola calibre 45 con siete municiones en su interior.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal, postuló que las conductas desplegadas por Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Guillermo Adolfo Heisinger, Germán Emilio Marín López, Mario Alberto Lara Guerra, Nadín Eugenio Ardila Angulo, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Carlos David Pardey Rozo, César Andrés Macías Loor, Juan Carlos Ojeda, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli y Juan Alberto Banesevich, constituían -en principio- los delitos de comercio de estupefacientes - previsto y reprimido en el artículo 5 inciso `c´ de la ley 23.737-, agravado por haber sido cometido por tres o más personas organizadas -art. 11 inciso `c´ de la mencionada ley- en concurso real con contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional y en los que intervinieron más de tres personas (dos hechos que quedaron en grado de tentativa)-conducta prevista y reprimida en los artículos 863, 865 inciso `a´, 866 -párrafo segundo- y 871 del Código Aduanero-, los cuales, a su vez, concurrían materialmente con el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del CP.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Todos hechos que deberían reprochárseles en calidad de coautores (artículo 46 del Código Penal).

Respecto del hecho endilgado con exclusividad a Gabriel Esteban Zilli, vinculado con la tenencia del armamento secuestrado en los domicilios que se encontraban a su disposición el Dr. Delgado lo encuadró en el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor (artículo 55 y 189 bis, inciso 2, párrafo 1° del Código Penal).

b) Causa n° 2412

El 16 de agosto de 2016, la querella integrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), requirió la elevación a juicio de las actuaciones en relación a Carlos Miguel Potes Ramírez y Wilmar Yuriano Valencia Estrada, por considerarlos miembros de una asociación ilícita, ilícito que concurría en forma real -en su carácter de coautores con tres hechos de tráfico ilícito de estupefacientes, dos en su modalidad de contrabando de exportación de cocaína que se encontraba disimulada y por tratarse de sustancia estupefaciente que por su cantidad se hallaba inequívocamente destinado a la comercialización (artículo 864, inciso d y 866, párrafo 2 del Código Aduanero) y un hecho de comercialización (artículos 5 inciso `c´ de la ley 23737 y 55 del Código Penal); atribuyéndoles los mismos sucesos que fueran descriptos en los autos 2229.

En el mismo sentido, el señor Fiscal Federal, doctor Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6, requirió la elevación a juicio de los obrados y respecto de Potes Ramírez y de Valencia Estrada, por considerar que eran penalmente responsables en orden a los delitos de comercio de estupefacientes -previsto y reprimido en el artículo 5, inciso "c" de la ley 23.737- en concurso real con contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional y en los que intervinieron más de tres personas -dos hechos que quedaron en grado de tentativa-, conducta prevista y reprimida en los artículos 863, 865 inciso `a´, 866 párrafo segundo y 871 del Código Aduanero,

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

los cuales a su vez concurrían de ese mismo modo con el delito deasociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal, por los mismos hechos que fueran descriptos en el acápite correspondiente a la causa n° 2229.

El 18 de octubre de 2017, el Juez de grado declaró la clausura de la instrucción y dispuso la elevación de las actuaciones a este Tribunal, quedando registradas bajo el n° 2412.

c) Causa n° 2438

El 7 y el 19 de diciembre de 2017, respectivamente, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6 y la parte querellante, en cabeza de la AFIP, requirieron la elevación a juicio de las actuaciones y en relación a Edilberto Vargas Fernández, Diana Cristina Suárez Heredia y Víctor Alfonso Camargo López, por considerarlos, en principio, miembros de una asociación ilícita, en concurso real en su carácter de coautores, con tres hechos de tráfico ilícito de estupefacientes -dos en la modalidad de contrabando de exportación de cocaína que se encontraba disimulada y por tratarse de sustancia estupefaciente que por su cantidad se encontraba inequívocamente destinada a la comercialización (artículo 864 inciso d y 866 párrafo 2 del Código Aduanero) y un hecho de comercialización (artículo 5, inciso "c" de la ley 23.737 y 55 del Código Penal); atribuyéndoles los mismos hechos que los descriptos en ocasión de analizar los autos n° 2229.

El 3 de enero de 2018, el Juez de grado declaró la clausura de la instrucción y dispuso la elevación de las actuaciones a esta dependencia, oportunidad en la que se registraron bajo el n° 2438.

d) Causa n° 2500

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6 y la querella de la AFIP, requirieron, el 15 y 16 de marzo de 2018, respectivamente, la elevación a juicio de los actuados y en relación a Williams Triana Peña, por considerarlo en principio miembro de una asociación ilícita, delito que concurre en forma real con tres hechos de tráfico ilícito de estupefacientes -dos en su modalidad de contrabando de exportación de cocaína que se

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

encontraba disimulada y por tratarse de sustancia estupefaciente que por su cantidad se hallaba inequívocamente destinada a la comercialización (artículo 864 inciso d y 866 párrafo 2 del Código Aduanero) y un hecho de comercialización (artículo 5, inciso `c´ de la ley 23.737 y 55 del Código Penal)-, en calidad de coautor; en razón de los hechos debidamente descriptos en la causa n° 2229.

El 11 de abril de 2018, el Juez de grado declaró la clausura de la instrucción y dispuso la elevación de las actuaciones a esta dependencia, oportunidad en la que se registraron bajo el n° 2500.

El día 29 de agosto de 2018, luego de la lectura de los requerimientos de elevación a juicio confeccionados por la Fiscalía de grado y por la querella que representa al Fisco Nacional, se dio inicio al debate oral y público".

III. Sentado ello, vale adentrarnos en las nulidades rechazadas por el tribunal *a quo,* pero sólo las que fueron recurridas ante esta instancia.

a. En primer lugar, resulta dable recordar que las nulidades procesales tienen por objeto el resguardo del debido proceso y la defensa en juicio.

En reiterados precedentes, a los que en honor a la brevedad me remito, he sostenido, con cita en doctrina y en la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, mas no cuando falte una finalidad práctica en su admisión. En ese sentido, la nulidad por vicios de forma carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; y su procedencia exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, aquella sanción aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

que también está interesado el orden público 1(cfr. causas nº FSA 19498/2014/TO1/CFC3, "Urzagaste Faustino Irineo y otros s/recurso de casación", reg. 1104/18, rta. 18/10/2018; FCB 10792/2015/TO1/CFC1 "CORZO, Jorge Alberto y otros s/ recurso de casación", reg. 1909/19, rta. 24/10/2019; y FSA 18/2018/TO1/CFC1, "Rabis, Martín Berthold s/ recurso de casación", reg. nº 743/20, 30/06/2020, entre otras; todas ellas del registro de esta Sala I de la CFCP).

Bajo ese prisma es que corresponde examinar los cuestionamientos que sobre el tópico indicado han sido traídos a consideración por los recurrentes.

Sobre esa base, advierto que los planteos efectuados por las partes no tendrán acogida favorable en esta instancia. Ello así, toda vez que en el particular, las defensas no han demostrado ni ofrecido elemento alguno que permita determinar la existencia de una irregularidad de las características que plantean.

En tal sentido, corresponde asentar que *"la demostración del perjuicio por la parte que solicita la nulidad es requisito insalvable, aun cuando se aduzcan supuestas nulidades de carácter absoluto. Quien invoca la violación de garantías constitucionales debe demostrar el concreto detrimento que podría generar a su parte el presunto vicio, toda vez que una declaración de tal gravedad no puede permitirse sea hecha en puro interés de la ley, cuando no ha causado efectos perniciosos para los interesados"* (CFCP, Sala IV, Causa N° 544, "Corrao, Raquel Margarita s/recurso de casación", Reg. N° 1158.4, 05/03/1998).

En efecto, las nulidades planteadas son una reedición de las intentadas en la instancia anterior y que recibieron –en su mayoría- acabada respuesta por parte del *a quo*.

b. Rechazo del planteo de nulidad del juicio por violación a los principios de inmediatez, continuidad y oralidad, en los términos exigidos para la observancia de los principios constitucionales de debido proceso legal, defensa en juicio, imparcialidad del juzgador y acceso a la jurisdicción en tiempo oportuno.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Para así decidir el tribunal *a quo* primero apuntó que *"…[l]a interpretación restrictiva en materia de nulidades, aceptada por la totalidad de nuestra doctrina y jurisprudencia, desde luego que no implica el desconocimiento de las supuestas irregularidades o su caprichoso rechazo. Conlleva asumir con responsabilidad que esta sanción no puede ser aplicada indiscriminadamente, sino como `ultima ratio´ ante un acto que ofende, sin solución, garantías constitucionales, o cuando así expresamente lo dispone el legislador por presumir tal consecuencia de los vicios que invalida con la sanción. La nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal, exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. Es que de otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacuo, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público. Por ello se consagra que la regla es la estabilidad y mantenimiento de los actos procesales, resultando la nulidad una excepción de utilización restrictiva, por afectar la progresividad del proceso y la seguridad y firmeza de sus actos, lo que es igual a decir, su esencia misma"*.

Luego, señaló que *"…no podemos dejar de destacar el hecho público y notorio de la pandemia de alcance global producida por el virus COVID-19, generó una situación excepcionalísima, desconocida por su magnitud hasta el presente en nuestra historia que llevó al Poder Ejecutivo Nacional a disponer y organizar el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio a través del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/20 del 19 de marzo de 2020 y sus respectivas prórrogas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo tal lineamiento, dictó sendas Acordadas a fin de garantizar el servicio de justicia en esta situación de excepción. Así, el 16 de marzo del corriente, el Máximo Tribunal, dictó la acordada 4/20 del 16 de marzo del corriente por la que declaró inhábiles los días 16 a 31 de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

marzo para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales del Poder Judicial de la Nación. Cabe señalar, que en esa fecha (16 de marzo de 2020), este Tribunal, en atención a las medidas epidemiológicas de público conocimiento relacionadas con el COVID-19 (Coronavirus) emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, al considerar que varios de los participantes en este debate oral y público constituían población de riesgo, según lo estatuido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que no se encontraban dadas las condiciones de salubridad necesarias para la celebración de las audiencias, suspendió la audiencia fijada para el 17 de marzo del corriente (cfr. fs. 9501). En ese mismo decreto, se corrió traslado a las partes a efectos de que evaluaran la posibilidad de que los acusadores pudieran contestar las nulidades planteadas por las defensas a través de memoriales escritos o en soporte electromagnético y cabe destacar que la Fiscalía General, la querella (AFIP) y la Defensoría Oficial admitieron esa forma de realizar los actos jurídicos. Por el contrario, el doctor Silvestroni, letrado defensor de Williams Triana Peña, no aceptó la posibilidad de que las nulidades fueran contestadas por escrito y no admitió ningún otro proceso que no fuera el debate presencial, de donde fue esa oposición de la defensa, la que motivó la búsqueda de otros medios para continuar con el debate".

"Así, el 16 de abril próximo pasado, se libró oficio al Administrador General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a efectos que informe si era posible llevar adelante o no, las audiencias virtuales que fueran necesarias hasta la conclusión del debate y posteriormente, se efectuaron diferentes diligencias los días 4, 22 y 28 de mayo, hasta finalmente poder concretar una prueba técnica exitosa con todas las partes el 2 de junio. En esa misma fecha se fijó audiencia de debate para el 4 de junio, la que se realizó en forma virtual por medio de las plataformas VPN y Cisco Jabber las que, conforme lo informado por la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, garantizaban la seguridad y la calidad en la conexión".

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

En base a ello, entendió que *"…la actuación de este Tribunal buscó no solo lograr, por todos los medios disponibles, la prosecución del debate, sino también evitar que las partes se vieran sometidas a algún perjuicio sanitario o que la salud de una o más de ellas se viera afectada como consecuencia de la celebración de las audiencias en forma presencial"*.

También, remarcó que "…*en lo referente a la no habilitación de los fines de semana y de la feria judicial de verano para la realización de audiencias, corresponde poner de resalto que los defensores omitieron reflejar en su presentación que el Presidente del Tribunal planteó, en la audiencia del 24 de septiembre de 2019, la posibilidad de que cada una de las defensas tuviera una sola jornada para alegar. Tal alternativa que habría reducido en forma significativa la cantidad de jornadas de debate, fue rápidamente descartada por las defensas, quienes se pusieron de acuerdo para programar las audiencias de sus alegatos e incluso varias dispusieron de más de una jornada para alegar respecto de un solo imputado"*.

En lo atinente a la inexistencia del expediente digital, refirieron que "…*el 27 de abril de 2020, la doctora Taricco, letrada defensora de Heisinger y Lara Guerra, solicitó se cargaran de manera pública las presentaciones realizadas por las distintas defensas y ante a tal presentación, en la misma fecha se puso en conocimiento de las partes que todas ellas serían notificadas de la totalidad de las resoluciones adoptadas en las cuatro causas (2229, 2412, 2438 y 2500) durante la feria judicial extraordinaria"*.

Por último, señalaron que "…*no compartimos la interpretación efectuada por las defensas del artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación… Consideramos que la interrupción en la continuidad del debate generada por la ya citada situación excepcional de cuarentena y aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) en virtud de la pandemia de alcance global producida por el virus COVID-19, podría llegar a equipararse, sin duda alguna, con el dichoso*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

supuesto de suspensión de treinta días hábiles estipulado en el artículo… plazo que… nunca transcurrió en este proceso".

Puntualmente, del rechazo de esta nulidad se agraviaron los doctores Virgolini y Silvestroni, conforme surge de la descripción de agravios efectuada en el punto "2) f", y el doctor Beldi tal cual surge del punto "6) a".

Lo cierto, es que no lograron demostrar el vicio jurídico que alegan, pues los argumentos desarrollados por el *a quo* fueron por demás conducentes. En efecto, la nulidad interpuesta buscaba, sin más, empezar el debate oral de nuevo, lo que a mi modo de ver hubiese provocado un retardo injustificado en la administración de justicia, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los imputados se encontraban –en ese momento- privados de su libertad con prisión preventiva.

En base a ello, y atento el cúmulo de las presentes actuaciones, por la cantidad de imputados, de testigos y de prueba, no advierto que el tribunal haya vulnerado garantía constitucional alguna, por el contrario, tomó las medidas necesarias para llevar adelante un juicio oral de manera remota mientras se transitaba una situación excepcional de pandemia en virtud del virus COVID-19.

Por lo demás, es dable agregar que me he pronunciado en el mismo sentido en la causa CFP 6147/2017/TO1/CFC3 "Sánchez de Loria, Mariano y otros s/recurso de casación", rta. el 17/9/2021, Reg. 1668/21 de esta Sala I.

c. Rechazo del planteo de nulidad por falta de Requerimiento Fiscal de Instrucción, actuación irregular de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), falta de seguimiento de los carriles normales de atribución de la causa al Juez competente e incumplimiento de la acordada 37/12 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

De esta nulidad rechazada también se agraviaron los doctores Virgolini y Silvestroni como defensores de Williams Triana Peña y el doctor Beldi como defensor de Carlos Olmedo Silva Cardenas, conforme surge de

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la descripción de agravios efectuada en el punto "2) f" y "6) b" respectivamente.

Así, el tribunal *a quo* indicó que *"…debemos mencionar que los reclamos nulificantes de las defensas ya fueron analizados y resueltos por este Tribunal con anterioridad. Véase que el 18 de mayo de 2017 se resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad de todo lo actuado a partir de la fs. 7/8 de las presentes interpuesto, con similar argumento, por el Dr. Carlos Tomás Beldi, abogado defensor de Carlos Olmedo Silva Cárdenas (cfr. fs. 14/6 del incidente 7650/14/T01/12)".*

"En el mismo orden de ideas y por iguales razones, a las que nos remitimos, el 19 de mayo de 2017, este Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad de todo lo actuado en la presente causa interpuesto por el Dr. Pedro Martino, abogado defensor de Germán Emilio Marín López y Jorge Enrique Trujillo Sánchez (cfr. fs. 12/5 del incidente 7650/14/TO1/13) y es de destacar, que ambos resolutorios fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 22 de septiembre de 2017 (cfr. fs. 52 del incidente 7650/14/T01/12 y 45 del incidente 7650/14/TO1/13)".

"Además, el 26 de julio de 2017, se resolvió no hacer lugar a las excepciones de falta de acción, jurisdicción y competencia como así tampoco a la nulidad de todo lo actuado interpuestas en su momento por el Dr. Claudio Adrián Lifschitz, abogado defensor entonces de Mario Alberto Lara Guerra (cfr. fs. 67/73 del incidente 7650/14/TO1/14)".

Adujeron que en *"…la criminalidad organizada, la investigación se dirige a una pluralidad de sujetos integrados en redes complejas que tienen repercusiones económicas importantes por lo que, para afrontar esos fenómenos criminales, no es suficiente esclarecer y sancionar hechos delictivos concretos sino que aquélla se dirige primordialmente a desmantelar la propia organización delictiva (cf. Bachmaier Winter, Lorena "Información de Inteligencia y Proceso Penal" en "Terrorismo, Proceso Penal y Derechos Fundamentales" Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2012, pp.57). En la actualidad, por la entidad, dinámica y extensión de esos grupos delictivos, el*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

enfrentamiento con la criminalidad organizada, es impensable sin las investigaciones que llevan a cabo los Servicios de Inteligencia de cada Estado y dentro de ellos los de cada fuerza de seguridad y existen razones que lo explican,) y entre ellas el desarrollo tecnológico que ha facilitado el acceso a múltiples bases de datos y, en definitiva, a grandes cantidades de información y que, obtenida y procesada con fines de estudio y análisis resulta útil para los fines del proceso penal, llegando a veces a ser estos datos y elementos, imprescindibles para articular de manera efectiva la respuesta penal. (op.cit. pps 45 y 46)".

En base a ello, el tribunal *a quo* asentó que *"…debemos hacer una aclaración indispensable, más allá de que esa información de `inteligencia´ sea cada vez más presente y necesaria, ello no implica que deban renunciarse a las garantías del Derecho y al Debido Proceso Penal pues, en definitiva, eso es lo que se pretende, que si el juez de que se trate, es persuadido por esas tareas de inteligencia, plasmadas en los pertinentes informes, de su veracidad y, sobre esa base, adoptar medidas investigativas en el proceso que puedan tener implicancias en los derechos y garantías de los sujetos sometidos a aquél, tales informes, no pueden fundarse en especulaciones o conjeturas, sino que deben estar necesariamente apoyadas en documentación o testimonios adquiridos legítimamente".*

Y así, entendieron que en el caso concreto *"…esa licitud está dada, precisamente, por la previa aprobación de esa actividad de inteligencia por parte del Magistrado interviniente".*

Memoraron que *"de las investigaciones 413/11 `Vivas Vargas Alejandra y otros s/ infracción ley 23737´, se inició el día 14 de enero de 2011 a partir de la información que fuera suministrada por las autoridades de la Policía Nacional de Colombia y de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) mediante la cual se precisó la existencia de una presunta célula criminal, conformada en su mayoría por personas de nacionalidad colombiana. A partir de la investigación allí emprendida habría sido posible revelar la existencia de una organización criminal que estaría integrada*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

por personas de nacionalidad argentina, colombiana, peruana, uruguaya y neozelandesa y dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes. Y ese legajo fue elevado a la sede de este Tribunal quedando registrado bajo el número de causa 1625".

Explicaron que *"…previo a la elevación de aquél, el Juez instructor dispuso la extracción de testimonios en orden a materializar diversas capturas internacionales; a la vez que resolvió extraer otro juego de testimonios en miras de investigar las actividades ilícitas que habría llevado a cabo Milton Ferney Hernández Moreno, formándose la causa 15475/11. En el marco de estos últimos autos, el Juzgado Instructor dispuso el procesamiento de los allí imputados por el delito de contrabando tentado de exportación de una considerable cantidad de cocaína diluida en biodiesel. En razón de que en la etapa de investigación (a diferencia de lo ocurrido en los autos n° 413/11) solo se habrían corroborado hechos en presunta violación al control aduanero, el Tribunal interviniente declaró su incompetencia parcial y remitió la causa n° 15475/11 al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 5 (Secretaría n° 9), siendo posteriormente elevadas tales actuaciones al Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3. De igual manera, permaneció en la Secretaría n° 24 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº 12 otra parte de la investigación desplegada en la causa n° 15.475/2011, centrada en el legajo de Investigación n° 17, la que se orientó a determinar la existencia de vinculaciones y subordinación de algunos de los miembros de la facción criminal investigada en aquellos autos con sujetos afincados en la República de Colombia que se dedicarían a las mismas actividades delictivas".*

Remarcaron que *"…ante la imposibilidad técnica de mantener el número de registro del legajo de investigación n° 17 respecto del expediente n° 15.475/2011 (en el sistema informático), el Juzgado n° 12 del Fuero resolvió registrar el 8 de agosto de 2014, ese legajo como causa n° 7650/2014 y tal disposición fue expresamente informada por el Juzgado n° 12 del Fuero en el oficio obrante a fs. 6069".*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

El Segundo Comandante de la Gendarmería Nacional Francisco Alejandro Pucci señaló, al momento de prestar declaración durante el debate oral, que esta causa era una prosecución de dos causas anteriores. Así, relató que *"…al llegar, en el año 2011, a la Unidad de Antidrogas Urbanas se le había asignado la tarea de realizar una investigación, que en ese momento, fue conocida como `Operación Canguro´, sobre una organización de personas en su mayoría colombianas que enviaban drogas al exterior y destacó que, al finalizar aquélla, varios de los sujetos que integrarían dicha agrupación que no habían sido identificados correctamente, ni detenidos, lo que había motivado la apertura de una nueva causa, precisamente la conocida como `Operación Biodiesel´.*

En tal sentido, *"Pucci puso de resalto que en tal investigación se había detectado el envío de material estupefaciente oculto en un `bin´ de biodiesel a España y que, luego de que finalizaran esas actuaciones con la detención y posterior condena de todos los sindicados, se inició el proceso que nos ocupa como consecuencia del resultado de las pesquisas producidas en ella. Particularmente debe señalarse que a fs. 7/8 de las presentes, obra una nota de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación Argentina firmada por el Director de Contrainteligencia Horacio Germán García en la que acompañó un artículo publicado en el diario `La Nación´ el 19 de diciembre de 2013 y es de destacar que ya en el debate prestó declaración testimonial dicho funcionario ratificando tal nota y dando razón, tanto de las diligencias que se habían realizado en aquel organismo, como del personal de la sección a su cargo que había intervenido en ellas, entre los cuales mencionó a Miguel Angel Conti. En tal artículo se mencionaba la captura de orden internacional de Carlos Julio Poveda Medina (alias `Toca´) dispuesta por el Juzgado Federal n° 12, al cual se le imputaba formar parte de una organización narcocriminal involucrada en el embarque a España de cocaína diluida en biodiesel (cfr. fs. 2). Tal pieza refería, entre otros aspectos, que el nombrado con un documento falso a nombre de Miguel Ángel Suárez había salido*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de la Argentina hacia Brasil, donde desde la ciudad de San Pablo había viajado a Lisboa, Portugal, siendo recogido allí por un automóvil que lo traslado hasta España (cfr. fs. 2)".

"El Director de Contrainteligencia destacó que en el marco de los autos caratulados `Policía de Seguridad Aeroportuaria s/ intervención´ (expte. FCB n° 22018460/13), en trámite por ante el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Penal, había tomado conocimiento a través de fuentes confidenciales que el ciudadano argentino Miguel Ángel Suárez, viajaría a Europa con la finalidad de operar la descarga en puerto de cocaína mimetizada en contenedores transportando madera y carbón vegetal, entre otros productos trascendidos. Sumado a ello, la nota periodística referida mencionaba a otra persona identificada como `Charly´ en complicidad con Póveda Medina, respecto de la coordinación de movimientos del grupo criminal responsable del envío de cocaína diluida en biodiesel (cfr. fs. 2) y corresponde señalar aquí que en esta cuestión, de la nota de la Secretaría de Inteligencia surge que la vinculación de la permanencia en Buenos Aires de Carlos Julio Poveda Medina junto a Carlos Olmedo Silva Cárdenas".

Así, señaló que durante el debate declaró Miguel Ángel Conti quien indicó que *"…el principio de esta investigación había tenido como disparador un artículo del diario La Nación que motivó la estructuración de un informe, ello por existir datos coincidentes entre tal pieza y los datos disponibles en esa Agencia Federal de Inteligencia y que, oportunamente, tal informe había sido elevado al Juzgado Federal n° 12 de esta ciudad para que se evaluara su contenido. Manifestó que la información que tenía la Agencia era que Carlos Poveda Medina que había viajado hacia España, vía Brasil, con una escala intermedia en Portugal con un documento apócrifo argentino a nombre de Miguel Ángel Suárez y agregó que existía un informe previo que había sido remitido al Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de Córdoba, en el que se daba cuenta de `la existencia de un colombiano´ que había viajado a Europa, presumiblemente a Francia o a España, con el propósito de negociar una exportación de contenedores transportando madera o carbón vegetal con estupefacientes".*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

"Luego precisó Conti que ese contacto `Charly ´, no era otro que Carlos Olmedo Silva Cárdenas que, conforme fuentes documentales, había realizado trámites de radicación en el país, tenía documento de identidad argentino, residía en el barrio de Belgrano de esta ciudad, tenía un teléfono celular (registrado a nombre de Damián Carrizo) que había sido activado en coincidencia con el período en el que `Toca´ había viajado a Europa, por lo que podía inferirse que tal aparato iba a ser utilizado para la comunicación entre Póveda Medina y Silva Cárdenas. Luego de referir que dentro de los archivos de la Gendarmería Nacional, se había identificado una fotografía de una reunión en el bar de un hotel entre Póveda Medina y Silva Cárdenas, añadió que en el informe elevado al Dr. Torres obraba un documento de identidad apócrifo, que había sido emitido gracias a un contacto en el Registro de las Personas de la localidad de Wilde, Provincia de Buenos Aires, apodado `Fabi´ y se había enfatizado la necesidad de intervenir los números telefónicos allí incluidos por parte del Juzgado".

Remarcaron que *"Conti puso de resalto que la totalidad de la información disponible en el mosaico informativo de la presente causa había sido puesta a disposición del Dr. Torres, quien había convalidado tales diligencias y habilitado una investigación conjunta de la Agencia Federal de Inteligencia con la Gendarmería Nacional, y, en ese mismo orden de ideas, debemos remitirnos a lo expuesto por el Segundo Comandante Pucci cuando afirmó que con información aportada por el ex Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), se había tomado conocimiento en aquella época que el traslado de estupefacientes que se pretendía realizar mediante la ocultación en tambores de biodiesel, contaba también con la colaboración de un sujeto conocido como `Charly´ –que había resultado ser Carlos Olmedo Silva Cárdenas-, quien, como pago, habría de recibir quinientos mil euros –cfr. informe agregado a fs. 151 que se encuentra incorporado- y sería socio del principal implicado en ese expediente, Carlos Póveda Medina alias `Toca´, dato que había sido luego corroborado, por existir fotografías de alguna*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

reunión entre ambos, en el marco de seguimientos realizados en aquella causa de `Biodiesel´.

En virtud de ello, el tribunal *a quo* aseveró que *"…existían elementos de prueba que permitían afirmar que el inicio de este proceso era una continuación de las causas 413/11 y 15475/11. Sobre esta base es que no compartimos lo afirmado por las defensas en cuanto postularon que existía un incumplimiento de lo previsto por la acordada 37/12 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto de la extracción de testimonios practicada por el Juzgado Instructor. Puntualmente, el artículo 25 de la mencionada normativa hace referencia a una enumeración de ejemplos para los casos en que deban extraerse testimonios, que no es taxativa, y donde se aclara además que dichas piezas conformarán las actuaciones que prosigan su trámite en el Juzgado instructor por lo que serán las que se mantengan en el registro existente, conservando así el mismo número de causa. De aquí surge que el Dr. Sergio Torres a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, cumplió con lo establecido en tal norma con la salvedad de que no había podido conservar el número de registro existente por las razones más arriba detalladas".*

También apuntaron que *"…tampoco se verifica en autos una actuación irregular de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Nación en violación de lo estipulado por la ley 25520, teniendo en cuenta lo dispuesto oportunamente por el Dr. Sergio Torres, validando la actuación de ese Organismo y que `supra´ se señaló, lo que motiva el rechazo del planteo nulificatorio, tanto más cuanto que en éste las defensas no agregaron elementos novedosos al reclamo que fuera oportunamente resuelto por este Tribunal el que, desde luego que mantiene total vigencia y que refería que se había establecido que la notitia criminis que diera inicio a la presente investigación, surgida en el marco de una causa claramente identificada, constituía un elemento legalmente apto para enervar la actividad de la actividad investigativa subsecuente".*

Por otro parte, respeto al supuesto ocultamiento del expediente 22018460/13 "Policía de Seguridad

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Aeroportuaria s/ intervención telefónica" del Juzgado Federal n° 2 de Córdoba, el *a quo* asentó que *"…no obstante que tal causa no fue incorporada por lectura al debate (cfr. resolución del 28 de agosto de 2019 obrante a fs. 8776/8), hay que poner de resalto que en ella no se investigó a los imputados de la presente, sino que simplemente resultó de interés para el dato o información inicial que se habría proporcionado y el cual, por las vinculaciones advertidas, permitió dar con los procesados en estos autos".*

Por último, se refirió que *"…tampoco tendrá acogida favorable el planteo de nulidad por ausencia de requisitoria de instrucción fiscal, puesto que a fs. 24 del expediente 1625 o 413/11, obra el correspondiente requerimiento de instrucción fiscal (art. 180 del Código Procesal Penal de la Nación), quedando así instada la acción penal en aquella investigación, que como anteriormente dejáramos en claro, resulta ser la génesis del presente expediente y, sumado a ello, el representante del Ministerio Público Fiscal fue notificado de cada medida dispuesta por el Juez de Instrucción, no habiendo formulado objeción alguna, por lo que se evidencia su tácita convalidación del progreso del sumario. En este sentido, la ausencia en esta nueva línea investigativa de un dictamen formal en los términos del art. 188 del Código Procesal Penal de la Nación fue suplida por la totalidad de las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, que con su actuación concreta, habilitó el devenir del sumario, no habiendo formulado objeciones e incluso manteniendo un temperamento convalidante en oportunidad de expedirse en los términos del art. 346 del Código Procesal Penal de la Nación".*

Reseñado ello, es dable señalar, que tal cual lo refiriera el *a quo*, esta Sala I con integración parcialmente distinta (doctores Ana María Figueroa, Eduardo Rafael Riggi y Liliana Elena Catucci), declaró mal concedidos los recursos de casación interpuestos por las defensas de Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Germán Emilio Marín López y Jorge Enrique Trujillo Sánchez contra las resoluciones que no hicieron lugar a la nulidad de todo lo actuado (cfr. registros n° 1275/17 y n° 1276/17, de fecha 22/9/17 de esta

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Sala I), cuyos recursos extraordinarios federales también fueron rechazados en fecha 27/10/17 (cfr. registros n° 1466/17 y n° 1470/17).

Ahora bien, el rechazo de esta nulidad sólo ha sido recurrida –en esta oportunidad- por la defensa particular de Williams Triana Peña y Carlos Olmedo Silva Cardenas, sin que se hayan hecho cargo de rebatir la robusta fundamentación expuesta, lo que evidencia una disconformidad con la solución dada.

En efecto, del cotejo de los argumentos expuestos y los fundamentos brindados en el fallo, se advierte que la crítica de la parte se circunscribe simplemente a alegar lesiones constitucionales sobre la base de un tratamiento adverso de su pretensión por parte del tribunal oral.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que *"los agravios que constituyen meras discrepancias con el criterio del sentenciante pero distan de tener una crítica correcta y razonada de los fundamentos que informan la sentencia, resultan ineficaces"* (Fallos: 321:272).

En virtud de ello, estimo que los agravios traídos a esta instancia deben ser desechados.

d. Rechazo del planteo de nulidad de las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaria n° 24 por falta de motivación suficiente.

El rechazo de este planteo de nulidad fue recurrida por las defensas de Williams Triana Peña –ver punto 2)f de la descripción de agravios-; Mario Alberto Lara Guerra –ver punto 4)b-; Jorge Enrique Trujillo Sánchez –ver punto 5)-; Carlos Olmedo Silva Cárdenas –ver punto 6)c- y Germán Emilio Marín López –ver punto 8)-.

Para resolver como lo hiciera, el tribunal *a quo* comenzó recordando que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sostuvo al respecto ante este mismo planteo que "`[H]*e aquí la concreta critica de las defensas, lejos de evidenciar una motivación suficiente para ordenar tales medidas, advierten que cada una de las intervenciones dispuestas no es sino reflejo de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

informes fragmentados por las agencias de investigación convocadas por el Juez. Sin embargo, con aproximarse al estudio de las constancias glosadas en la causa, lo cierto es que tales aseveraciones terminan por sucumbir. Cada una de las comunicaciones fue intervenida no sólo mediando una orden judicial previa, sino y principalmente, indicándose de manera concreta y especifica los elementos que persuadían a la toma de tal decisión. Ciertamente, no habrá de negarse que, en cada caso, las razones que llevaron a adoptar tales medidas encontraron su anclaje en las sospechas que la Gendarmería Nacional evidenciara en cada uno de sus informes. En este punto, resulta claro que, partiendo de las sospechas que signaron el inicio de la investigación respecto de Silva Cárdenas y de los movimientos que desde allí se registraron, es que se fue dando la intervención de todos los abonados. Así pues, montados los unos sobre los otros, fueron los informes que Gendarmería Nacional elevara al magistrado los que, en efecto, sirvieron como fundamento para viabilizar cada una de las intervenciones´ (cfr. fs. 4456 vta./7)".

Sobre el punto, el tribunal indicó que "*…todo ciudadano tiene el derecho de gozar de un ámbito exclusivo para desarrollar sus planes de vida y no sólo el domicilio, sino también otras facetas de ese ejercicio resultan alcanzadas por esa esfera de protección. No obstante, ninguno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional es absoluto en su esencia, sino que todos se hallan sometidos a ciertas restricciones".*

Luego puntualizó que *"[l]a cuestión no reside, en si está permitido invadir las áreas privadas de los individuos, sino si ello se ha hecho de conformidad con las directrices que así lo habilitan*".

Así fue que, luego de asentar fallos del Alto Tribunal sobre la materia, sostuvo que "*…no le era exigible al señor juez de grado al momento de disponer las intervenciones telefónicas en autos, tener la semiplena prueba de la culpabilidad para su formulación, ya que en ese entonces tenía un cabal conocimiento del avance de la encuesta, ello mediante el análisis de las tareas de campo –observación y seguimientos- e informes que le eran brindados*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

por el personal que llevaba adelante la tarea por él encomendada. Teniendo en cuenta los antecedentes que se le presentaran al `a quo´, de no haber hecho lugar a las intervenciones telefónicas que se le había solicitado, se habría dejado de lado `…el conocimiento que surge de la experiencia, de la lógica y del sentido común… resultado absurdo que no puede presumirse querido por el legislador, y aquél lo hizo de acuerdo a las facultades que le otorga el ordenamiento procesal, no cuestionado por ninguna defensa (CSJN, Fallos, 341:207, y anteriores 306:796 y 320:2649)".

En tal sentido, señaló que *"…en las presentes actuaciones el 4 de junio de 2014, el Juzgado Instructor ordenó la intervención del número telefónico 4896-2765 instalado en el domicilio de la calle Zabala 1655 piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 17 de julio de 2014 (cfr. fs. 284). Posteriormente, el 2 de julio de 2014 dispuso la intervención telefónica del número 11-3089- 0688 de Felipe Silva Cárdenas hasta el 7 de agosto de 2014 (cfr. fs. 321). Tras ello, el 23 de julio de 2014 prorrogó la intervención telefónica de los dos números antes mencionados hasta el 4 de septiembre de 2014 (cfr. fs. 366). Finalmente, el 25 de julio de 2014 ordenó la intervención telefónica del número 11-6091-7808 perteneciente a "Mey", quién luego resultó ser Edilberto Vargas Fernández, hasta el 4 de septiembre de 2014 (cfr. fs. 372/3). De la sola lectura de tales decretos puede advertirse que las órdenes de intervención fueron dictadas por el Juez de Instrucción mediando `elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable´ obtenidos en el marco de una investigación que ya `se encontraba en marcha´ (cfr. C.S.J.N.; Fallos: 333:1674- considerandos 19 y 20)".*

Entendió que *"[e]l Instructor aquí, describió acabadamente los resultados obtenidos a esa altura a través de las diligencias probatorias que expuso en los autos ordenatorios de las intervenciones telefónicas, con motivos y razones suficientes para justificarlos, cumpliendo con la exigencia de `auto fundado´ establecida por el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación. El caudal de prueba en conocimiento del señor juez de grado a esa altura, lo*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

habilitaba con motivos suficientes y fundamento frente al objeto procesal determinado que tenía la investigación a su cargo, a proceder como lo hizo, sin que pueda sostenerse ahora, válidamente, que con ello se haya violentado garantía procesal alguna".

Ahora bien, corresponde realizar algunas consideraciones en torno al secreto del contenido de las comunicaciones telefónicas efectuadas entre particulares y a los requisitos previstos para el dictado de una medida que disponga su intervención en el marco de una investigación penal.

En primer término, cabe recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional -CN- garantiza la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y los papeles privados; y que, a partir de los derechos y garantías no enumerados (art. 33 de la CN), la protección que aquel articulado le asigna a la correspondencia escrita comprende también a las comunicaciones realizadas por medio del servicio de telecomunicaciones (Cfr. Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal. Fundamentos", segunda edición, cuarta reimpresión, Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., 2012, págs. 964-965).

El ámbito de privacidad del individuo se encuentra garantizado por el texto constitucional, el que procura otorgar inmunidad a las "acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero" (art. 19 de la CN).

En esa línea, cabe destacar que el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia -la cual, como indiqué, comprende el secreto de las comunicaciones telefónicas- del que toda persona goza se encuentra receptado, en el orden convencional, en los artículos 5 y 10 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre -DADH-; 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -DUDH-; 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH-; y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCyP-; todos ellos con jerarquía constitucional, en función del art. 75, inc. 22, de la CN.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

En tal inteligencia, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el noto precedente "Quaranta" (Fallos 333:1674), en el que equiparó la garantía de inviolabilidad del domicilio y la correspondencia al secreto de las comunicaciones telefónicas.

En efecto, en aquella ocasión, afirmó "(…) esta Corte, al referirse al art. 18 de la Constitución Nacional, ha expresado que en él se consagra "el derecho individual a la privacidad del domicilio de todo habitante -correlativo al principio general del art. 19- en cuyo resguardo se determina la garantía de su inviolabilidad, oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público" (ver "Fiorentino" Fallos: 306:1752). Si bien allí no se hizo mención a las comunicaciones telefónicas ni a la protección de su secreto, una interpretación dinámica de su texto más lo previsto en su artículo 33 y en los artículos 11, inciso 2º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 17, inciso 1º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto contemplan, en redacción casi idéntica, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, permiten hacer extensivas aquellas consideraciones a casos como el presente" (considerando 17º).

Así, cabe señalar que el artículo 236 del CPPN establece que el juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado; hallándose conminada bajo expresa pena de nulidad la ausencia de la debida motivación, en virtud de lo previsto en el art. 123 del citado código ritual.

En cuanto a la necesidad de contar con una orden judicial previa y fundada, en el citado fallo, el Máximo Tribunal recordó que "(…) una orden de registro -domiciliario o, como en este caso, de las comunicaciones telefónicas a los fines de develar su secreto y conocer su contenido- sólo puede ser válidamente dictada por un juez cuando median elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable (ver "Yemal", disidencia del juez

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Petracchi, considerando 5º y sus citas, Fallos: 321:510)" (Considerando 19º; el destacado me pertenece).

Dicho criterio fue sostenido por el Alto Tribunal en precedentes posteriores, entre ellos, "Fredes" (341:207), "Aparicio" (341:150) y "Silva" (CSJ, 58/2013, "Silva, Pablo Sebastián s/ causa 11.4052, rto. el 03/11/2015).

Además, y en el mismo orden de ideas, la CSJN dictó la Acordada n° 17/2019 el 19 de junio de 2019, en virtud de la difusión pública de la captación de comunicaciones privadas.

Así, en concordancia con la jurisprudencia citada en la materia, y ante el evento señalado, el cimero tribunal como cabeza del Poder Judicial de la Nación y como supremo custodio y último garante del goce de las garantías individuales, acordó: *"1) Declarar que todos los órganos judiciales, en los procesos y procedimiento involucrados en la interceptación y captación de comunicaciones, deberán observar los siguientes Principios Rectores en la materia: Instrumentalidad de las interceptaciones; Excepcionalidad y proporcionalidad; Fundamentación; Responsabilidad Sistemática; Confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogados y clientes; Impacto Tecnológico; Privacidad y forma republicana de gobierno; Control institucional judicial y parlamentario e Inteligencia criminal e investigación criminal… 2) Instrumentar los siguientes cursos de acción a fin de maximizar el cumplimiento de los principios rectores antedichos: … D. Exhortar a los jueces con competencia penal para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia (art. 4 inc. 1° de la ley 25.520, modificado por la ley 27.126)".*

A lo hasta aquí expuesto resta adunar que, tal como lo he sostenido con anterioridad, coincido "con la postura que sostiene que son requisitos ineludibles para la intervención de las telecomunicaciones, los siguientes: 1) la forma que ha de revestir la resolución en que se acuerde la intervención, que ha de ser expresamente motivada; 2) la condición o requisito *sine qua non* de la real constancia de

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

verdaderos y demostrados indicios, lo que no puede jamás equivaler a sospechas o meras conjeturas; 3) el plazo por el que ha de producirse la misma y, en su caso, su prórroga; 4) la finalidad que persigue la interceptación (cfr. Carlos N. Hall –La Prueba Penal – "Nova Tesis" Ed. Jca. Pag. 237)", (en este sentido, en lo pertinente y aplicable, confrontar mi voto en causas nº FCT 12000054/2013/TO1/CFC8, "Yatchensen, Daniel Enrique y otros s/ recurso de casación", reg. nº 1167/19, rta. 12/07/2019; nº FMZ 44590/2015/TO1/14/CFC1, "Sosa Álvarez, Sergio David y otros s/ recurso de casación", reg. nº 1390/19, rta. 12/08/2019 y más recientemente en causa FCR 94008371/2009/TO1/CFC2, caratulada "REYES, Juan Rodolfo s/recurso de casación", reg. n° 1527/21, rta. el 2/9/21.

A la luz del marco teórico desarrollado, en el particular, advierto que las defensas no han logrado demostrar el vicio jurídico que alegan, pues las críticas efectuadas carecen de entidad suficiente para la viabilidad de la nulidad pretendida.

Se han agraviado, indicando que no existían elementos que legitimaran las intervenciones telefónicas, afectándose los arts. 18 y 19 de la CN.

Entendieron también que en la mayoría de la causa se contaba con transcripciones o resúmenes de las escuchas, por lo que la incorporación al proceso era inválida.

Así pues, no puede soslayarse que los elementos con los que contaba el juez federal antes de ordenar las intervenciones telefónicas, eran de una entidad tal que ameritaba disponer la limitación de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En ese sentido, entiendo que el requisito de motivación no exige a los magistrados una prueba de culpabilidad de la persona que debe soportar la invasión en su esfera de privacidad, sino tan sólo una presunción razonable de la comisión de un delito (cfr. FCT 1662/2015/TO1/CFC4 "Rivero Aguilar, Pedro y otro s/ recurso de casación", reg. 1829/19, rta. el 10/10/19, entre otras), lo que efectivamente ocurrió en el caso de autos.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

De hecho, no existió un perjuicio constitucional concreto, puesto que las diligencias estuvieron ordenadas por el órgano constitucionalmente competente, en uso de sus facultades, sin que las partes hubieran logrado demostrar la falta de fundamentación tanto de la primera como de las sucesivas intervenciones telefónicas que se fueron sucediendo.

Vale reparar que las investigaciones efectuadas por el personal de Gendarmería Nacional a efectos de dar con los autores de los hechos bajo estudio, en modo alguno han significado una injerencia arbitraria en la vida privada.

En ese orden de ideas, resulta oportuno asentar cuanto sostuve en la causa FBB 9931/2017/TO1/4/CFC1 "Torres Samudio, Fidelina s/ recurso de casación", reg. n° 2325, rta. el 23/12/19, donde recordé la noción de "expectativa razonable de privacidad" dada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso *"Katz v. United States"* (389 U.S. 347, 351, 1967), según la cual sólo existe una zona de privacidad garantizada por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos si la persona ha actuado conforme a una real expectativa de privacidad y si la sociedad está preparada para reconocerla como razonable. Allí, se estableció que lo que una persona conscientemente expone al público, incluso en su propia casa y oficina, no es un asunto de protección de la Cuarta Enmienda, salvo lo que trata de preservar como privado, incluso en una zona accesible al público.

Además, es dable señalar que la profusa tarea de investigación que se desarrolló en la presente causa, encuentra sustento en los informes elevados a la instrucción por el personal de las fuerzas de seguridad que estuvieron a cargo de la investigación.

Los cuestionamientos de las defensas en definitiva versan sobre los informes realizados sobre esas escuchas telefónicas, y pretenden tergiversar el contenido de los mismos otorgándoles un sentido inocuo.

En cuanto a ello, vale decir que tales informes fueron debidamente incorporados al expediente, en

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

base a largos meses de seguimiento e investigación por parte de personal autorizado, que concluyeron con los allanamientos, detenciones y secuestro de material estupefaciente.

Entiendo, como he señalado en la causa n° FCR 1059/2016/TO1/CFC5 "Araujo Vázquez, Antonio y otros s/ recurso de casación", reg. n° 1392/20, rta. el 14/10/20, que en la valoración de las actuaciones policiales o de las fuerzas de seguridad debe partirse siempre del principio de veracidad de las diligencias por ellos realizadas, salvo -por supuesto- que su cuestionamiento se sustente en probanzas que las descarten o pongan en duda, lo que no ha ocurrido en autos.

Por lo demás, las defensas tampoco lograron demostrar que existiera una conjura o animosidad en contra de sus defendidos que permitiera desacreditar tales informes o incluso los testimonios de los investigadores.

En efecto, debe destacarse que éstos, declaran bajo juramento ante un tribunal oral en un proceso criminal y que, como funcionarios públicos, conocen las consecuencias a que se exponen de no conducirse con la verdad.

Todo ello encontró colofón en los allanamientos, registros domiciliarios y detenciones de los encausados que permitió confirmar las sospechas y el sentido dado por los preventores a aquellas conversaciones interceptadas.

Así entonces, estimo que no sólo las medidas ejecutadas eran necesarias para conseguir un fin legítimo, sino que se apreció razonadamente la conexión entre los sujetos afectados por la medida y los delitos investigados, habiéndose valorado tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad y pertinencia para asegurar la defensa del interés público (cfr. he sostenido en causa N° 13018283/2013/TO1, caratulada "Sole Recabarren, Sebastián Marcelo y otros s/ Infr. Art. 145 bis – conforme Ley 26.842, Fundamentos de la Sentencia N° 1519, rta. el 12 de junio de 2015, del Tribunal Oral Federal de Mendoza N° 1, y en esta Cámara Federal en causa FCT 1662/2015/TO1/CFC4 "Rivero

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Aguilar, Pedro y otro s/ recurso de casación", reg. 1829/19, rta. el 10/10/19).

e. Rechazo de la nulidad solicitada respecto de los actos acusatorios y de todos los autos de imputación y mérito desde el inicio de la causa hasta la oportunidad en que el Ministerio Público Fiscal y la querella realizaran sus alegatos, inclusive, por no haberse determinado en ellos el objeto procesal ni haberse descripto correctamente las conductas atribuidas a cada uno de los imputados.

El rechazo de esta nulidad fue recurrida por las defensas de Williams Triana Peña –ver punto 2)f de la descripción de agravios-; Lara Guerra –ver 4)a -; Trujuillo Sánchez –ver 5) - y Marin López –ver 8)-.

Para así resolver, el tribunal entendió que "…*Analizando los argumentos expuestos por las defensas, consideramos que su planteo tiene una clara vinculación con el principio de congruencia. La base de interpretación de tal principio está constituida por su relación con la máxima de la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. De conformidad con lo resuelto en Fallos 319:2959 (`Acuña´); 329:4634 (`Sircovich´), los votos en disidencia de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en Fallos 330:5020 (`Ciuffo´), corresponde distinguir entre congruencia fáctica y congruencia jurídica en tanto la materia de afectación de la defensa está constituida cuando: 1) se priva al acusado o a su defensa de la posibilidad de ofrecer prueba sobre los hechos relevantes o de discutir la ofrecida, o cuando 2) se les priva de toda posibilidad de discutir de modo útil la relevancia de esos hechos frente a una proposición normativa (voto del Juez García con remisión a su voto como juez subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal, causa Nº 12.590 `José, Raúl Omar s/recurso de casación´, Sala II, Registro 19355, resuelta el 15 de septiembre de 2011). En el considerando 4º del voto en disidencia de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en el caso `Ciuffo´, se dijo que, ciertamente, el principio de congruencia exige que el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

actividad acusatoria o defensiva (Fallos 329:4634)".

En tal sentido, apuntaron que *"Sin embargo, de ello no se sigue que los cambios de calificación no generen agravio constitucional alguno si versan sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate en el juicio, pues sólo se ajustarán al art. 18 de la Constitución Nacional los que no hayan desbaratado la estrategia del acusado impidiéndole formular sus respectivos descargos (conf. Fallos 319:2959, voto de los jueces Petracchi y Bossert).*

Sostuvieron con citas doctrinales y jurisprudenciales que está "*…claro entonces que la regla no se extiende a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos, por lo que el Tribunal que falla puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (iuranovit curia) y no por ello vulnerar el principio de congruencia".*

Así, indicaron que *"…al igual que varios de los planteos ya analizados, la cuestión ya fue analizada con anterioridad. Puntualmente, el 10 de abril de 2018, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24, rechazó el planteo de nulidad efectuado por la defensa de Williams Triana Peña respecto de los requerimiento de elevación a juicio realizados por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos obrantes a fojas 7545/7556 y 7559/7660 de la de la causa n 7650/14 caratulada `Silva Cárdenas Olmedo y otros sobre infracción ley 23.737´ (cfr. fs. 62 del incidente 7650/14/TO4/3) y tal decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 23 de mayo de 2018 (cfr. fs. 74 del incidente 7650/14/TO4/3)".*

"Por otro lado, las restantes defensas (Guillermo Adolfo Heisinger, Mario Alberto Lara Guerra, Germán Emilio Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Diana Cristina Suárez Heredia, Edilberto Vargas Fernández y Víctor Alfonso Camargo López) interpusieron en la etapa de alegatos del 393 del Código Procesal Penal de la Nación, la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, cuando hubo otros actos procesales importantes del proceso en los

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

que podrían haber impugnado tales piezas - arts. 349 facultades de la defensa antes de la clausura de la instrucción, 354 -citación a juicio a fin de que las partes examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas a fin de que ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes-, 358 -excepciones que las partes no hayan planteado con anterioridad-, y 359- designación de audiencia del Código Procesal Penal de la Nación, o como cuestión preliminar en el debate, de manera que podrían haberse agraviado en dichas oportunidades y no lo consideraron de vital importancia en función de la nulidad absoluta que ahora plantean".

Por ello, entendieron que *"…por motivos de seguridad jurídica y la necesidad de lograr una administración de justicia dentro de lo razonable evitando que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas, evitando discutir algo ya superado, consideramos que la oportunidad de efectuar los reclamos de nulidad se encuentra precluida".*

Sin perjuicio de ello, destacaron que *"…los requerimientos de elevación a juicio tanto del Representante del Ministerio Público Fiscal, como de la parte querellante expresaron la base fáctica sobre la cual tendría lugar el debate y permitieron conocer cuál iba a ser la imputación que sería analizada en esa instancia, permitiendo un efectivo ejercicio del derecho de defensa. Ambas piezas, mantuvieron la estructura de la acusación -principio de congruencia- mediante una descripción apta para que los acusados comprendan de manera efectiva el motivo de la imputación que se les dirigía; cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos a que hace referencia el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación. Véase que, luego de individualizar a los imputados, los acusadores dieron debida cuenta del contexto general en el cual se desarrollaron los acontecimientos materia de investigación, la calificación legal escogida y una exposición sucinta de los motivos en que se fundaron".*

Por lo demás, señalaron que *"…tanto la doctora Requeijo como el doctor Velasco no realizaron una descripción*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

genérica de los hechos sino que se ocuparon de cada uno de los acusados en particular y efectuaron un análisis detallado de la prueba documental recabada en la investigación individualizando fojas, fechas, lugares y valorando los testimonios vertidos durante el debate".

Sobre esta base, asiste razón al *a quo* por cuanto las defensas no han introducido argumentos que logren desvirtuar el rechazo de esta nulidad.

En efecto, considero que no han logrado demostrar el vicio jurídico que alegan, y sólo se trasluce en un intento por mejorar la situación procesal de sus defendidos, planteando la nulidad por la nulidad misma.

Ninguno de los requerimientos de elevación a juicio ni los alegatos expuestos durante el debate presentaron los vicios planteados. De hecho cumplían con todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente para cada acto procesal.

El objeto procesal de la presente causa resultó ser la existencia de una organización criminal dedicada a ejercitar actos relacionados con el tráfico de estupefacientes, cuya estructura delictiva estaba orientada a la exportación del material estupefaciente al exterior, sobre todo a la región europea, generando con ello ingresos de divisas.

Se determinaron tres hechos en forma particular que fueron el objeto del juicio, los que no fueron controvertidos, sino que por el contrario fueron debidamente acreditados en el transcurso del debate.

Así pues, resulta evidente que de lo que se agravian es de la valoración de las prueba de cargo en contra de sus defendidos, por lo que los agravios interpuestos en contra del rechazó de la presente nulidad serán rechazados sin más.

f. Rechazo del planteo de nulidad del inicio de la causa 13528/13 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1, Secretaría 1 de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires

De la nulidad rechazada del inicio de la causa de san isidro, se agravió únicamente la defensa de William

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Triana Peña en esta instancia –ver punto 2)f de la descripción de agravios-.

Para resolver de la manera en que lo hizo el *a quo* memoró que *"[t]ales actuaciones, se iniciaron el 1 de diciembre de 2013 a raíz de la entrevista que la diputada Elisa Carrió en el programa de televisión `Hora Clave´, emitido por el Canal 26, donde la entonces legisladora había referido que en el Barrio Nordelta residían personas que integraban el Cartel de Medellín… En base a ello, la Jueza Arroyo Salgado ordenó a su Actuaria, que a través de la compulsa de la `web´, estableciera e imprimiera las referencias que hubieran sido publicadas en distintos medios periodísticos sobre el punto… Una vez realizada tal tarea, el 11 de diciembre de 2013, la Sra. Magistrada corrió vista en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal nº1 de San Isidro… el 17 de diciembre de 2013, el Fiscal Federal, doctor Fernando Domínguez formuló requerimiento de instrucción en los términos del artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación y solicitó al Juzgado que citara a prestar declaración testimonial a la Diputada Nacional Elisa Carrió… el 30 de diciembre de 2013, el Juzgado Instructor dispuso la intervención de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, a fin de que realizara discretas, profundas y exhaustivas tareas de investigación en forma encubierta en pos de establecer la existencia de acciones interjurisdiccionales organizadas destinadas a traficar sustancias estupefacientes, por parte de personas `que residirían en barrios cerrados o countries localizados en la ciudad de Tigre´, destacando la zona de Nordelta y entre los que habría ciudadanos extranjeros".*

En base a ello, el tribunal señaló que *"…el Código de Rito, al contemplar la vista prevista por el artículo 180, le confiere al Agente Fiscal la facultad de pedir que la denuncia formulada sea desestimada; y las consecuencias lógicas que se deben adoptar al verificarse esta circunstancia, tienen que estar en armonía con el resto de la legislación que le otorga justamente a la Vindicta*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Pública, la potestad de impulsar la acción pública (ver entre otras normas, lo establecido por los arts. 5, 188 y 195 del C.P.P.N.)".

Entendió que *"…se infiere de las citas doctrinarias y jurisprudenciales… la esencia acusatoria instaurada a partir de la sanción de la ley 23.984, en nuestro ordenamiento procesal penal, creando en el mismo un carácter acusatorio mixto, que impide en todo momento la actuación de oficio por parte del órgano jurisdiccional, si no ha habido previamente un impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal. En el caso de los autos 13528/13, existió requerimiento de instrucción por parte del Representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que no puede sostenerse… que el inicio de tal expediente resultó violatorio del principio de legalidad previsto en nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, como desarrollamos, el decreto de fs. 27 generó la producción de un informe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, a través del que se recopilaron datos obrantes en páginas web y base de datos; actividad que de ninguna manera puede considerarse como una intromisión estatal".*

En definitiva, *"de lo actuado en el marco de la causa 13528/13, se desprende que el dictado del decreto mencionado, lejos, muy lejos estuvo de impulsar, por parte de la Dra. Arroyo Salgado una `excursión de pesca´ violatoria del principio de reserva previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional".*

Con los párrafos transcriptos *ut-supra*, se advierte que la causa cuestionada estuvo legalmente iniciada y promovida por el representante del Ministerio Público Fiscal, lo que resulta suficiente para contrarrestar el agravio planteado.

Además, habida cuenta que la parte recurrente no se ha hecho cargo de rebatir o explicar porque se agravió de este punto de la sentencia, el agravio será desechado sin más.

g. Rechazo del planteo de nulidad de la incorporación de los legajos de escuchas telefónicas formados a raíz de las intervenciones telefónicas ordenadas

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

oportunamente en la causa 13528/13 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1, Secretaría 1 de la localidad San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Recurrieron este punto las defensas de Mario Alberto Lara Guerra –ver punto 4)c de la descripción de agravios-; Jorge Enrique Trujillo Sánchez –ver 5)- y Germán Emilio Marin López –ver punto 8)-.

El rechazo de esta nulidad está íntimamente ligado al punto anterior.

Para comenzar el *a quo* apunto que "[l]*legado el momento de resolver debemos advertir que el 28 de agosto de 2019, este Tribunal no hizo lugar a un reclamo idéntico realizado por el doctor Silvestroni el 20 de agosto de aquel año, al cual también adhiriera la doctora Santoro.* En aquella ocasión, este Tribunal sostuvo que: `[l]*a oposición formulada por la defensa de Williams Triana Peña, relativa a la incorporación por lectura al debate de los legajos de prueba telefónica (FSM 13528/2013/3) correspondientes a la transcripciones de los abonados n° 11-3114-2251 perteneciente a Guillermo Adolfo Heisinger; n° 11- 5843-0530 de Erman Triana Peña; el legajo de investigación documental (FSM 13528/2013/6) correspondiente al abonado 11-4815-2215 perteneciente a Guillermo Adolfo Heisinger y el legajo de investigación documental (FSM 13528/2013/7) del n° 11- 5155-5551 perteneciente a Mario Alberto Lara Guerra –todos de la causa n° 13.528/13 actualmente en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12-".*

Así señaló que *"Sobre esta cuestión corresponde resaltar que, como ya se dijo en la audiencia correspondiente, y a raíz de las manifestaciones vertidas por la testigo Fabiana Octaviano, se estimó pertinente requerir dicha documentación -que fuera peticionada por las partes acusadoras-, por resultar útiles para la presente investigación y la transcripción de estas escuchas estuvieron también a disposición de las partes para su compulsa y debido control, y por tales motivos, habrá de disponerse su incorporación, sin perjuicio de las valoraciones que realicen las partes en sus alegatos y al momento de la sentencia, por este Tribunal".*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Ahora bien, las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas, exigen extrema cautela por parte del órgano facultado para su disposición, debiendo ser -por lo tanto- ordenadas por el juez competente de manera fundada.

Tanto las interceptaciones de las comunicaciones como sus registros integran la esfera de intimidad personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúan contra toda intromisión o injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas (arts. 12 DUDH, 11.2 CADH y 17.1 PIDCyP).

Cabe traer a colación lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos CSJ 402/2014 (50-F)/CS1, Recurso de Hecho, "Fredes, Gonzalo Arturo y otros s/causa n° 13.904", del 6/3/18, (considerandos del 7 al 10), ocasión en la que tras dejar sin efecto una absolución dictada como consecuencia de la declaración de la nulidad del auto que dispuso una primer intervención telefónica y de todos los actos consecuentes, el Alto Tribunal puso de resalto que *"…más allá de que pueda compartirse o no el fundamento que sirvió de base a la medida intrusiva, lo cierto es que el juez federal que la ordenó lo hizo 'mediante auto fundado', en virtud de la facultad que el confiere una norma procesal –art. 236 del Código Procesal Penal de la Nación-, que no ha sido tachada de inconstitucional"* (considerando 13).

Allí también destacó el Alto Tribunal que *"…todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción"* y que *"el tráfico ilícito de drogas y las modalidades de crimen organizado a él asociado, son una fuente constante y permanente de afectación de derechos de los individuos y de la sociedad. Por eso, si bien en Fallos: 332: 1963 `Arriola´ esta Corte descartó la criminalización*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

del consumidor de estupefacientes, también recordó el deber del Estado de mejorar las técnicas complejas de investigación para este tipo de delitos, tendientes a desbaratar las bandas criminales narcotraficantes que azotan a todos los países" (considerandos 8 y 9).

En base a ello, considero que dado que las escuchas telefónicas fueron un elemento de prueba obtenido por un juez federal en el marco de una causa penal -más precisamente en la causa n° 13528/13 que tramitó por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1, Secretaría 1 de la localidad San Isidro, provincia de Buenos Aires- resulta a todas luces válida su incorporación por lectura al debate de la presente causa.

En virtud de ello, el temperamento adoptado por el *a quo* debe ser convalidado, rechazándose los agravios en torno a esta nulidad.

h. Rechazo del planteo de nulidad de los decretos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24 obrantes a fs. 1806/15 y 1826/55.

Del rechazo de esta nulidad sólo se agravió el defensor oficial, en representación de Macias Loor, Ojeda, Ramírez Cuartas, Zilli y Banesevich –ver punto 7)a-de la descripción de agravios.

La misma radica en la apertura e inspección de la mercadería ingresada bajo la destinación nº 15052EC01006767S en el depósito fiscal "BINDER", correspondiente a la operación documentada por la empresa "EURO EXPORT S.R.L." del 17 de septiembre de 2015, y en los allanamientos dispuestos en autos.

Para así resolver, el tribunal *a quo* indicó que *"…El Sr. Defensor Oficial alegó que la voluntad del juez instructor había sido viciada a partir de la información falsa o incompleta brindada por los investigadores y que los autos de registro, allanamiento y detención estaban basados en información absolutamente contaminada".*

En tal sentido, sostuvo que *"…debemos señalar que los argumentos expuestos por el Defensor en su alegato no son más que conjeturas que no encuentran sustento en las*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

pruebas obrantes en la causa y que ni siquiera fueron denunciados por sus asistidos… no existe ningún elemento de prueba en autos que acreditara que Martins Frutuoso actuó como un agente provocador o que hubiera colaborado con el personal de Gendarmería Nacional para involucrar en los hechos investigados a otras personas. Por el contrario, lo actuado en autos contradice de manera palmaria el argumento expuesto por el defensor".

Por el contrario, señaló que *"…el 17 de septiembre de 2015, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24 decretó que se le recibiera declaración indagatoria a Fernando Manuel Martins Frutuoso, quien estaría relacionado con la preparación y el envío de ciertas cantidades de material estupefaciente desde esta ciudad hacia otros países, ubicados en el continente europeo, y ordenó su detención (cfr. fs. 1826/55) y tras ello, el 18 de septiembre de 2015 dispuso que se registrara en el orden internacional la captura de Frutuoso, librando oficio al Jefe del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (cfr. fs. 1917/8). El 6 de enero de 2016, el Departamento de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación remitió copia del acta de audición de Frutuoso realizada en Portugal y solicitó al Juzgado Federal n° 12 que manifestara si tenía interés en su extradición (cfr. fs. 4615/25). En consecuencia, el 12 de enero de 2016, el Juzgado Instructor libró exhorto diplomático al Presidente del Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Coimbra, República Portuguesa a efectos de requerir formalmente la extradición de Fernando Manuel Martins Frutuoso en los términos de lo previsto por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la ley n° 24767 de Cooperación Internacional en Materia Penal (cfr. fs. 4648/9). Finalmente, el 14 de marzo de 2016, el Departamento de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación informó que las autoridades portuguesas no habían hecho lugar a la extradición de Frutuoso (cfr. fs. 5115 y 5135/6). Tal dependencia, señaló que de conformidad*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

con lo estipulado en el artículo 33 de la Constitución Portuguesa, la extradición era inadmisible por tratarse de un ciudadano portugués y por no haber reciprocidad (expresada en base convencional) en la extradición de ciudadanos nacionales entre la República de Portugal y la República Argentina".

En base a ello, *a quo* entendió que *"…Sr. Juez Instructor, como correspondía, dispuso la captura internacional de Fernando Martins Manuel Frutuoso y ordenó su extradición, la que, si no se concretó, no fue por inacción de ese Sr. Magistrado, sino por lo decidido por el Estado de Portugal, tal y como se reseñó en párrafos precedentes. Queda claro que las diligencias llevadas a cabo por el Juzgado Federal n° 12, contradicen lo expuesto por el Defensor y dejan vacío de contenido su argumento de tcon el personal de la Gendarmería Nacional, pues no se ha registrado evidencia alguna en el legajo de que el contumaz haya estado a la mano, ni de organismo de seguridad antes mencionado y menos del Juzgado instructor".*

Ahora bien, más allá de las conjeturas del defensor oficial, plasmadas en el recurso de casación sobre el encuentro de Martins Fructuoso en Retiro (que permitió el hallazgo de la droga mezclada en arroz en el depósito Binder de Rosario, lista para ser exportada), lo cierto es que no ha logrado refutar los argumentos expuestos por el tribunal *a quo* sobre el mencionado individuo, quien como fuera reseñado, no pudo ser extraditado a nuestro país.

El hecho de que no se librara orden de detención respecto de aquel no puede permitir dar por cierto que actuó como agente provocador. En efecto no hay ningún elemento aportado a la causa que permita acreditar tal hipótesis.

Por lo demás, vale decir que respecto a la falta de tratamiento y fundamentación de todos los planteos de la defensa, se evidencia más bien una disconformidad con la solución a la que arribó el *a quo* sobre el punto.

IV. En este apartado se abordarán los agravios de fondo en función a la prueba de cargo valorada por el *a quo*.

A. Para un tratamiento integral de los

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

agravios, en este acápite habré de recordar que la hermenéutica de nuestro código de forma se rige, en efecto, por la libertad de apreciación de la prueba según la sana crítica (arts. 206 y 398, segundo párrafo, del CPPN), lo cual significa que no hay regla alguna que imponga un modo determinado de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de elementos de prueba, ni tampoco existe un valor en abstracto de cada elemento probatorio.

El juez cuenta con la libertad de admitir la que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que asumen para la determinación de los hechos.

En tal sentido, se ha sostenido que *"…el sistema de valoración de la prueba que impuso el Código Procesal Penal de la Nación es el de la libre convicción o sana crítica racional, y consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos ni determina abstractamente el valor de la prueba, dando al juzgador libertad para admitir toda prueba que estime útil para el esclarecimiento de la verdad"* (cfr. Sala I, causa nº 1051, reg. nº 1420, "Santa Cruz Cuellar, Antonio s/recurso de queja", rta. el 11/3/97, entre tantas otras).

Ello de modo tal que está obligado a descartar la hipótesis acusatoria si no tiene certeza sobre los hechos materia de imputación, en la medida que derive racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso (Fallos: 307:1456; 312:2507; 321:2990 y 3423), circunstancia que, a la luz de los argumentos puestos de manifiesto en la sentencia cuestionada, estimo que no concurren.

En base a tales consideraciones, sostengo que lo resuelto por los jueces del tribunal de mérito resiste la tacha de arbitrariedad, pues en la sentencia se detalló de forma razonada y concreta cuáles fueron los distintos elementos de prueba que llevaron a la confirmación de la participación de cada uno de los encartados en los eventos que les fueran reprochados, con ajuste a las reglas de la lógica, la experiencia general y el recto entendimiento, como base de la sana crítica racional.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Sentado lo expuesto, vale apuntar que las críticas vinculadas con la valoración de la prueba serán analizadas de conformidad con la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Casal" (Fallos: 328:3329), que impone al interprete el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de revisar, es decir, de agotar la revisión de lo revisable (cfr. considerandos 11, 12 y 23).

B. El tribunal *a quo* para comenzar la fundamentación de la sentencia hizo una breve referencia al origen de las presentes actuaciones y al desarrollo procesal de las diligencias que le precedieron.

Así apuntó que *"la causa 413/11 y la 15475/11 y finalmente los presentes autos n° 7650/14. La primera de las investigaciones 413/11 `Vivas Vargas Alejandra y otros s/ infracción ley 23737´, se inició el día 14 de enero de 2011 a partir de la información que fuera suministrada por las autoridades de la Policía Nacional de Colombia y de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) mediante la cual se precisó la existencia de una presunta célula criminal, conformada en su mayoría por personas de nacionalidad colombiana. A partir de la investigación allí emprendida fue posible revelar los movimientos de una organización criminal integrada por personas de nacionalidad argentina, colombiana, peruana, uruguaya y neozelandesa que se dedicaban al tráfico transnacional de estupefacientes, legajo que, tras la pertinente investigación, y con los vaivenes propios de toda encuesta que dejó de lado algunos personajes, en el Juzgado instructor, fue elevada respecto de varios de los imputados… a la sede de este Tribunal quedando registrada bajo el n° 1625. Corresponde apuntar que, previo a la elevación de la causa mencionada, el Juez instructor dispuso la extracción de testimonios en orden a materializar diversas capturas internacionales formándose el pertinente legajo, a la vez que en otro, que también confeccionó, procedió a investigar las actividades ilícitas que habría llevado a cabo un sujeto que llevaría el nombre de Milton Ferney Hernández Moreno, formándose aquí la causa 15475/11. En el marco de esta última, el Juzgado Instructor dispuso el procesamiento de los*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

allí imputados por el delito de contrabando tentado de exportación de una considerable cantidad de cocaína diluida en biodiesel. En razón de que en la etapa de investigación (a diferencia de lo ocurrido en los autos n° 413/11) solo se habrían corroborado hechos en presunta violación al control aduanero), el Tribunal interviniente declaró su incompetencia parcial y remitió la causa n° 15475/11 al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° n° 5 (Secretaría n° 9), siendo posteriormente elevadas tales actuaciones al Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3".

De igual manera, quedó en la Secretaría n° 24 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº 12 otra parte de la investigación desplegada en la causa n° 15.475/2011, centrada en el legajo de Investigación n° 17, orientada a determinar la relación y subordinación de algunos de los miembros de la banda criminal investigada en aquellos autos con sujetos afincados en la república de Colombia que se dedicarían a las mismas actividades delictivas. Cabe remarcar en este punto del desarrollo, que ante la imposibilidad técnica de mantener el número de registro del legajo de investigación n° 17 respecto del expediente n° 15.475/2011 (en el sistema informático), el Juzgado n° 12 del Fuero dispuso registrar el 8 de agosto de 2014, ese legajo como causa n° 7650/2014. Ya sucintamente expuestos los avatares `burocrático-formales´ que determinaron la existencia de varias pesquisas por separado y comenzando con el desarrollo del examen de lo ocurrido en este mismo sentido en el juicio, resulta imprescindible que nos refiramos a lo expuesto en el debate… por el Segundo Comandante de Gendarmería Nacional Francisco Alejandro Pucci, quien señaló que esta causa no era más, en realidad, que una prosecución de dos anteriores, veamos: Relató que, cuando llegó en el año 2011 a la Unidad de Antidrogas Urbanas de esa fuerza de seguridad, se le había asignado la tarea de realizar una investigación, en ese momento, conocida como `Operación Canguro´, donde se rastreaba a una organización de personas en su mayoría colombianas que enviaban estupefacientes al exterior, más específicamente a Nueva Zelanda. Pucci puso de resalto que en tal investigación se había detectado el envío

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de material estupefaciente oculto en un bin de biodiesel a España y aditó que luego de que finalizaran dichas actuaciones con la detención y condena de todos los sindicados, se había iniciado esta causa que aquí dedica nuestra atención e interés… a fs. 7/8 de las presentes, obra una nota de la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación Argentina, firmada por su Director de Contrainteligencia Horacio Germán García en la que acompañó un artículo publicado en el diario `La Nación´ el 19 de diciembre de 2013 donde se mencionaba la captura de orden internacional de Carlos Julio Poveda Medina (alias `Toca´) dispuesta por el Juzgado Federal n° 12, al cual se le imputaba formar parte de una organización narco-criminal involucrada en el embarque a España de cocaína diluida en biodiesel (cfr. fs. 2)".

Tal pieza refería, entre otros aspectos, que el nombrado con un documento falso a nombre de Miguel Ángel Suárez había salido de la Argentina hacia Brasil, donde desde la ciudad de San Pablo había viajado a Lisboa, Portugal, siendo recogido allí por un automóvil que tenía como destino final España. García destacó que en el marco de los autos caratulados `Policía de Seguridad Aeroportuaria s/intervención´ (expte. FCB n° 22018460/13), en trámite por ante el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Penal, se había tomado conocimiento, a través de fuentes confidenciales, que un ciudadano argentino, Miguel Ángel Suárez, viajaría a Europa con la finalidad de materializar en algún puerto, la descarga de cocaína mimetizada en contenedores que transportaban madera y carbón vegetal, entre otros productos trascendidos.

Agregó el funcionario que la nota periodística referida mencionaba a otra persona identificada como `Charly´ en complicidad con Poveda Medina, respecto de la coordinación de movimientos del grupo criminal responsable del envío de cocaína diluida en biodiesel (cfr. fs. cit) y es de hacer notar, destacamos, que en este punto de la nota de la Secretaría de Inteligencia surgía la vinculación de la permanencia en Buenos Aires de Carlos Julio Poveda Medina junto a un tal Carlos Olmedo Silva Cárdenas.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Volviendo a Horacio Germán García indicó en su deposición que la nota de esa Secretaría corriente a fs. 7/8 había sido elaborada por Miguel Ángel Conti quien traído al debate señaló que el principio de esta investigación había tenido como disparador un artículo del diario La Nación que motivó la confección de un informe interno, por existir datos coincidentes entre tal pieza y los datos disponible en la dependencia, ya Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que no eran otros que, Carlos Poveda Medina había viajado hacia España vía Brasil, con una escala intermedia en Portugal con un documento apócrifo argentino a nombre de Miguel Ángel Suárez y agregó que ya existía en la AFI una actuación previa que había sido remitida al Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de Córdoba, donde se daba cuenta de la existencia de un colombiano que había viajado a Europa, presumiblemente a Francia o a España con el propósito de negociar una exportación de contenedores transportando madera o carbón vegetal con estupefacientes. Apuntó el testigo que ese informe había sido elevado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 a cargo del doctor Torres para que evaluara su contenido y donde se hacía mención a la relación que existía entre Carlos Poveda Medina, alias `Toca´ y otro individuo colombiano residente en la Argentina de apodo `Charly´, e indicó que a ambos se les atribuía la autoría intelectual, coordinación y la administración de recursos económicos para las diferentes etapas del tráfico del ilícito hacia Europa.

Indicó Conti que el contacto `Charly´ resultó ser Carlos Olmedo Silva Cárdenas quien, conforme fuentes documentales, había realizado trámites de radicación en el país, tenía documento de identidad argentino, residía en el barrio de Belgrano de esta ciudad, tenía un teléfono celular (registrado a nombre de Damián Carrizo) que había sido activado en coincidencia con el periodo de tiempo en el que `Toca´ había viajado a Europa, por lo que era posible inferir que tal aparato iba a ser utilizado para la comunicación entre Poveda Medina y Silva Cárdenas. Refirió luego que, dentro de los archivos de la Gendarmería Nacional, se había identificado una fotografía de una reunión en el bar de un

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

hotel entre Poveda Medina y Silva Cárdenas y añadió que dentro de lo comunicado al Juez Torres se hacía referencia a un documento de identidad apócrifo, que había sido emitido gracias a un contacto del Registro Provincial de las Personas de la Localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires, apodado `Fabi´ y puso de resalto la necesidad de intervenir los números telefónicos allí incluidos lo que fue evaluado por el Juzgado.

Conti reiteró que la totalidad de la información disponible en el mosaico informativo de la presente causa, había sido puesta a disposición del Juez Torres, quién habilitó una investigación conjunta de la Agencia Federal de Inteligencia con la Gendarmería Nacional. En esa misma línea deben leerse las expresiones del Segundo Comandante Pucci cuando afirmó que con la información aportada por el ex Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), se había tomado conocimiento que el traslado de estupefacientes que se pretendía realizar mediante la ocultación en tambores de biodiesel, contaba también con la colaboración de un sujeto conocido como `Charly´ –que dijo resultó ser Carlos Olmedo Silva Cárdenas-, quien, como retribución, habría de recibir quinientos mil euros – cfr. informe agregado a fs. 151 que se encuentra incorporado- y sería socio del principal implicado en ese expediente, Carlos Póveda Medina alias `Toca´, dato fue luego corroborado, ya que existían fotografías de alguna reunión entre ambos, en el marco de seguimientos realizados en aquella causa pues señaló que habían logrado fotografiarlo e incluso intentado seguirlo, pero lo habían perdido.

Tales las diligencias y pesquisas que se realizaron hace ya casi diez años por parte de la en aquél entonces Secretaría de Informaciones del Estado y organismos de seguridad nacionales que resultaron útiles e indispensables para encaminar una investigación que se fue desarrollando y tomando cuerpo hasta llegar a la oportuna intervención de los señores titulares del Juzgado en lo Criminal Federal número 12 y del Juzgado en lo Penal Económico número n° 1, ambos de esta Capital Federal".

Delito de asociación ilícita.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

El tribunal *a quo* tuvo por acreditado que un número indeterminado de personas de ambos sexos de las cuales al menos once de ellas, fueron individualizadas y traídas a este debate y son: Germán Emilio Marín López, Edilberto Vargas Fernández, Carlos Olmedo Silva Cárdenas, Williams Triana Peña, Mario Alberto Lara Guerra, Jorge Eliecer Ramírez Cuartas, Víctor Alfonso Camargo López, Diana Cristina Suárez Heredia, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Juan Carlos Ojeda y César Andrés Macias Loor integraron una organización en fecha aún no determinada pero con seguridad antes del mes de agosto de 2014 y hasta el 17 de septiembre de 2015, dedicada a cometer entre otros delitos, el de tráfico ilícito de estupefacientes.

Vale señalar que, luego de un profundo análisis de la sentencia recurrida y de la prueba de cargo llevada al debate oral, sólo detallaré en el presente la prueba que el tribunal estimó de vital importancia para sustentar la resolución impugnada.

La investigación estuvo a cargo de Gendarmería Nacional Argentina durante el año 2014 y hasta el mes de enero de 2015, lo que permitió conocer la dinámica del grupo criminal investigado, y establecer cómo, cuándo y dónde se reunían con alguna frecuencia la mayoría de los integrantes de la organización, los recaudos que tomaban para acceder a los lugares de reunión y la manera en que se dispersaban.

También, se determinó que *"…la organización utilizaba para contactarse, medios de comunicación de muy difícil intercepción e intervención –como el teléfono celular inteligente marca `Blackberry´, que constituía, y aún lo hace, un sistema encriptado que evidencia gran dificultad para realizar el seguimiento de conversaciones por parte de los servicios de inteligencia- para entablar diálogos y manejar información `sensible´. Además de ello, el lenguaje que empleaban era completamente codificado".*

En tal sentido *a quo* señaló que *"[s]e pudo establecer a través de las escuchas telefónicas, que los imputados sabían perfectamente de la actividad comercial relativa a la venta y distribución de sustancias estupefacientes. Ello se denota de los términos utilizados en*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

sus escuetos y encriptados diálogos, como `niñas´, `llegadas y partidas de primas y novias, `pantalones´, `paquetes guardados en autos´, entre otros, los cuales no tenían ningún sentido dentro de la conversación, e inmediatamente luego, se referían a sumas de dinero o a operaciones comerciales".

También indicaron que se corroboró que *"…los acusados se desplazaban mediante uso de medidas precautorias para no ser seguidos; tales como cruzar una calle y luego regresar, caminar en contra del sentido del tránsito, mirar constantemente hacia atrás o salir de un sitio en forma escalonada, para no ser vistos juntos en la vía pública".*

De ello, dieron cuenta los preventores que llevaron a cabo las tareas de investigación, tanto de análisis de las intervenciones telefónicas como de las tareas de observación y seguimiento de los encartados, esto es, los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmería Nacional, liderados por el Segundo Comandante Francisco Alejandro Pucci, y quienes formaban parte de su equipo de trabajo: el Segundo Comandante Ricardo Ángel Robledo, María Fabiana Octaviano, Orlando Rubén Vedia Montaño, Natalia Verónica Fernández, Víctor Riquelme Orrego, Oscar Fabián Batirola, Jorge Héctor Miño, Manuel Alejandro Zelada, Daniel Alberto Martínez, Hernán Arce, Juan Luis Rizzuto y Gustavo Javier Coronel.

Tales investigadores declararon –en su mayoría- durante el debate oral, y sus testimonios fueron valorados por el tribunal *a quo* en la sentencia recurrida.

Por otro lado, el tribunal valoró que *"…durante la extensa investigación desplegada se verificó que no todos los integrantes de la organización intervenían de la misma forma en ese período de tiempo, es decir con la misma intensidad que fuera advertida en determinados momentos e incluso, algún integrante habría recibido sanciones por no cumplir acabadamente su tarea, traduciéndose este castigo en una menor participación en las actividades del grupo. Esto, en ningún modo significa que esos imputados hubieran dejado de formar parte de la célula investigada, sino que, por momentos, su intervención se puede haber visto disminuida por haber llevado adelante las directivas en forma deficiente,*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

debiendo igualmente responder por los sucesos en los que tomaron parte".

Así, concretamente, los sentenciantes detallaron que de las tareas de investigación se pudo determinar cuál fue el rol que cumplió cada uno de los procesados en los hechos materia de acusación.

Apuntaron que *"[e]n un primer momento, a partir de la interceptación del teléfono de Felipe Silva Cárdenas (11-3089-6088), se constató que Carlos Olmedo Silva Cárdenas había llegado a la Argentina el 9 de septiembre de 2014 por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveniente de Colombia (ver informe de la Dirección Nacional de Migraciones de fs. 3684). Mientras que días antes, el 5 de septiembre de 2014 se pudo averiguar que se había llevado a cabo una reunión, en el local `Chocorisimo´, entre Edilberto Vargas Fernández, Germán Emilio Marín López y quién resultó ser Carlos Miguel Potes Ramírez, había salido después del encuentro a bordo de un rodado marca Peugeot 207 IPD-467 registrado a nombre de Henry Felipe Ibarra Ramírez (fs. 641/7). Posteriormente, el 15 de septiembre de 2014, se constató otra reunión en el mismo lugar entre Edilberto Vargas Fernández, quien arribara al lugar a bordo de un Volkswagen, modelo Vento, dominio MMD-567, Germán Marín López y Víctor Camargo López (cfr. fs. 655), y también tras otra reunión entre Edilberto Vargas y Germán Marín López, el personal de Gendarmería logró determinar que este último residía en la avenida Del Libertador 4854 de esta ciudad (cfr. fs. 659/660)".*

El tribunal citó una conversación telefónica entre *"Marín López (número 1156957115) y Camargo López (número 11-5642-0664) del 17 de septiembre de 2014 en la que Marín le indicaba a Camargo que necesitaba verlo en `El rojo´ (cfr. fs. 923 de los autos 2229) y, a continuación éste se había comunicado con Edilberto Vargas Fernández al número 11-2155-6925, refiriéndole que acababa de hablar con `el amigo `Mecha´´, que, a partir de aquí se entendió como el apodo de Marín López y que se iba a reunir con éste en `El rojo´ (cfr. fs. 923 de los autos 2229)".*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

En base a esa conversación el tribunal apuntó que *"dos días después de esa reunión, el 19 de septiembre de 2014, Víctor Camargo había viajado a la República Oriental del Uruguay en automóvil, regresando al país ese mismo día (cfr. fs. 3738 de los autos 2229) y el propósito de ese desplazamiento no había sido otro que informar a Marín acerca de los pasos fronterizos, de sus controles migratorios y de su seguridad, haciendo hincapié en los que presentaban mayor vulnerabilidad (cfr. fs. 335/40 de los autos 1167/14 y 925 de la causa 2229 en lo referido a la conversación del 19 de septiembre de 2014)".*

Sobre ello, se destacó el testimonio del Comandante Francisco Alejandro Pucci de la Unidad Operaciones de la Gendarmería Nacional.

Del informe agregado a fs. 1130/6 -que fuera también ratificado por Robledo en la audiencia-, el tribunal valoró que *"…se concluyó que los principales investigados mantenían una relación entre sí, ya sea mediante comunicaciones telefónicas o con otros medios como Blackberry, Messenger, Whatsapp, Skype, Biber, etc, dificultando incluso ello la profundización de la investigación. Se apreciaron fuertes medidas de seguridad, no sólo en los medios de comunicación sino también en los desplazamientos de los imputados. Se especuló con que las parejas de los principales actores, parecían tener una función relativa al traslado de información, atendiendo los teléfonos y transmitiendo órdenes a sus empleados y el caso más notorio resultó ser el de Diana Cristina Suárez Heredia".*

En base a ello también entendió que *"[e]xisten elementos que evidencian relaciones de interés mutuo, dado que producirían grandes ganancias de carácter ilegal, entre Vargas, Germán Marín López y Henry Ramírez. En menor medida o al menos en una forma tangencial, se estima que también había relaciones con Silva Cárdenas".*

Además, valoró que *"…todos los actores parecían tener a su disposición, gran cantidad de moneda extranjera (dólares o euros), lo que se vio reflejado en las comunicaciones mantenidas para poder realizar el cambio de esta moneda, siendo uno de los casos más llamativos el de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Germán Marín, cuando intentó cambiar 25.000 euros a dólares, por intermedio de Carlos Pardey Rozo, el 18 de diciembre de 2014".

En efecto, señaló que *"[l]os investigadores destacaron también que todos los pesquisados tenían una solvencia económica, evidenciada por los gastos que realizaban y la disposición de moneda extranjera, sin que a ninguno de ellos se descubriera alguna actividad legal que justificara esa solvencia económica. Se resaltó que la disciplina de la organización en cuanto a las comunicaciones era extremadamente fuerte y que incluso algunos números telefónicos sólo se activaban esporádicamente. Tal era el caso de los números 1122581204 y 1159638466, ambos utilizados por Vargas".*

Por otro lado, el tribunal tuvo en cuenta el informe obrante a fs. 1150/60 ratificado por Robledo en la audiencia, del cual surge que *"…Vargas, Germán Marín y Henry Ibarra, serían las cabezas visibles de células dedicadas a la exportación de estupefacientes mediante distintas modalidades de ocultamiento. Mientras Vargas habría estado también relacionado con el envío de estupefacientes mediante la modalidad de remisión de encomiendas, dado que se había visto a uno de sus empleados (`Palomo´) consultar páginas del Correo Argentino y TNT, mientras que Germán Marín lo habría hecho mediante la utilización de correos humanos, denominados comúnmente `mulas´. Y en este caso cabe mencionar la investigación iniciada por la Policía Aeroportuaria a partir de la detención de una `mula´ en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También de allí, se desprende que César Macías Loor habría `perdido´ estupefacientes que guardaba en la vivienda donde residía, pero que pertenecían a Germán Marín".*

Para dar sustento a ello, el *a quo* transcribió varias comunicaciones telefónicas a las que me remitiré en honor a la brevedad.

Se evaluó del mismo modo, en el informe de fs. 1145 que fuera ratificado por la Gendarme Natalia Verónica Fernández, del cual surgió que *"se verificó una reunión del 8 de enero de 2015 a las 15 hs. entre Eugenio Nadín Ardila Angulo y Edilberto Vargas Fernández. Sobre este suceso, el*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Segundo Comandante Ricardo Angél Robledo recordó en la audiencia que en un momento se observó un automóvil en una casa particular, estacionado, y estaban `Vitiko´, que era Víctor Camargo López, Ardila y Vargas y existían audios acerca de que tenían que preparar el vehículo y Gendarmería había montado un dispositivo para seguirlo pues según, el Comandante Francisco Alejandro Pucci había relatado en su momento, `por informaciones de inteligencia´, el automóvil estaba acondicionado para el transporte de droga".

Por todo ello, los sentenciantes sostuvieron que *"…conforme la experiencia de los investigadores y las evidencias colectadas, el grado de sofisticación de la organización y los medios de que disponían, como el poder económico y su grado de instrucción en `medidas de contrainteligencia´, permitió inferir que se trataba de una organización con sustento logístico y económico suficiente como para solventar la dinámica de todas sus operaciones, y precisamente en virtud de ello, la división de tareas y su coordinación y control, etc."*

No puede soslayarse que el resultado de los allanamientos ordenados confirmó *"…la tesis elaborada por los investigadores en cuanto al uso de teléfonos celulares marca Blackberry por parte de la organización criminal como canal paralelo de comunicación, dado que en los domicilios de Germán Emilio Marín López (avenida Del Libertador 4854 piso 8 depto c, Capital Federal), Carlos Olmedo Silva Cárdenas (Zabala 1655 piso 2, Capital Federal), Mario Alberto Lara Guerra (bloque n° 2 edificio n° 2 piso 2, depto E portezuelo, Nordelta, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires), Jorge Eliecer Ramírez Cuartas (Víctor Mercante 1137, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe), Jorge Enrique Trujillo Sánchez (Pacheco de Melo 2107 piso 2 depto B, Capital Federal) y Juan Carlos Ojeda (Vera 1245 de la Capital Federal) fueron secuestrados tales aparatos (cfr. fs. 2283/7; 2090/8; 2313/5; 2043/6; 2166/9 y 2115/6)".*

Para arribar a las conclusiones del decisorio el tribunal evaluó *"…las escuchas telefónicas, los seguimientos, el resultado de las diligencias de allanamiento y las otras medidas investigativas producidas en el presente*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

legajo en forma conglobada y no aislada, reuniendo todos los elementos de cargo en contra de manera sistemática y no individual".

Es por ello, que los sentenciantes sostuvieron que *"…la organización se componía de distintos estamentos organizados de forma cerrada, es decir, no todos los integrantes de cada grupo tenían relación con los restantes, sino que éstos se vinculaban entre sí por algunos de sus miembros".*

Y explicaron que en *"…la cúspide de la pirámide, estaría* ***Erman Triana Peña****, quien, si bien se encuentra prófugo de la justicia, no podemos dejar de nombrarlo, por la importancia que reviste en la trama de la presente investigación. Aquél tenía directa injerencia sobre el conocido como `Mini´, es decir,* ***Mario Alberto Lara Guerra****… quien incluso, al momento de ser detenido, residía, junto con Erman… en su domicilio, ubicado en el barrio cerrado `Nordelta´ de la provincia de Buenos Aires". También, se ha advertido que los encargado de la coordinación de los envíos de material estupefaciente que, es claro que provenía del exterior (como* ***Edilberto Vargas, Henry Felipe Ibarra Ramírez y Germán Emilio Marín López****), no se vinculaban en forma directa con los que proveían y distribuían el dinero producido por las actividades ilícitas de la agrupación para el funcionamiento de ésta (ubicados en otros compartimentos de la organización, como en el caso de* ***Erman, Yoana y Williams Triana Peña****), sino que aquéllos sólo se relacionarían con quienes les proveen de los recursos económicos a través de otro eslabón del grupo (****Mario Alberto Lara Guerra*** *por caso),* el resaltado me pertenece.

Aclararon que la intervención concreta de cada uno de los acusados *"…de ninguna forma implica que cada uno de ellos estuviera al tanto de los movimientos y pormenores de la célula criminal, sino que al llevar a cabo su actividad lo hacían con el conocimiento de que esa intervención estaba dirigida a lograr operaciones de tráfico ilícito, lo que resulta demostrativo del alto grado de coordinación del grupo criminal y la definición de las distintas funciones de cada uno de ellos".*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Asimismo, tuvieron por acreditado que Germán Emilio Marín López y Edilberto Vargas Fernández fueron los responsables *"del intento de exportación de 945,5 gramos de cocaína con una pureza del 49,5 % del 29 de agosto de 2014, ocurrido en el sector de partidas de la terminal `A´ de la empresa `Qatar Airways´ del Aeropuerto Internacional de Ezeiza `Ministro Pistarini", hecho que fuera conocido como `Ketchup´ (causa n° 1167/14) y de la tenencia con fines de comercialización de 84.955 gramos de clorhidrato de cocaína con un grado de pureza de alrededor del 70 al 98% en las diferentes muestras, del 17 de enero de 2015 en el interior de la vivienda ubicada en la calle Niceto Vega 5035 de la Ciudad Autónoma de Buenos"*.

Aquí, vale hacer un paréntesis e indicar antes de describir los tres hechos de narcotráfico acreditados en autos que, en orden a la errónea aplicación de la ley sustantiva de la figura de asociación ilícita invocada por algunos de los recurrentes, habré de señalar que la sentencia impugnada ha fundado, la concurrencia de los elementos típicos del art. 210 del Código Penal, y que los agravios no se orientan a criticar el alcance dado al tipo penal por el tribunal de mérito, sino que se fundan sólo en una diferente interpretación acerca del valor convictivo de los elementos de prueba en que se apoyaron los sentenciantes para tener por acreditada la cantidad de intervinientes, la estructura, la finalidad y la permanencia en el tiempo que requiere la figura en trato.

En efecto, los agravios sólo traducen su discrepancia con la decisión del tribunal, la que contiene un análisis racional de la prueba que lo llevó a conclusiones lógicas sustentadas en los elementos reunidos y las circunstancias del caso.

Es por ello, que los cuestionamientos de las partes recurrentes, no tendrán favorable acogida, pues carecen de la entidad necesaria para controvertir razonablemente el estado de certeza suficientemente alcanzado.

Por lo demás, respecto al delito aludido me he pronunciado en el precedente la causa nº FCR

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

91001168/2011/TO1/CFC1 del registro de esta Sala I, "Panario, Horacio Ángel s/recurso de casación", N° 935/19, rta. el 4/6/19.

Ahora bien, es dable señalar que el tribunal efectuó la siguiente aclaración (sobre la organización y la diferencia que mantuvo con los acusadores): ***"los acusadores durante sus alegatos describieron a este grupo criminal como de gran complejidad como una organización criminal internacional con alto grado de organización y división de roles, como así también un marcado verticalismo entre sus integrantes, tomando, suponemos, como guía lo que aseveraron los investigadores a lo largo del período de pesquisa. Sin embargo, de lo que se ha incorporado al debate, sí se ha verificado que esa agrupación contaba con buena cantidad de recursos económicos que les permitió a la mayoría de los encartados, mantenerse a lo largo de todo el período de inquisición sin realizar actividad laboral cierta. Pero fuera de ello, no pareció que la complejidad de su estructura fuera especialmente grande. Es que no se verificó, entendemos, que su configuración hubiera estado vertebrada en niveles de diferente jerarquía, sino que solamente había varios de sus componentes que cumplieron determinadas funciones, pero todos respondían a una única dirección, que quizá no fuera `unipersonal´, como hasta ahora hemos dicho sobre la base de las evidencias reunidas, pero no que aquélla fuera piramidal en lo que respecta a la capacidad de ordenar o a la existencia de `subordinados´.***

Cierto es que había algunos integrantes que tenían una especial vinculación con otros, precisamente con los que tenían ciertas funciones, pero, por lo que se ha visto, esa diferente relación entre aquéllos respondía a lazos personales por fuera de la condición de integrantes del grupo criminal.

Se ha dicho también que las dimensiones de esa ilícita asociación estaba reflejada en la numerosa cantidad de hechos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes cometidos durante el lapso de la investigación, tal es el caso del Fiscal General y algunos de los investigadores. Sin embargo, por fuera de los tres injustos que finalmente se trajeron a juicio, y que, al pasar decimos, fueron sendas frustraciones para la organización pues en los tres casos las maniobras ilícitas fueron desbaratadas por las autoridades, no hubo mención de algún otro ilícito de igual tópico, al menos con la suficiente entidad como para que pudiera ser identificado…"

a) Concretamente sobre **la causa 1167/14** señalaron que se inició por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 1, Secretaría n° 1, con motivo del procedimiento efectuado el 29 de agosto de 2014 a las 22:10 hs, por la División Drogas del Departamento de Inspecciones Aduaneras de la Dirección General de Aduanas, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza *"Ministro Pistarini"* en ocasión de practicar un control selectivo de salidas de pasajeros y equipajes, en el sector de partidas de la terminal *"A"* de la empresa *"Qatar Airways"*.

Describieron que conforme lo que surge del expediente 1167/14, el personal interviniente había interceptado al pasajero Martín Maximiliano Fraire, cuando se aprestaba a abordar el vuelo QR 772 de "Qatar Airways" con destino final en Bangkok, Tailandia vía Doha, quién había reconocido ser titular del pasaje aéreo electrónico n° 1575477132282 y tener en su poder el comprobante de equipaje n° QR 783171 y al que no tenía ninguna mercadería para declarar, los preventores habían procedido a inspeccionar su equipaje, una valija tipo carry on, marca "POLO GOLF" despachada con marbete de equipaje n° QR 783170, donde se halló una bolsa de nylon conteniendo cinco envases de diferentes productos en sachet (salsa de tomates y kétchup) (cfr. fs. 6/34 de los autos 1167/14).

Para dar por cierto ello, asentaron la declaración del Inspector General de Aduanas Alejandro Muñiz quien explicó que *"el peso de los envoltorios les había parecido excesivo y cuando uno de los envoltorios fue abierto, tras extraer la totalidad de la sustancia original, se había encontrado dentro del envase otra bolsa que contenía en su interior una sustancia cremosa de color claro que, analizada con un reactivo adecuado arrojo resultado positivo de cocaína".*

La pericia química del material incautado por parte del Departamento Científico Pericial de la Prefectura Naval Argentina determinó que el peso total del material secuestrado era de 945,4 gramos de clorhidrato de cocaína con una pureza del 49,5 %; y que se obtendrían un total de 9454 unidades de dosis umbrales a partir de aquélla (cfr. fs.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

178/81 y 331/4 de los autos 1167/14) y, de la misma forma científica, se comprobó la presencia de Levamisol como sustancia de corte en las muestras analizadas (cfr. fs. 178/81 y 331/4 de los autos 1167/14).

El tribunal evaluó especialmente la declaración indagatoria de Freire, pues había relatado que *"…en la ciudad de Córdoba había tomado contacto con una persona que le había contado que conocía a un individuo que organizaba viajes al exterior con personas para el objeto de que llevaran estupefacientes y que el imputado le había dado su número telefónico y al poco tiempo recibió un llamado de este sujeto (de nacionalidad colombiana, al que conoció como `Andrés´) quién le había propuesto un viaje, lo que fue aceptado por Fraire (cfr. fs. 385/7 de la causa 1167/14) y en el comienzo del trayecto, el 2 de agosto del 2014, se había trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y alojado primero en el hotel `Azul´ de la calle Hipólito Yrigoyen 2952 y después en el hotel `Galicia´ de la calle Hipólito Yrigoyen 3072 (del 22 al 29 de agosto de 2014) (cfr. fs. 385/7 de la causa 1167/14) que habían sido reservados y pagados previamente por la organización".*

De igual forma, contó que *"…se había encontrado con Andrés, quién en un primer momento le dijo que el viaje sería a China, pero luego, le envió un mensaje diciéndole que ese viaje finalmente no se iba a realizar y, posteriormente, al comienzo de la última semana del mes de agosto, Andrés se contactó nuevamente con Fraire y le manifestó que se cambiara a otro hotel de la misma zona, informándole además que iba a viajar a Bangkok y que le haría llegar las `cosas´ y que había hecho una reserva de avión para el día jueves 28 de agosto de 2014 por la empresa Fly Emirates, y entregó a Fraire la droga y el dinero para que pagara en efectivo el pasaje aéreo en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al no haber podido llegar al Aeropuerto el causante a raíz del paro general convocado por la C.G.T. para ese día le había solicitado instrucciones a Andrés, quién le indicó que volviera al hotel y que iba a mandar a alguien para retirar las `cosas´. Así fue pues allí se presentó una persona a la que nunca había visto antes, la*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

que se llevó la droga y le dijo a Fraire que se quedara con el dinero para sacar el pasaje, lo que ocurrió el viernes 29 de agosto de 2014 por la mañana, cuando Fraire reservó un pasaje en la línea aérea `Qatar Airways´ con destino final Bangkok, vía Doha, tal como se le había indicado y, en horas de la tarde, Andrés fue al hotel y le entregó a Fraire un paquete con el material estupefaciente, luego de lo cual el incusado se trasladó en taxi hasta el aeropuerto de Ezeiza, donde finalmente había sido detenido".

Se especificó que Freire había identificado el número telefónico de Andrés guardado en la agenda de su celular bajo el nombre de "Andrés 3". Sobre ello, el tribunal estimó que de *"…surgieron múltiples conversaciones de Whatsapp entre este y Andrés, cuyo número telefónico era 11-5866-2920, relacionadas con la organización del viaje a Bangkok".*

También se tuvo en cuenta que de las investigaciones practicadas por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo I del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se determinó que la persona que Fraire mencionó como "Andrés" (quién le entregó el material estupefaciente) en realidad se llamaba "David" y utilizaba también el teléfono celular n° 11-5479-4666.

Todo ello, fue relatado en el debate por Mariel Andrea Carballo, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria quien mencionó *"…que la investigación había comenzado con una persona que se llamaba David Escobar y que de las escuchas telefónicas se desprendía que habría una cabeza que era Germán Marín (con teléfono 11-5695-7115), que tenía una agencia de autos, la que no sabía si realmente existía o no* [y que] *la Policía de Seguridad Aeroportuaria había obtenido, y lo informó al Juzgado sobre la existencia de un sujeto llamado Víctor cuyo número telefónico era 11-5642-0664".*

En base a este evento, se especificó que la investigación continuó, *"…en cuanto a la pesquisa `residual´ que había quedado en esa sede judicial, el 13 de noviembre de 2014, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 1, Secretaría n° 1, declaró su incompetencia en*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

ese legajo n° 1167/14 y lo remitió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24, para su acumulación a los autos 7650/14 en virtud de que en ambos sumarios se había ordenado la intervención telefónica del aparato 11-5695-7115 correspondiente a Germán Emilio Marín López (cfr. fs. 634/40 de la causa 1167/14)".

En efecto, el tribunal explicó que *"en forma paralela al trámite de aquélla causa 1167/14, en el marco de la causa 7650/14, ya para el mes de julio de 2014, el Juzgado Instructor ya venía investigando a Carlos Olmedo Silva Cárdenas (quién estaba en Colombia) y establecido que residía en la calle Zabala 1655 de esta ciudad (cfr. fs. 279), mientras que, al mismo tiempo había dispuesto la intervención del teléfono fijo instalado en tal domicilio, con el número 4896-2765 (cfr. fs. 284/5) y precisamente a partir de la información obtenida de allí, la Unidad Especial de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional logró determinar que Felipe Silva Cárdenas (hijo de Carlos Silva Cárdenas) actuaba como secretario de su padre, por lo que se ordenó la intervención de su teléfono celular 11-3089-0688 (cfr. fs. 321 y 355). Y también de las constancias obrantes en autos, se determinó que Silva Cárdenas regresaría al país en el mes de agosto de 2014 y que Felipe se había reunido con Edilberto Vargas Fernández alias `Mey´, para entregarle dinero, razón por la cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 ordenó la intervención de su teléfono celular 11-2155- 6925 (cfr. fs. 368 y 372/3)".*

En virtud de ello, el *a quo* estimó que *"… resulta claro que Edilberto Vargas Fernández participó y tenía conocimiento de la maniobra ilícita aquí analizada* [pues] *el 27 de agosto de 2014 se había producido una conversación entre Germán Marín y Edilberto Vargas, en la que el primero menciona que estaba con el amigo (Fraire) y le preguntó a Vargas cómo iban a hacer para el día siguiente porque había un corte, en referencia al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo para el día 28 de agosto de 2014 que precisamente impidió a Fraire viajar (cfr. fs. 812 de los autos 2229)".*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Incluso, se resaltó que *"…con posterioridad a la detención de Fraire… de las diligencias realizadas por la Gendarmería Nacional… debe señalarse que el 1 de septiembre de 2014 se habían reunido Edilberto Vargas Fernández y Germán Emilio Marín López en el local comercial `Chocorísimo Café´ ubicado en la intersección de las calles San Benito de Palermo y Soldado de la Independencia de esta ciudad (cfr. fs. 564/5).* Precisando el tribunal que *"De esa reunión, Vargas y Marín salieron del local de manera escalonada con un intervalo de veinte minutos y se retiraron a pie haciendo paradas inesperadas a mitad de cuadra o mirando repentinamente en derredor (cfr. fs. 565), lo que, de acuerdo a lo explicado por los oficiales de la Gendarmería Nacional que depusieron en el debate, claramente era una medida de contrainteligencia".*

Los sentenciantes dedujeron con ello que *"…la organización investigada, poseía medios económicos suficientes para solventar el traslado de Fraire desde la ciudad de Córdoba hasta la Ciudad de Buenos Aires, además de su hospedaje durante un mes (del 2 de agosto al 29 de agosto de 2014) y el pasaje aéreo a la ciudad de Bangkok, Tailandia".*

b) Por otro lado, respecto de la tenencia de 84.955 gramos de clorhidrato de cocaína en el inmueble ubicado en Niceto Vega 5035 de la Capital Federal **(causa 385/15)**, se detalló que se inició por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24, con motivo del procedimiento efectuado por personal de la Comisaría n° 25 de la Policía Federal Argentina el 17 de enero de 2015 en el domicilio de la calle Niceto Vega 5035 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la sentencia recurrida se especificó que "e*l ayudante Gabriel Esteban Motta de tal dependencia policial, en ocasión de prestar declaración testimonial en el debate el 18 de septiembre de 2019, señaló que en tal ocasión, se encontraba cumpliendo funciones como jefe de servicio externo en el horario de 6 a 18 hs, cuando aproximadamente a las 6:15 o 6:20 hs. había recibido `una modulación´ en su equipo que lo alertó sobre un posible robo*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

en el domicilio de la calle Niceto Vega 5035 de esta ciudad, aclarando que el llamado se había originado en la provincia de Buenos Aires".

"Motta manifestó que, se trasladó, junto con el cabo Alberto Javier Romero, en un móvil policial identificable con sirenas y balizas colocadas hasta el lugar, en donde constató que las rejas y la puerta de madera de la casa estaban violentadas, hallando también elementos de efracción en el piso e indicó que al ingresar a la vivienda, había observado que cerca de la entrada había un bolso de viaje con cierre, que contenía en su interior lo que entendió era material estupefaciente así como otra bolsa de consorcio también con lo que estimó era droga en la cochera de la casa. Puso de resalto que al ver que no había personas en el interior de la morada, salió a la vereda y realizó una inspección `de visu´, la cual arrojó resultado negativo, dada la gran afluencia de gente en la zona. Señaló en su exposición Motta que, por la cantidad de estupefaciente hallada, había creído que podía haber sido algún grupo que había robado la droga o que podía estar intentando recuperar la sustancia en cuestión, profundizando sobre el punto, Motta afirmó que además del bolso hallado cerca de la puerta y de la bolsa en la cochera, se había encontrado una tercera bolsa en una de las habitaciones dentro de un ropero".

El peritaje químico realizado por la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, sobre los setenta y nueve envoltorios con forma de ladrillo que fueran secuestrados en el domicilio de la calle Niceto Vega 5035 de esta ciudad se comprobó la presencia de cocaína, siendo el peso de cada uno de los envoltorios de aproximadamente un kilo (cfr. fs. 306/8 de los autos 385/15), mientras que el peso total del material secuestrado fue de 84.955 gramos de clorhidrato de cocaína con un grado de pureza de alrededor del 70 al 98% en las diferentes muestras (cfr. fs. 306/8 de los autos 385/15).

El tribunal destacó que en dicho estudio se comprobó la presencia de Levamisol como sustancia de corte en las muestras analizadas, coincidiendo ello con la que fuera

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

detectada en el clorhidrato de cocaína incautado en el marco de la causa 385/15.

Por otro lado, se apuntó que se logró recibir declaración testimonial a Ana Patricia de Fátima Aguila Botero, esposa de Roberto Oscar Granzella, propietario del domicilio de la calle Niceto Vega 5035, quien informó que en diciembre de 2014 había alquilado la propiedad a través de la inmobiliaria "*GG Brokers*" sita en la calle Nicaragua 4535 de esta ciudad a un hombre llamado "*Julián*" (cfr. fs. 18 de la causa 385/15). En efecto, a fs. 26/7 de los autos 385/15, se agregó una copia del contrato de locación del inmueble de la calle Niceto Vega 5035 de esta ciudad, del 22 de diciembre de 2014 entre Ana Patricia Aguilar Botero y Wilmar Yuriano Valencia Estrada por el plazo de seis meses (del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015).

Igualmente Arnaldo Wilder García Casimiro, en ocasión de prestar declaración testimonial en el debate el 19 de marzo de 2019, y explicó que tenía su inmobiliaria "GG Broker". A su vez, Gladys Elizabeth Machaca Peralta, dijo desempeñarse en el sector alquileres de la inmobiliaria antes mencionada cuando prestó declaración testimonial, puso de resalto que, al momento de ingresar al departamento, el hombre llamado "Julián", había presentado un pasaporte del que surgía que su nombre era John Jair Piedrahita Jaramillo.

En base a ello, vale asentar que el 3 de julio de 2015, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24 resolvió unificar la investigación del expediente 385/15 con la causa 7650/14 (cfr. fs. 375/6 de la causa 385/15). Ello, habida cuenta la relación existente "*…entre la causa 385/15 y los hechos investigados en los autos 7650/14… si se considera que el 26 de enero de 2015, se produjo una conversación telefónica entre Carlos Miguel Potes Ramírez (número 11-5780-2602) y Edilberto Vargas Fernández (número 11-2155-6925), en el que este le dice que `no se acerque a la vieja del arrendamiento´ en alusión a Gladys… `estalló la bomba´, que `perdieron´ y dice que `tiene miedo´ porque `fue un par de veces ahí´ y `tiene miedo de que haya quedado alguna fotico´, que por esa razón tenía el `negro´ guardado, en alusión al*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

automotor Volkswagen Vento que conducía (cfr. CD n° 94 del número 1121556925 del 26/01/15).

Es que en base a ello, y a otras conversaciones telefónicas que se detallan en extenso en la sentencia (a las que me remito en honor a la brevedad), el *a quo* concibió que *"…tales conversaciones demuestran que Edilberto Vargas Fernández era el encargado de la búsqueda de inmuebles para la agrupación, de allí también su relación con el domicilio de la calle Niceto Vega 5035. Además, un par de días después del procedimiento en la calle Niceto Vega, el 19 de enero de 2015, Vargas Fernández viajó a Paraguay desde el aeropuerto Jorge Newbery según informe de la Dirección Nacional de Migraciones obrante a fs. 3719, circunstancia que, por lo que se dirá con posterioridad también resulta relevante, de donde la vinculación de Vargas Fernández, Marín López y Henry Ibarra Ramírez, (cuya detención no se ha podido lograr hasta el presente, pero cuya pertenencia a esa banda resulta en este momento evidente), con el material estupefaciente secuestrado en el domicilio de la calle Niceto Vega 5035 de esta ciudad el 17 de enero de 2015, pues no caben dudas de la propiedad de la organización criminal investigada sobre aquél y para ello es útil aquí hacer alusión a un encuentro en la morada de Ermán Triana Peña en el Partido de Pilar entre éste, Marín López y Henry Ibarra Ramírez días después de aquél procedimiento policial y a la reunión ocurrida en Iguazú, Provincia de Misiones el 27 de enero de ese año 2015".*

En relación al encuentro en la provincia de Misiones, el tribunal señaló que *"…el 26 de enero de 2015 a las 15:06 hs., se registró una conversación telefónica entre Henry Ibarra Ramírez (titular del número 11- 6224-0335) y un individuo aún no identificado (poseedor del número 3757-15-541747), donde Ibarra Ramírez solicitó a ese hombre que le consiguiera una cabaña como la que a él le gustaban por dos días, siendo que poco después, a las 15:25 hs., Ibarra Ramírez se comunicó con el número 11- 3259-9456 siendo atendido por una mujer de acento colombiano, a la que le ordenó que fuera a Lan Chile y le consiguiera un pasaje para Iguazú para el vuelo n° 430 y otro para regresar ese jueves.*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Y coligió que luego de la serie de "pérdidas" de material estupefaciente, diez días después del procedimiento policial en Niceto Vega 5035 de esta ciudad, se produjo una reunión en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones entre algunos de los integrantes del grupo criminal.

Para dar fundamento a ello, reparó en que el Comandante Pucci de la Gendarmería Nacional refirió en el debate, que *"…tenían conocimiento de que Henry Ibarra Ramírez y Germán Marín López habían sido citados a una reunión, en Iguazú, por lo que fue con parte de su equipo a tal ciudad y mencionó que habían logrado determinar que Henry se había alojado en el hotel `Grand Crucero´ y Germán en el hotel Iguazú.*

También describió que la instrucción determinó que, Williams Triana Peña, ingresó al país a bordo de un vehículo matricula paraguaya BJD-115, el 27 de enero a las 12:55 hs., junto con su chófer Mario Liberto Colman y egresó del país en tal fecha a las 18:19 hs. (cfr. fs. 3725), reuniéndose con Marín López e Ibarra Ramírez, en el restaurante del hotel `Iguazú´ entre las 16:40 hs. y las 18:03 hs.

Paralelamente a esta reunión, el 27 de enero a las 10:08 hs. se produjo la siguiente conversación entre Edilberto Vargas Fernández (equipo celular número 11-2155-6925), quién se encontraba en la triple frontera y Diana Suárez Heredia (teléfono 11-5646-2426):

Diana: *hombre bello*

Edilberto: *amor decile a Vic que no vaya a escribir al BlackBerry y que le diga al palomo y que le diga a la vieja porque el BlackBerry lo tiene esta gente*

Diana: *ay hijo de pucha mi amor*

Edilberto: dígale *que no vaya a escribir nada*

Diana: *bueno,* gracias mi amor

Edilberto: *chau.* (cfr. cd 102 del número 11-2155-6925, archivo B-1009-2015-01-27-o 100801-10).

Luego, como consecuencia de aquél contacto, se produce la siguiente conversación telefónica cuando Diana Suárez Heredia lo llama a Víctor Alfonso Camargo López:

Víctor: *hola*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Diana: *Vic escúchame necesito que hagas algo rápido rápido*

Víctor: Dime

Diana: *que a Edi le quitaron el Blackberry dice que no le vayas a escribir nada nada, que le digas a la "Vieja" y al "Palomo" que nada por favor*

Víctor: *dale dale*

Diana: *que hasta que el avise ¿ya? Chau*

Víctor: *Dale, chau* (cfr. cd 102 del teléfono 11-5646-24265, archivo B-1009-2015-01-27-100834-26).

En la misma línea, a las 10:48 hs., se vuelven a comunicar telefónicamente Suárez Heredia y Vargas Fernández, en la que aquélla le dijo que era raro que le hubieran sacado el teléfono, a lo que Vargas señaló que "*esa gente*" había utilizado como excusa para sacarle el teléfono que no tenían señal en sus celulares y mencionó que si no los daba, podría ser peor (cfr. fs. 1242). Posteriormente, a las 15:21 hs. se produce otro contacto entre ambos y donde Vargas le dice a Suárez que estaba viendo si podía adelantar un poco el tema pero que se habían ido a hablar con "*Mecha*" y con el otro a la frontera, y que él estaba esperando que volvieran, agregando Vargas que, iba a esperar que volvieran porque le habían dicho que tenía que charlar con ellos, manifestó asimismo que se sentía incómodo en el departamento en el que estaba (cfr. cd 102 del número 11-5646-2426, archivo B-1009-2015-01-27-152109- 28).

En virtud de tales conversaciones, el tribunal consideró que "…*claramente surge que Henry Ibarra Ramírez y Germán Marín López no habrían elegido ir a la reunión, sino que se les había impuesto concurrir para que dieran cuenta por las pérdidas de material estupefaciente sufridas por el grupo además de constatarse que a Edilberto Vargas Fernández le habían sacado el teléfono y lo mantenido retenido en Paraguay hasta que finalizara la reunión, claramente para que no pudiera participar en ella. Entendemos, a modo de sanción".*

Por otra parte, también estimó que no parece que no era casualidad que Edilberto Vargas en Paraguay por un lado, y Germán Marín López y Henry Ibarra Ramírez en Iguazú,

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

fueran interrogados en forma separada, sino que ello tuvo como claro objetivo detectar posibles contradicciones.

Así, también se destacó que en esa reunión apareció otro de los integrantes de la organización criminal, Williams Triana Peña, a quién Vargas Fernández, Marín López e Ibarra Ramírez habrían tenido que darle cuentas de lo sucedido.

En tal sentido, el tribunal memoró que el comandante Pucci explicó que la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional se había encargado de la comprobación de la cadena de envío de droga y hab+ian llegado hasta los Triana Peña, dado que en un momento habían detectado que quién le entregaba dinero a Germán Marín López y a Henry Ibarra Ramírez era Mario Alberto Lara Guerra, que respondía a Erman Triana Peña.

Apuntó que en el marco de la intervención telefónica del número 11-6224-0335, utilizado por Henry Ibarra Ramírez, se registró el 27 de febrero de 2015 un dialogo con el número 11-5155-5551 perteneciente a Mario Alberto Lara Guerra, quién le dijo a Ibarra Ramírez que había estado hablando con el "*cocinero*" y que este "*cocinero*" le había dicho que tenía que hablar con el "*chef*", pero que no le había dado el teléfono que necesitaba porque tenía un "*evento*" (cfr. fs. 1307), siendo que Henry Ramírez le había preguntado a qué "*cocinero*" se refería y Lara Guerra le indicó que se trataba de "*Mecha*", es decir, Germán Marín López (cfr. fs. 1308). A raíz de ello el Juzgado Instructor ordenó la intervención telefónica del número 11-5155-5551 (cfr. fs. 1250) y en virtud de tal medida, se logró establecer que Lara Guerra tenía contacto con una persona apodada "*don guille*" (Guillermo Adolfo Heisinger) titular del teléfono 11-3114-2251), quién le envió varios correos electrónicos y con quien viajaron juntos a Uruguay.

En ese orden de ideas, el tribunal apuntó que el Segundo Comandante Robledo refirió que "*el abogado (Heisinger) necesitaba a "Mini" para que le abriera una caja, que estaría a nombre de Lara Guerra. Interpretando que podía ser una caja fuerte, porque habían ido a una Casa de Cambio y al haberse embarcado en un navío de la empresa Buquebus se*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

había pedido a las autoridades uruguayas que realizaran su seguimiento, habiendo recibido de parte de dichos funcionarios fotografías e información sobre las actividades realizadas y de allí se especuló que, según lo investigado, Heisinger estaría vinculado a los Triana Peña, pero en lo societario, en los papeles".

Se tuvo en cuenta que del informe obrante a fs. 1358/60 ratificado por Robledo en la audiencia, surge que el 17 de marzo de 2015 Mario Lara Guerra viajó a Montevideo, Uruguay junto con "*don Guille*" (Guillermo Heisinger) y fueron a dos casas de cambio.

A raíz de las pérdidas de material estupefacientes descriptas, durante unos meses los investigadores informaron no advirtieron actividad por parte de la organización, a la que atribuyen a problemas internos y cambios en su estructura.

En tal sentido, se tuvo en que el Comandante Pucci de la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional, al prestar declaración en el debate, indicó que durante un buen tiempo existió "como un parate" de la organización y puntualizó que "personas de los escalafones inferiores" se estaban reorganizando y que no se iban a mover hasta nueva orden.

En base a ello, cobra relevancia una conversación telefónica captada el 14 de mayo de 2015 a las 23:43 hs., entre César Andrés Macias Loor (número 11-3948-9206) y Juan Carlos Ojeda (número 11-3206-4481), en la que éste le cuenta a aquél que se había sentado en la mesa con Alejandro y Arito (Marín López) y éste le había referido que por "*dramas internos*" se había desarmado la operación en Argentina.

En aquella conversación Ojeda le señaló a Macías Loor que Marín López le había dicho que: "[h]*asta ahora no han hecho nada de liquidación y todo eso, porque hay dramas internos acá, que por h. o por, b, no se termina de resolver entonces no giran plata ni para, ni para yerba me dice. Yo me dice me estoy desenvolviendo dice yo tengo mi asunto acá para hacer que siempre me defiendo, a veces sale a veces no sale, yo vivo de eso, yo no tengo un maldito peso de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la oficina dice hace un montón. He tu postura me dice yo lo vaya a he, ha porque yo le dije simple, lo que pasa está bien le digo ya me la hicieron le digo, pero acá es simple le digo a mi bueno, es simple, después vienen las repercusiones le dijo y después va a hacer el lamento para todos le digo. No lo que pasa me dice, vos podrás hacer lo que vos quieras dice, pero no te olvides algo me dice, acá estamos trabajando con gente invisible me dice que ni sabemos quién carajo es, tiene mucha plata".

Agregó Ojeda en tal dialogo que: "[n]*o, no dice acá directamente no hay más laburo ya no hay dice, esta gente que quedo no tiene nada programado para hacer acá, nada. Por eso están pidiendo las cosa, trasladando las cosa o sea destinando para lo que ellos digan para no sé quien carajo o sea viste sacando todas las cosas, están cepillando todo".* También Ojeda le comentó a Macías Loor, respecto a lo que había hablado con Marín López lo siguiente: "[y]*o digo y recién ustedes me avisan le digo, me tuvieron tanto tiempo parado sabiendo que yo dependo de un sueldo le digo y me salen con un martes 13 después de tanto tiempo le digo. Que les costaba avisarme, en 6 meses, 8 meses. o 10 meses cuando ya sabían que esto se venía si le digo. Porque ustedes sabían que esto se venía así. Si me dice lo que pasa, sabía que esto se venía así pero no a tal extremo de esta manera me dice, y bueno es lo que toca y es lo que hay me dice, lamentablemente dice nosotros somos. Le digo y que pasó con ese trabajo grande que se hizo le digo y que tenía que venir un vuelto de correo para todos le digo. Si dice yo también he nosotros no somos he, yo te soy sincero yo a mi cuando me plantearon ingresar en la oficina me dice me ofrecieron o vos querés un sueldo o querés participaciones en los grandes negocios, dice yo quiero participación en los grandes negocios me dice, no quería un sueldo me dice, entonces dice, yo en cierta manera también estoy esperando que me reembolse eso pero hay problemas internos que tenemos nosotros que por H o por B, no llega me dice, supuestamente eso está allá dice parado que todavía no se termina de entregar que por eso no llego. Pero ese trabajo se tendría que hacer y pagar como corresponde le digo a acá uno le digo si más allá que eso llegara en 5 o 10*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

años, 2 años los beneficiados son ustedes le digo a la corta o a la larga porque usted invirtieron en eso pero lo que nosotros dependíamos le digo como es eso. Si me dice yo también a Soldado le había prometido un porcentaje que le iba vuelto de correo después que se terminara de vencer eso a la corta y a la larga no llego también dice yo me baso en las promesas en las palabas que me dicen porque a mí de que el Chiquito no está acá dice ya las cosas se fueron de mis manos me dice, hoy por hoy solamente tengo un número de Pin de un BlackBerry y un teléfono número de teléfono nada más me dice, ni se con quién trato ni se quiénes son ni se dónde viven ni nada la realidad es esa me dice".

En otro pasaje de la conversación, Macías Loor refiere: "[y] *que me va a decir a mí de esa casa yo que tengo que entregar esa casa, que lo qu pasa con esa casa yo entrego las llaves y ya",* a lo que Ojeda le respondió: "[n]*o, te van a citar seguramente para que le des las llaves, después las llaves le tienen que traspasar a Alejandro y Alejandro creo tiene que saldar las cuentas, porque tiene que entregar con las cuentas saldadas"*.

Por último, Ojeda le indicó a Macías Loor que le iba a plantear a Marín su situación, a lo cual Macías contesta que le habían dado el ultimátum para que dejara el domicilio. Tal conversación fue registrada en el disco compacto 34 del 14/5/15 número 11-3206-4481, archivo B-1009-2015-05-15-000242-16.

Esos diálogos fueron apuntados en extenso porque permiten vislumbrar a las claras la situación de la organización, en efecto el tribunal las tómo en cuenta, sosteniendo que "…*este dialogo tiene vinculación con la pérdida que habría sufrido Macías Loor en su domicilio a fines del año 2014 a raíz del robo de estupefacientes en la vivienda de la calle Rebizo 150 de la localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires y por el que habría involucrado Germán Marín López su como propietario". Cabe mencionar que Macías Loor se mudó al domicilio de la calle Carlos Calvo 2260 de esta ciudad el 7 de agosto de 2015 (cfr. fs. 1566)"*.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

c. Tentativa de contrabando de exportación de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56%, destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional.

En último término, el tribunal oral tuvo por probado que Germán Emilio Marín López, Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, Gabriel Esteban Zilli, Juan Alberto Banesevich y Carlos Olmedo Silva Cárdenas llevaron a cabo el intento de exportación de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56% ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal "*BINDER*" (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe), hecho que fuera denominado ***"Arroz"***.

Asimismo, se tuvo por probada la tenencia en forma ilegítima y sin la debida autorización legal por parte de Gabriel Esteban Zilli de: un revólver marca "GEM" calibre .32, serie nro. 6.469 -incautado en el domicilio de la calle Víctor Mercante 1135, Rosario, provincia de Santa Fe el 18 de septiembre de 20115-; un rifle marca "*Marlin*" calibre .22 largo, serie nro. 1.103.747 y las siguientes municiones: cuatro calibre .357, dos calibre .45, quince calibre .38, cuarenta calibre .22 y dos cargadores de pistola calibre .45 con siete municiones en su interior que fueran secuestrados en el domicilio de la calle Víctor Mercante 1141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe el 18 de septiembre de 2015.

Para ello, el tribunal oral tuvo en cuenta la intervención telefónica sobre el número 11-5695-7115 utilizado por Germán Emilio Marín López, pues el personal de Gendarmería detectó una conversación del 9 de julio de 2015, a través de la que se efectuó una reserva en la confitería "La Paris" sita en la avenida Del Libertador 4101 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día siguiente (cfr. disco compacto 293 del número 11-5695-7115).

Así, el 10 de julio de 2015 a las 13:30 hs., se detectó una reunión entre Germán Emilio Marín López, y quienes luego fueron identificados como Gabriel Esteban Zilli y Fernando Manuel Martins Frutuoso en la confitería antes

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

señalada, culminando el encuentro a las 16:45 horas (cfr. informe de fs. 1553 y vistas fotográficas de fs. 1554/6).

Luego de ello, el 13 de agosto de 2015 a las 15:24 hs., se registra una conversación entre Jorge Enrique Trujillo Sánchez (número n° 11-3825-7171) y Martins Frutuoso (número n° 11-5460-9222), en la que éste le preguntaba al primero si le iba a dar todo junto o en dos partes, a lo que respondió que " todo junto"; frente a lo que Frutuoso le pidió que fuera por separado porque se lo tenía que dar a otra persona (cfr. fs. 1557). Inmediatamente después, a las 16:03 horas se produce un nuevo dialogo entre Trujillo Sánchez y Marín López, ocasión en la que Trujillo le comentó que lo había llamado el "amigo" (en alusión a Frutuoso) y que necesitaba que diera el visto bueno a lo que Marín respondió que si (cfr. fs. 1557) y luego, Trujillo le dice a Marín López que apenas terminara le iba a avisar, y que aproximadamente en media hora la cuestión iba a estar acabando (cfr. fs. 1550/9).

Ese mismo día (13 de agosto de 2015) a las 16:35 hs, en el local "Starbucks" de la avenida Córdoba 2348 de esta ciudad, se reúnen Jorge Enrique Trujillo Sánchez y Fernando Martins Frutuoso (cfr. fs. 1558 y vistas fotográficas de fs. 1550/1) y durante ella se había visto a Trujillo Sánchez extraer de la mochila que llevaba un sobre color papel mader de aproximadamente 18x10 centímetros y se lo había entregado a Martins Frutuoso (cfr. fs. 1558 y vistas fotográficas de fs. 1550/1).

Los sentenciantes, asentaron que los investigadores explicaron que quince minutos después, Frutuoso se había retirado del lugar y reunido con Gabriel Esteban Zilli, quién lo estaba esperando en el "Café de la Facu" de la avenida Córdoba 2202 de esta ciudad y posteriormente ambos abordaron el subte línea D con dirección a la estación "Catedral" y luego de hacer la combinación con la línea C descendieron en la estación "Retiro" (cfr. fs. 1558 y vistas fotográficas de fs. 1552; 1599/1603), siendo entonces que en esa estación Martins Frutuoso volvió a ingresar al subte, en tanto que, según los pesquisas, Zilli había tomado un taxi (cfr. fs. 1558).

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

También, que Fernando Manuel Martins Frutuoso, había ingresado al país el 5 de julio de 2015 y lo había abandonado el 17 de septiembre de 2015 (cfr. fs. 3709), es decir, un día antes de que se materializan los allanamientos ordenados en las presentes causas, mientras que Jorge Eliecer Ramírez Cuartas había ingresado al país el 11 de agosto de 2015 (cfr. fs. 3675).

De la misma manera, señalaron que el 24 de agosto de 2015 a las 12:49 hs. se captó una conversación telefónica entre Gabriel Esteban Zilli (número 11- 5602-1231) y Martins Frutuoso, en la que éste le menciona que el día siguiente por la tarde, iba a estar saliendo para Rosario y que iba a ir acompañado, (después se determinó que su acompañante había sido Ramírez Cuartas), aceptándolo Zilli y en esa charla, Frutuoso le solicita a Zilli que le diera el nombre de una calle que estuviera cerca del lugar que habían alquilado y que estuviera a un kilometro de ahí y donde se pudieran encontrar y seguir en contacto (cfr. fs. 1618).

Se destacó, que el teléfono utilizado por Martins Frutuoso en la conversación antes mencionada le había sido entregado por Jorge Enrique Trujillo Sánchez a raíz de una directiva de Germán Marín López (conforme surge del informe de fs. 1618). Al día siguiente, el 25 de agosto de 2015 a las 17:10 hs., se produjo una conversación telefónica entre Trujillo Sánchez (número 11-3825-7171) y Marín López, en la que Trujillo le dijo que se encontraba en el depósito y que quería saber lo que iban a hacer y cómo, a lo que Marín le respondió que se vieran ese mismo día a la tarde, a las 19:30 hs. en el mismo sitio. En respuesta a ello, Trujillo señaló que el "amigo" (en alusión a Frutuoso) le había dejado un documento para mostrarle, que tenía el formato de una carta y culminando la charla Marín López le había dicho a Trujillo que agendara la reunión pactada (cfr. disco 126 del número 11-3825-7171 e informe de fs. 1615).

En relación con ello, ese mismo día, a las 20:45 hs., habían llegado a la terminal de ómnibus de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Martins Frutuoso y Jorge Eliécer Ramírez Cuartas en el micro de la empresa "El rosarino" interno 204, dominio colocado NSE-302

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

(cfr. vistas fotográficas de fs. 1606/9 e informes de fs. 1612/13 y 1616) y a las 21:17 hs. también de ese día, se captó una nueva conversación entre Marín López y Trujillo Cuartas donde éste le preguntó si había hablado con el "amigo" (en alusión a Frutuoso) y Marín López le había respondido que no, siendo entonces que aquél mencionó que el "amigo estaba por acá" y que se iba comunicar con él (con Marín López), conviniendo en que una vez que se comunicaran con Frutuoso se encontrarían "en el Starbucks" (cfr. disco compacto 126 del número 11-3825-7171 e informe de fs. 1615), lo que ocurrió entre Germán Marín López, Jorge Enrique Trujillo Sánchez, Fernando Manuel Martins Frutuoso y Jorge Eliecer Ramírez Cuartas (cfr. fs. 1619).

Al día siguiente de lo detallado, Frutuoso y Ramírez Cuartas viajaron a la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se encontraron con Gabriel Esteban Zilli en la terminal de Ómnibus de tal localidad y luego, los tres se trasladaron en el vehículo Volkswagen, modelo Fox, dominio HRP- 386 hasta el domicilio de la calle Víctor Mercante 1135 de la referida localidad (cfr. fs. 1617).

En base a ello, se tuvo en cuenta que en la audiencia, Pucci señaló que *"…en este punto… los investigadores se habían trasladó a la ciudad de Rosario y que en las conversaciones telefónicas los involucrados ya habían comenzado a hablar de harinas o de algún arroz".*

También, que a fs. 1643/5 se encuentra glosada la diligencia de comisión ratificada por Robledo en el juicio.

A raíz de una conversación telefónica entre Gabriel Zilli (número 11-5602-1231) y Fernando Frutuoso (número 11-5460-9222) del 2 de septiembre de 2015 (cd n° 12 del número de fecha 2/9/15, archivo B-11008-2015-09-02-135732-1), el personal de Gendarmería llegó a la conclusión de que Frutuoso, Zilli y Cuartas estaban involucrados en una maniobra tendiente a concretar un envío de sustancias estupefacientes ocultas en un cargamento de harina y/o arroz para cuyo envío habrían recibido dinero de Germán Marín.

Se logró determinar que para tal envío aparecía vinculada la firma Euroexport S.R.L. y dos

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

contenedores, siendo además posible que dicha maniobra fuera concretada en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello, se dio intervención a la Dirección General de Aduanas y de este organismo, Diego Pérez Escobar, su Jefe del Departamento Nárcotráfico cuando prestó declaración testimonial en el debate, puntualizó que en este caso, se había detectado una operación de una empresa que no era habitual en ella pues con aquélla se enviaría mercadería a un destino que tampoco era habitual, como Guinea Bisseau en África cuando casi no había exportaciones a ese continente de esa mercadería pues los destinos habituales para la exportación de arroz eran Brasil u otros países, pero no estados africanos.

En tal sentido, se valoró que un resumen de las captaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas entre Fernando Frutuoso y Alassana Djaló, en el lapso que iba del 12 de agosto al 4 de septiembre de 2015 en las que hablaban de una operación que involucraba a Francia y a Guinea Bisseau, de aparatos telefónicos Blackberrys y de PINS y donde Frutuoso advertía a la otra parte que "tenía que tener cuidado", pues debía meter "los sacos" en harina de trigo y que estaba buscando a algún despachante de aduana.

De *las tareas de seguimiento se detectó el 4 de septiembre que Martins Frutoso y Ramírez Cuartas habían sacado unas bolsas de color naranja del inmueble de la calle Víctor Mercante 1135 al que lleva el número 1137 de esa ciudad (cfr. fs. 1679).*

También el personal de Gendarmería constató que Frutuoso había subido a un ómnibus de la empresa "El Rosarino" en la términal de Rosario para trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 1724) desde donde había entablado otra comunicación telefónica con Zilli, oportunidad en la que le había dicho que le había pedido a "Juan que identificara cuál era el auto que tenía la falla en el motor y no había encontrado nada, se lo tuve que decir yo cuál era" (cfr. fs. 1708).

Por ello, el tribunal sostuvo que "…*debemos poner de resalto que ni Zilli, ni Frutuoso, con anterioridad se habían ocupado de cuestión alguna relacionada con la*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

reparación de motores de automóviles, por lo que esa frase resultaba abstrusa y carente de sentido. Empero si concluimos con que lo dicho por Zilli tenía relación directa con el envío de sustancia estupefaciente disimulada en arroz y que su afirmación era una clara alusión a que `Juan´, que resultó ser el experto en granos Juan Alberto Banesevich, no había podido descubrir en cuál de las bolsas estibadas en la que se hallaba la cocaína, aquella afirmación adquiere su real significado".

Además, se tuvo en cuenta que el titular de Euroexport Miguel Ángel González, al momento de prestar declaración en el juicio, señaló que la operación comercial de exportación de arroz partido (normalmente utilizado para la alimentación de animales) se había originado en el mes de marzo del año 2015 y que Banesevich, también había modificado el puerto de salida de la operación, de Rosario a Buenos Aires, debiendo enviar todos los contenedores vacíos a esta ciudad y justificado tal decisión en razones de operatividad de la empresa importadora SAMISAN. En relación a esta empresa González afirmó que nunca había operado con ella.

De la copia del poder obrante a fs. 6209/15 surge que Banesevich y Frutuoso, el 11 de junio de 2015 firmaron un contrato de gestión de negocios por el término de seis meses y a partir del cual Banesevich se comprometía a realizar las gestiones y negociaciones apropiadas con el propósito de garantizar las operaciones de compra y envíos a los lugares de destino determinados por la empresa SAMISAN.

En la documentación incautada consta que el 25 de agosto de 2015 la Cooperativa Agropecuaria Goya Ltda. Había vendido a Euro Export S.R.L. cuarenta y seis toneladas de arrocin en bolsas de cincuenta kilos por la suma de ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos ($ 139.150) (cfr. factura A 0004- 00000035 obrante a fs. 3222) y precisamente desde la cuenta corriente n° 052-3-28092-5 del banco HSBC de esa empresa, se había transferido, el 25 de agosto de 2015, la suma de cincuenta y siete mil pesos ($ 57000) en concepto de pago por la compra del arroz a la cuenta del Banco Nación perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria Goya Limitada (cfr. fs. 6309 vta. Y 6312).

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Por otra parte, en cuanto a la utilidad de la operación, el mencionado González había declarado en el debate que era de dos mil dólares por tonelada y que Banesevich percibiría cuatrocientos sesenta dólares, y que los costos de la operación serían aproximadamente cincuenta dólares por tonelada, sin incluir el flete desde Corrientes y afirmó que Banesevich había actuado de mala fe al enviar el cargamento desde un lugar a otro y cambiar de puerto de partida al exterior.

Stella Mary Franchiscutti despachante de aduana del estudio Oscar Enrique Belgrano y Asociados S.R.L., manifestó en la audiencia de debate del 23 de abril de 2019, que Miguel Ángel González se había vinculado con su estudio para realizar una operación de arrocin a Guinea Bisseau, siendo la cantidad de tal mercadería cuarenta y seis toneladas distribuidas en 920 bolsas de cincuenta kilos cada una en 43 palets. Señaló que la operación había tenido su inicio el 27 de julio de 2015 y que el pago de la mercadería había sido adelantado, razón por la cual el exportador tenía obligación de exportar, de lo contrario sería multado por el Banco Central de la República Argentina. Agregó luego que González el 3 de septiembre de 2015 hizo saber al despachante de aduana, a través de un correo electrónico que existían algunas irregularidades con la carga y que el cliente quería cambiar el lugar de salida de la mercadería al Puerto de Buenos Aires, circunstancias que el estudio Belgrano puso en conocimiento de la Aduana de Rosario.

A raíz de esa advertencia, la testigo señaló que le había explicado a González que el cambio de puerto implicaba mayores gastos de fletes y que iba a tener que cambiar de despachante de aduana, por lo que González desistió de realizar tal cambio.

Por su parte, Nicolás Spengler, encargado del área comercial del depósito Fiscal Binder, señaló en la audiencia del 28 de mayo de 2019 que, había sido contactado aproximadamente por Juan Alberto Banesevich dos meses antes de que se llevara a cabo el allanamiento en el depósito fiscal Binder y aclaró que su relación se había concretado por vía telefónica y aquél se había presentado en varias

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

oportunidades en su empresa añadiendo que en algunas ocasiones Banesevich había ido al depósito fiscal junto con Gabriel Zilli, quién le había dicho que era oncólogo y que quería dedicarse a otra actividad.

El 11 de septiembre de 2015, se oficializó la operación de exportación de cuarenta y seis toneladas de arroz partido en cuarenta bultos a Guinea Bissau, siendo el operador EURO Export S.R.L. y el destinatario SAMISAN S.R.L. y además, se asentó como aduana de registro la ciudad de Rosario y como aduana de salida la de Buenos Aires Sur (cfr. fs. 1703).

En esa misma fecha a las 8:30 hs. se habían reunido Fructuoso y Zilli en el local Serviclub de la estación de servicio YPF y donde se había dispuesto destacar personal de Gendarmería Nacional encubierto, el que había escuchado a Fructuoso decirle a Zilli que no se podía cometer el mismo error que con los "bines", porque era muy evidente la cantidad y entonces convenía hacerlo en pocas cantidadades y a través de una empresa que pudiera enviar mercaderías de cualquier tipo; a lo que Zilli le respondió que se quedara tranquilo que iba a preguntar (cfr. fs. 1813).

Tres días después, el 14 de septiembre, se captó un dialogo entre Zilli y Frutuoso, a través de la aplicación Whatsapp, sobre la exportación de arroz a realizarse, y donde Zilli escribió que ya había conseguido el líquido original para los felinos pero que le daba un poco de miedo porque era muy fuerte, a eso Frutuoso le aclaró que era un solo un poquito y tras ello Zilli le respondió que solo le iba a poner un poquito y a último momento porque eso iba perdiendo fuerza con el tiempo y Zilli también hizo mención que un mismo camión llevaría la carga a Binder, en dos viajes, traslado que se haría al día siguiente. (cfr. fs. 1815 y archivo B 1009-2015-09-14-200801-26 del 14/9/15 del número 11-5460-9222).

El tribunal destacó esta conversación, pues más allá de que precisa cuándo se llevaría al depósito fiscal el material estupefaciente disimulado en la carga, llamó la atención que *"…otra vez sobre la perseverancia de los `usos y costumbres´ de los integrantes del grupo criminal en el*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

empleo de vocablos genéricos, equívocos, simuladores del verdadero oculto sentido que su emisor quiere transmitir, como es el caso de Zilli hablando de los `felinos´ y el líquido a utilizar, que no es otra cosa que la referencia a la sustancia fluida a emplear para `misturar´, -y permítaseme el término portugués ya que uno de los prófugos, precisamente el interlocutor de Zilli es de ese origen- con la droga, y engañar así el olfato no de los `felinos´ aludidos por el médico infiel sino de los perros de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, entrenados para olfatear, aún enmascaradas con otros olores, las emanaciones gaseosas características de las sustancias estupefacientes".

Sobre ello, se puso de resalto lo dicho por el Comandante Pucci de la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional, en la audiencia del 11 de septiembre de 2018, *que "…había habido una discusión entre Zilli y Ramírez Cuartas, que le había llamado la atención, porque uno le decía al otro que `…el producto para el gato era muy fuerte…´ y que había que poner un poquito nada más.*

Luego, el tribual valoró que en la audiencia de debate celebrada el 26 de marzo de 2019, el Agente Verificador de la aduana de Rosario, Sebastián Javier Becerra, manifestó que *"en un primer momento se había dispuesto para dicha operación el canal naranja, que implicaba solo el control documental, precisando que existían tres canales: verde, naranja y rojo donde el canal verde era solamente control de bultos y pesos, el canal naranja implicaba un control documental por parte del verificador y el canal rojo incluía el control documental y de la mercadería. Aclaró que esos canales, en cada caso, eran asignados aleatoriamente por el sistema Malvina de la Aduana e hizo referencia a que su jefe, Juan Jose Lionello, había dispuesto tramitar la operación por canal rojo, dado que la empresa no era habitual en Rosario; aunque no recordó si la destinación de la mercadería ya registraba una alerta ADO para que le fuera asignado el canal rojo. Finalizó el testigo detallando que cuando se presentaba cualquier mercadería, tenía que estar en un depósito y en una zona primaria de éste en la que la Aduana ejerce el control del ingreso y egreso de*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la mercadería y que, si la mercadería pasaba el control, se estibaba en el medio de transporte que fuera, en este caso en un camión, y continuaba su desplazamiento en los plazos previstos hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde sería cargada en un contenedor al buque".

Así fue que, el Departamento de Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas y a la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina procedió a realizar, el 17 de septiembre de 2015 a partir de las 17 hs., la apertura e inspección de la mercadería ingresada bajo la destinación n° 15052EC01006767S en el depósito fiscal "Binder" sito en la calle 1721 (ex Biedma) nro. 7916 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, correspondiente a la operación documentada por la empresa "Euroexport" (C.U.I.T. n° 30-71040065-9) el 11 de septiembre de 2015 (cfr. fs. 1806/10).

En relación con tal medida, el tribunal citó lo declarado por el Jefe del Departamento Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas, Diego Raúl Pérez Escobar quien mencionó en la audiencia del 13 de noviembre de 2018, que *"… la mercadería se encontraba en un depósito fiscal Binder y que a la operación se le había sido asignado el canal rojo, por lo que era obligatorio controlar la documentación y la mercadería. Ilustró que se había organizado una comisión con funcionarios de Rosario y de la Ciudad de Buenos Aires del Departamento de Narcotráfico que habían llegado al depósito fiscal en tres o cuatro vehículos oficiales identificables y expresó que realizó el control de la mercadería que estaba contenida en bolsas de cincuenta kilos y dispuestas en el piso separadas a medio metro de distancia una de la otra en líneas, especificando que normalmente se hacía así para agilizar los controles. Prosiguió el testigo explicando que se había hecho pasar los canes entrenados de esa División por las bolsas para que las husmearan e indicaran `algo anormal´, afirmando que él mismo había caminado por unas veinticinco o treinta bolsas al azar hasta descubrir una que tenía en su interior un elemento sólido por lo que se la llevó al Scanner, -o escáner para hablar en español- móvil en donde se detectó que tenía un elemento extraño en su interior y sobre*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

este aparato expuso que pertenece a la Aduana, montado en una camioneta tipo van, que es utilizado para indicar diferentes densidades y permite distinguir las formas del interior de un objeto".

"Pérez Escobar afirmó que los perros habían olfateado la bolsa en cuestión pero que no habían identificado nada y que él no había visto elemento alguno que pudiera haber confundido el olfato de aquéllos y precisó que luego de pasar la bolsa por el escáner, se había abierto la bolsa, que tenía en su interior otra, impregnada con una especie de sustancia almidonada, razón por la cual a ésta se le había aplicado el reactivo, momento en el que se detectó la presencia de cocaína en ella y puntualizó que era la primera vez que había visto arroz impregnado con sustancias estupefacientes".

Así, el tribunal destacó que *"[e]s interesante, para la comprensión de toda esta trama criminal, que Pérez Escobar haya afirmado, como lo hizo en la audiencia citada que sobre la base de su experiencia, la operación ilícita descubierta en esa ocasión era una prueba porque era muy poca la cantidad de cocaína para ser enviada en un cargamento tan grande y añadió que se suele mencionar en Congresos y en información suministrada por otros organismos nacionales o internacionales que África es la puerta de entrada de la droga hacia Europa, y, en particular, en el caso de Guinea Bisseau, había pocos controles estatales".*

Asimismo, en el debate se explicaron los pormenores de la diligencia judicial, Roberto Oscar Ettomi, jefe de operaciones del depósito fiscal Binder señaló, en la audiencia del 27 de noviembre de 2018, que el arroz había ingresado unos o dos días antes al depósito fiscal en un camión en palets y divididas en bolsas de cincuenta kilos y que el personal de Aduanas le había solicitado que se distribuyan las bolsas en el piso, porque iban a ser inspeccionadas por los perros.

Respecto al procedimiento realizado, afirmó que *"primero habían pasado los perros sobre las bolsas sin detectar nada y luego de ello, una persona caminó por arriba de las bolsas, se detuvo frente, levantó una de las bolsas y*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la llevó hasta un escáner, que estaba dentro de una camioneta Sprinter. Agregó que, cuando el personal de aduanas abrió la bolsa en cuestión había otras dos bolsas de nylon en su interior donde una de ellas `…arrojó resultado positivo por cocaína…´ y puso de resalto que ante esa circunstancia se habían abierto la totalidad de las bolsas para examinarlas y luego de ese trámite se habían vuelto a cerrar… concluyó su declaración relatando que en la noche del procedimiento, un hombre se había presentado en el depósito diciendo ser el dueño de la mercadería y había sido detenido por el personal de Gendarmería que se encontraba en el lugar".

De igual forma declaró en el debate Nicolás Spengler del área comercial del depósito fiscal Binder y puntualizó que *"…el día del procedimiento lo había llamado el gerente del depósito para que concurriera allí porque estaban realizando una verificación exhaustiva de la mercadería, razón por la cual había llamado por teléfono a Banesevich, explicándole la situación y respondiéndole éste que iría para el depósito sin realizar otro comentario y, sobre el punto relató que había entrado a Binder con su coche y que Banesevich lo había hecho detrás suyo en su propio auto marca Citroen, modelo berlingo, dominio EKG- 123) precisando también que en ese momento personal de Gendarmería Nacional le había solicitado sus documentos de identidad a Banesevich".*

Spengler añadió en esta ocasión que solo había visto a Banesevich en el depósito fiscal y en el depósito del barrio de Arroyito, agregando que cuando fue a ratificar sus dichos volcados en la prevención al Juzgado instructor, le habían mostrado unas fotografías en las que reconoció con certeza a Banesevich y a Zilli.

El tribunal destacó que el testigo mencionado precisó una cuestión relevante, que *"…en un primer momento la mercadería iba a salir por el puerto de Rosario pero que luego se había mudado de criterio y que la diferencia entre el puerto provincial y el de Buenos Aires, además del costo, residía en que los contenedores que salían desde la primera ciudad pasaban por un escaneo completo, en tanto que en*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Buenos Aires no todos los contenedores de exportación eran escaneados".

Ese testimonio fue relevante para el tribunal pues estimó que *"…es claro el motivo del cambio de puerto de salida que se planteó realizar casi sobre la fecha que no es otro que, si el contenedor lograba salir del depósito fiscal Binder ya controlado por las autoridades aduaneras comenzaba ya su tránsito hacia la ciudad de Buenos Aires y su puerto de salida por lo que la mercadería amañada no sería controlada nuevamente por la Aduana, dado que ya había sido intervenida y contaba el contenedor que la portaba con sus correspondientes precintos que mostraban el contralor anterior de parte de las autoridades fiscales nacionales".*

Así, en el depósito fiscal Binder donde se secuestraron novecientas veinte bolsas conteniendo la carga lícita y también la ilícita correspondiente, se detuvo a Juan Alberto Banesevich.

En la pericia elaborada por la División Análisis de drogas de abuso de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional sobre el material estupefaciente secuestrado en el depósito fiscal Binder de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se verificó la existencia de clorhidrato de cocaína en varias muestras (las identificadas del 1 a 7 y del 9 a 18 (cfr. fs. 3526).

Para determinar la cantidad de sustancia estupefaciente mezclada con el arroz en la muestra 19, los peritos de Gendarmería separaron la sustancia pulvurulenta mediante un tamizado, y un posterior lavado con solvente para extraer el peso neto de la sustancia que estaba impregnada en los granos de arroz (cfr. fs. 3525) y tras ello se había evaporado el solvente para recuperar la sustancia estupefaciente en su estado original, esto es en polvo, que luego fue pesado dando, un peso neto de cocaína de doce mil ochenta y seis gramos (12086 gramos), con un porcentaje de concentración del cincuenta y seis por ciento (cfr. fs. 3613). También, se constató, en las muestras 1,6, 14, 18 y 19 como sustancia de corte del clorhidrato de cocaína al levamisol (cfr. fs. 3523), lo que, coincidentemente, se había

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

encontrado en el material estupefaciente secuestrado en los hechos correspondientes a las causas 1167/14 y 385/15.

Sobre las diligencias periciales llevadas a cabo por personal técnico del Departamento Químico de la Gendarmería Nacional sobre el material estupefaciente incautado, se asentó que en la audiencia del 12 de febrero de 2019, el Primer Alférez Cristián Daniel Báez explicó que había sido designado para asistir al personal operativo en el depósito fiscal, donde a través de un escáner se habían examinado todos los costales de arroz y acotó que mediante tal aparato se había detectado una bolsa que se diferenciaba del resto, y precisó que dentro de aquélla había otra donde mezclado con el arroz había un envoltorio de plástico transparente. Señaló también, que frente a esa situación él había practicado el correspondiente test reactivo, que dio como resultado la presencia de cocaína, aclarando en este punto que ese test orientativo se realizó en todos los costales de arroz y mencionó que, habían llegado al laboratorio las muestras del envoltorio indubitado y él había efectuado el análisis pertinente sobre las muestras entre ellas la diecinueve, donde apareció un signo positivo en cuanto a la existencia en ella de cocaína.

Además, refirió que en las muestras se verificaron rastros de Levamisol, que es esta una sustancia de corte blanca y en polvo, que sirve para dar más peso y volumen al estupefaciente, tratándose ella de un elemento utilizado en veterinaria sobre vacunos, porcinos u ovinos desparasitarlos, aunque afirmó no tener conocimiento del efecto que producía en el cuerpo humano. Señaló que al efectuar el estudio tuvo que realizar luego una rectificación dado que había existido "un desfasaje de comas" entre el peso bruto y el neto (ver en este sentido la foja 3613).

En virtud, de ello se ordenaron los allanamientos en los domicilios de los encausados, detallados en la sentencia recurrida, a los que me remitiré en honor a la brevedad por no haber sido cuestionados. Sólo diré que en varios de sus domicilios se secuestró material estupefaciente.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Además, vale decir que todo lo actuado por el personal de Gendarmería Nacional fue ratificado durante el debate.

Se valoró también, la información contenida en los distintos equipos de telefonía celular, computadoras, chips, pendrives y cámaras de fotos que fueron secuestrados en los diferentes allanamientos (cfr. fs. 2621/2).

Del mismo modo, del análisis de la documentación secuestrada se logró determinar que Marín López participó de manera directa en el desarrollo de la operación de exportación y en la adquisición del arroz.

Teniendo en cuenta la basta prueba acollarada en la presente, el tribunal consideró que los elementos de prueba confirmaban la intervención de Germán Emilio Marín López, Gabriel Esteban Zilli, Jorge Eliecer Ramírez Cuartas Juan Alberto Banesevich y Carlos Olmedo Silva Cárdenas en el intento de exportación de 12.086 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 56% a través del puerto de esta ciudad, con destino a Guinea Bissau develado el día jueves 17 de septiembre de 2015 en horas de la tarde en el depósito fiscal "BINDER" (sito en la calle 1.721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe).

C. Ahora bien, luego del desarrollo efectuado en el punto anterior advierto que la sentencia impugnada contiene una fundamentación suficiente, lo que determina su validez como acto jurisdiccional.

Ello es así, por cuanto las leyes exigen un razonamiento claro, completo, coordinado entre los distintos argumentos y entre éstos y las conclusiones, apoyado en los elementos de autos y en las normas jurídicas vigentes, de manera que sin dificultad se advierta una correcta valoración de la prueba para obtener los elementos de hecho, y una adecuada elección de la ley para obtener su encuadramiento jurídico (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, T.IV: La actividad procesal, Ediar, Buenos Aires, 1964, pág. 295), exigencia que se ha visto satisfecha en el pronunciamiento en trato.

Por estas razones, el pronunciamiento bajo revisión luce como una derivación lógica y razonada de las

constancias de la causa y como consecuencia de una aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que las críticas esbozadas por las distintas defensas logren demostrar, en cuanto a este aspecto, la arbitrariedad que alegan (arts. 123, 398, 404, inc. 2 y 471 –todos a contrario sensu- del CPPN).

Sentado cuanto precede, la sentencia recurrida se encuentra al amparo de la tacha de arbitrariedad alegada, habida cuenta que el pronunciamiento impugnado se encuentra suficientemente motivado, conforme con las reglas de la sana crítica racional (art. 123 del CPPN), en lo atinente a la prueba de los hechos.

V. Recurso de casación interpuesto por la querella.

Se recurrieron las absoluciones de Eugenio Nadin Ardila Angulo; Carlos David Pardey Rozo, Carlos Miguel Potes Ramírez y Guillermo Adolfo Heisinger -puntos XXXII; XXXIII; XXXIV y XXXV de la sentencia recurrida-.

Respecto de los tres primeros, vale decir que lo expresado por el tribunal *a quo* para absolver a los nombrados se encuentra debidamente fundamentado, y aunque pudiera estar en desacuerdo con lo resuelto, al igual que el Fiscal General de la anterior instancia, consideró que las argumentaciones de la parte querellante resultan ser una simple disconformidad respecto a las absoluciones dictadas.

Respecto de Eugenio Nadin Ardila Angulo, el tribunal consideró, que de las declaraciones de los investigadores no se había podido extraer elemento alguno con fuerza gravosa.

Sin perjuicio de haberse acreditado la estrecha relación entre Silva Cárdenas, anfitrión del causante y Vargas Fernández, integrantes ambos de la organización criminal traída al debate, Ardila Angulo era un semi criado del primero y moraba en su vivienda.

Por otro lado, respecto de Potes Ramirez y Pardey Rozo, el tribunal señaló que si bien se encontraba probado que ambos imputados, quienes se conocían entre sí y mantenían vínculos con Henry Ibarra Ramírez y Germán Emilio Marín López, e incluso Potes Ramírez también tenía relación

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

con Edilberto Vargas Fernández, entendía que estas circunstancias de conocimiento recíproco, no alcanzaban para atribuirles, la calidad de integrantes de una asociación ilícita, con conocimiento y voluntad de realizar aportes para ella o con la intención de formar parte de un grupo con propósitos delictivos.

En efecto, se sostuvo que no se había podido acreditar con la suficiente contundencia necesaria que Pardey Rozo hubiera formado parte de la agrupación, y que su obrar siempre apareció vinculado con gestiones que le eran encomendadas por terceros, y no estaban relacionadas, al menos con su conocimiento, con la actuación ilícita de sus consortes de causa, ni que aquél supiera de aquéllas, y, aún en ese caso, diferente debería haber sido la imputación que se le dirigiera.

A la misma conclusión se arribó, en relación a la situación particular de Carlos Miguel Potes Ramírez. Es que si bien el Tribunal señaló que habían existido comunicaciones entre Potes Ramírez y algunos de sus consortes de causa, como Vargas Fernández o Germán Marín López, no podía soslayarse que que el imputado trabajaba para Vargas, realizando diferentes tipos de tareas del hogar y era lógico que se comunicara con aquél.

También, se tuvo en cuenta el nivel de vida de los nombrados, pues era sencillo, alejado de los lujos y el estándar de vida que sostenían muchos de sus consortes de causa que se desplazaban en automóviles de alta gama.

Ello, le permitió al tribunal considerar que eran personas trabajadoras, en consonancia con la versión brindada por ellos mismos.

En virtud de ello, por imperio de lo dispuesto en el art. 3º del código de rito, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembros por el que fueran acusados, por no haberse demostrado la hipótesis de los acusadores a su respecto, fueron absueltos de conformidad con lo normado en los artículos 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sentado ello, no se advierte la arbitrariedad alegada por la parte querellante en el razonamiento efectuado

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

por el tribunal para arribar a esa conclusión, por lo que tales temperamentos serán convalidados.

Así, debe concluirse que las discrepancias valorativas expuestas por la parte querellante, más allá de demostrar que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros) o en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605).

Respecto de la situación de Guillermo Adolfo Heisinger, recurrida por la querella, será analizada en el próximo punto.

VI. Recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal general invocó en su recurso casatorio la errónea interpretación de la ley sustantiva y la inobservancia de las normas procesales en las que incurrió el tribunal oral al analizar la situación particular de los imputados **Williams Triana Peña y Guillermo Adolfo Heisinger**.

Ahora bien, previo a adentrarnos en el análisis habré de realizar algunas aclaraciones preliminares.

En ese sentido, es menester recordar que en el fallo "Casal" (Fallos 328:3399) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya antes citado, al resignificar la competencia revisora de esta Excma. Cámara Federal de Casación Penal reconoció un carácter amplio al recurso de casación -única herramienta procesal viable para la revisión de un sentencia-.

Así, se explicó, en oportunidad de resolver el fallo "Casal", que no existe razón legal ni obstáculo alguno en el texto mismo de la ley procesal para excluir de la materia de casación un análisis completo de la decisión que se critica. Es decir, "el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que se pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable", y que "lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación". En definitiva, el Alto Tribunal concluyó que "el art. 456 CPPN debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas".

Nuestro código de rito reconoce facultad recursiva tanto al titular de la vindicta pública como a la querella, aunque con alcance limitado -confr. arts. 458 y 460 del CPPN-.

En esa dirección, los agravios que llegan hoy a esta instancia, fundados en la arbitrariedad de la sentencia, ameritan de parte de este tribunal un profundo análisis ya que si bien esta doctrina no alcanza la mera discrepancia con las argumentaciones de derecho local, común o ritual en que se fundan (Fallos: 311:1695), si puede revelarse ante una valoración de la prueba que permita descalificar el acto jurisdiccional por no tratarse de una derivación razonada del derecho vigente (Fallos 330:2498).

Además, se ha sostenido que "La duda es un estado de ánimo del juzgador, que no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso" (C.S.J.N. Fallos, 315:495, 323:701 entre muchos otros), lo que aquí no ha ocurrido.

Situación de Williams Triana Peña

Veamos, el tribunal consideró que no logró demostrarse la participación de Williams Triana Peña (condenado sólo por el delito de asociación ilícita) en relación a los hechos identificados como "Kétchup", ocurrido el 29 de agosto de 2014, en el sector de partidas de la terminal "A" de la empresa "Qatar Airways" del Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"; el ocurrido el 17 de enero del año 2015 en el interior de la vivienda ubicada en la calle Niceto Vega 5035 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el identificado como "Arroz" ocurrido el 17 de septiembre de 2015 en el depósito fiscal "BINDER" (sito en la calle 1721 -ex Biedma- nº 7.916, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe). Por estos hechos, fue absuelto de conformidad

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

con lo normado en los artículos 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación).

El Ministerio Público Fiscal estimó que si bien el Tribunal tuvo por probado la existencia de una organización en fecha aún no determinada pero antes del mes de agosto de 2014 y hasta el 17 de septiembre de 2015, dedicada a cometer entre otros delitos el del tráfico ilícito de estupefaciente, ha realizado una incorrecta evaluación de los hechos y de los elementos probatorios, pues a su modo de ver se demostró tanto la intervención como la pertenencia jerárquica de Williams Triana Peña en la organización.

En oportunidad de alegar, indicó que se encontraba probada la existencia de una organización narcocriminal trasnacional dedicada al tráfico y contrabando de estupefacientes, la cual estaba en manos de los hermanos Williams y Erman Triana Peña, quienes tenían un total control sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo y eran obedecidos por los integrantes de los eslabones inferiores.

Esa hipótesis el representante del Ministerio Público Fiscal la apoyó en las intervenciones telefónicas a los abonados utilizados por Mario Lara Guerra y Guillermo Heisinger, quienes trabajaban para los hermanos Triana Peña.

También, en las tareas de campo que fueron corroboradas en las audiencias por los oficiales de las distintas fuerzas de seguridad que intervinieron en esta investigación.

De una atenta lectura del fallo recurrido, advierto que asiste razón al Fiscal recurrente en cuanto a la ubicación jerárquica del imputado Williams Triana Peña dentro de la asociación ilícita, en virtud de la cual correspondía atribuirle responsabilidad penal en los he-chos de narcotráfico por los que fue absuelto.

Es que todos ellos fueron cometidos en el marco de una compleja organización criminal, conformada por varias personas, actuando de forma coordinada y con un rol determinado.

Antes de continuar con el análisis que se viene desarrollando, entiendo que resulta dable asentar el concepto de crimen organizado, *"que proviene de la traducción*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

literal de «organized crime», lo cierto es que sería más adecuado denominar a este fenómeno como «delincuencia organizada» siguiendo la versión al castellano de la Convención de Palermo y de otros actos existentes en la materia. Sin embargo, la denominación «crimen organizado» se ha extendido no solo en los medios de comunicación, también en el mundo académico y, además, las propias estructuras creadas por el Gobierno de España para la lucha contra este fenómeno también lo han acuñado, como son los casos del antiguo Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) o el actual Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)". Véase Woodiwiss, M., «Transnational Organized Crime: The Strange Career of an American Concept», en Beare, M. (ed.), Transnational Organized Crime, Londres, Ashgate Publishers, 2013; Ruiz Díaz, L., La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea, Tesis doctoral, Universidad de Granada, septiembre de 2015, p. 21 y pp. 22-57.

Por ello, la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 solo pretendió definir el crimen organizado a través de parámetros identificadores, capaces de conseguir estándares legislativos entre los Estados firmantes, con la finalidad de reforzar la cooperación en la lucha contra este fenómeno.

Se consideró grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves» [La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, de 15 de noviembre de 2000, presentado como anexo a la Resolución de la Asamblea General 55/25 de la misma fecha (cfr. https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf)]. Esta definición fue también adoptada por la Decisión marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, DO L 300/42, de 11 de noviembre de 2008. EUROPOL calcula que al menos 5.000 organizaciones criminales están siendo investigadas en Europa, y ha establecido 11 criterios para poder identificar este tipo de organizaciones, que necesariamente tienen que cumplir los núms. 1, 3, 5 y 11: 1. Colaboración entre más de dos personas; 2. Distribución de

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

tareas; 3. Actuación continuada o por tiempo prolongado; 4. Utilización de formas de disciplina y control interno; 5. Sospecha de comisión de delitos graves; 6. Operatividad en el ámbito internacional; 7. Empleo de violencia u otras formas de intimidación; 8. Uso de estructuras de negocio o comerciales; 9. Actividades de blanqueo de capitales; 10. Ejercicio de influencia, y 11. Búsqueda de beneficio o poder (Doc. 6204/1/1997, ENFOPOL 35 rev DG).

Se ha entendido que *"Casi siempre se trata de actos criminales de una naturaleza violenta grave, que se cometen para obtener un beneficio económico, sin mayores aspiraciones políticas, aunque necesiten corromper a funcionarios y a la clase política para que estos les faciliten la consecución de sus objetivos. Sus actividades las desarrollan individuos que obedecen las órdenes de una organización jerárquica cuya membresía, debido a la ilegalidad de las actividades que desarrolla, es restringida y fundamentalmente basada en la confianza étnica, familiar o geográfica"* cfr. (Felsen, D. y Kalaitzidis, A., «A Historical Overview of Transnational Crime», en Reichel, P. (ed.), Handbook of Transnational Crime and Justice, Thousand Oaks, SAGE Publications, 2005, pp. 3-19, y Basiouni, C. y Vetere, E. (eds.), Organized Crime. A Compilation of U.N. Documents, 1975-1998, Nueva York, Transnational Publishers, Inc., 1998).

También que, *"…se ha identificado un nuevo tipo de criminalidad organizada, denominada transnacional, que explota las oportunidades que le ofrece la liberalización de los mercados y obtiene ventajas de las dificultades que existen para controlar las transacciones financieras en las que participa. Una criminalidad capaz de superar las restricciones geográficas y desarrollar lazos extra-nacionales con grupos similares, gracias a los avances en las tecnologías de la comunicación y la información. Además, han realizado cambios sus estructuras orgánicas, internacionalizándolas e incrementando su tamaño y el volumen de sus negocios, a través de nuevas rutas. En consecuencia, tienen mayores capacidades para retar a los Estados y operar a escala, y no necesitan grandes acumulaciones de poder y recursos ligados a un territorio, aunque sean capaces de*

emplazar a sus miembros en distintos territorios, aprovechando los flujos migratorios" (cfr. NUEVAS DINÁMICAS EN LAS RELACIONES ENTRE CRIMEN ORGANIZADO Y GRUPOS TERRORISTAS, Inmaculada Marrero Rocha, Revista Española de Derecho Internacional. Sección ESTUDIOS Vol. 69/2, julio-diciembre 2017, Madrid, pp. 145-169 http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.2.2017.1.06©2017Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ISSN: 0034-9380; E-ISSN: 2387-1253).

Es dable traer a colación que, el Consejo de Seguridad Nacional de España, en su reunión del día 21 de enero de 2019, ha adoptado un acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

Conceptualmente resulta complejo encontrar una definición de crimen organizado que aglutine todas sus peculiaridades. Esta forma de criminalidad presenta muy diversas dimensiones que van desde la asociación concertada de un grupo de delincuentes, mínimamente estructurado, hasta las grandes corporaciones internacionales delictivas, que ponen de manifiesto diversos niveles de intensidad de esta actividad criminal. Pero se precisa una concreción criminológica para estudiar y analizar el fenómeno. Para ello, es necesario conjugar los criterios analíticos establecidos por Europol y lo regulado en las principales referencias normativas, nacionales e internacionales, como son: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional» (Protocolo de Palermo) del año 2000, la Decisión Marco 2008/841/ JAI del Consejo de la Unión Europea de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Puede establecerse la definición con una serie de características principales que configuran, la esencia del concepto de crimen organizado, y que, principalmente, son:

– Finalidad esencialmente económica. Su principal objetivo es la búsqueda de beneficios. Cualquier otra finalidad que pueda aparecer es instrumental y por tanto subordinada a la primera.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

– Implicación en actividades ilícitas complementadas con actividades legales. Para alcanzar sus objetivos desarrollan actividades prohibidas por la ley, si bien los beneficios obtenidos suelen provenir de una combinación de estas con negocios legales constituidos esencialmente para blanquear los beneficios económicos o servir de encubrimiento a sus actividades ilegales.

– Asociación de una pluralidad de personas. El grupo delictivo se constituye de manera expresa para delinquir conforme a una idea de organización (jerarquía, distribución de funciones y tareas, y reparto de responsabilidades) que le permite desarrollar su actividad criminal.

– Carácter de continuidad en el tiempo. La organización criminal presenta vocación de perdurabilidad, de modo que su organización es permanente: sus miembros pueden ir renovándose, pero la estructura se adapta y sigue existiendo.

– Empleo de medidas de seguridad. Dirigidas a salvaguardarse de las actuaciones del Estado y contra otros grupos criminales que operan competitivamente en sus mismos mercados criminales, la organización delictiva suele dotarse de todo tipo de medidas de seguridad.

– Adaptabilidad. El grupo criminal modifica sus métodos y procedimientos, asume nuevas modalidades ilícitas, diversifica sus métodos y rutas criminales, buscando siempre ventajas ante la respuesta de los Estados y las Instituciones.

– Transnacionalidad. La delincuencia organizada se beneficia de la «globalización»: la extensión de conexiones marítimas, aéreas y terrestres; el aumento de los intercambios comerciales mundiales; los constantes movimientos de personas, mercancías y capitales; el desarrollo de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones; la apertura y eliminación de fronteras; y la interconexión de los mercados financieros nacionales e internacionales. En suma, la interdependencia creciente de los países y regiones es utilizada por la criminalidad organizada para extender sus actividades criminales transnacionalmente.

– Provoca efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados con importante potencial desestabilizador. Sus

actividades criminales afectan no sólo a la vida comunitaria, sino también a la economía, a la gobernabilidad y al funcionamiento ordinario de las instituciones públicas. El blanqueo de capitales derivado de su acción delictiva desestabiliza y perturba la economía, creando una suerte de mercados paralelos, un «sector informal» que no respeta ni leyes ni regulaciones, una superposición entre la economía legal y la economía ilícita que puede llegar incluso a dinamizar artificialmente algunos sectores de modo que reducen los índices de productividad, se rebaja o elimina la competitividad y desincentiva la actividad empresarial.
– Uso de influencia o corrupción. Utiliza la corrupción y otras formas de presión e influencia, aspirando, en casos, a consolidar posiciones de poder político y actuar como un grupo de presión para intentar controlar distintas instituciones (cfr. Madrid, 21 de febrero de 2019– BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 46 Viernes 22 de febrero de 2019 Sec. I. Pág. 17048).

O sea que, dada la existencia de una organización criminal, coincido con lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, doctor Pleé, en cuanto sostuvo que "*…En este tipo de organizaciones jerárquicas, de las que forman parte gran cantidad de personas, cuyos aportes individuales son necesarios para el éxito de las operaciones que conforman su objeto, las órdenes y la coordinación de cada hecho llevado a cabo en ese marco -que se atribuye independientemente de la pertenencia a la banda criminal-, se encuentra a cargo de una o varias personas que actúan como jefes de la organización, cuyo rol consiste en la dirección, control, supervisión, etc., del accionar de los otros miembros de la banda, y que, además, generalmente se encuentran físicamente lejos del lugar concreto en el que se ejecutan cada uno de esos hechos, que pueden ser cometidos en forma simultánea por distintos miembros de la asociación ilícita, pero bajo las directivas de una misma persona*".

Continuando, tal como indica el Fiscal en su recurso, de los tres legajos que fueron creados a partir de un año de investigación del teléfono del imputado Mario

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Alberto Lara Guerra, surge inequívocamente lo afirmado por esa parte, toda vez que ese encausado explicaba todo el tiempo que tanto Williams y Erman Triana Peña eran los jefes; señalaba que los mails dando la rendición de cuentas los tenía que mandar a ambos para poder controlar las distintas operaciones.

No solo se deriva de los diversos indicios que fueran remarcados por el Fiscal en su recurso, sino también de prueba directa que así lo acredita.

En tal sentido, no puede soslayarse, aquella reunión que el imputado lideró y para la cual debió cruzar la frontera desde Brasil hacia Iguazú (Misiones, Argentina), sin seguir directivas de su hermano Erman, lo que determina su poder de mando, al ser ante quien los demás miembros de la organización debieron justificar sus actos, en concreto, dar explicaciones ante el desmantelamiento de la organización criminal y el secuestro del estupefaciente en el domicilio de la calle Niceto Vega.

Por lo demás, resulta importante destacar que en varias ocasiones, quienes declararon en el debate lo hicieron de forma confusa, identificando erróneamente a los imputados, confundiendo las personas de Erman alias "Mono" y Williams alias "Willo", lo que da la pauta de que las órdenes las daban indistintamente uno u otro, pues no sería lógico pensar que entre los miembros confundan a la persona ante la cual debían responder.

En efecto, está confusión a la cual hago referencia fue catalogada por el fiscal general ante esta instancia como, como un "indicio certero acerca de la similar autoridad que detentaban ambos hermanos dentro de la organización".

Habida cuenta que dentro de la asociación ilícita las órdenes eran impartidas por uno u otro hermano de forma indistinta, las personas que intervenían en los hechos respondían y rendían cuentas a ambos Triana Peña, sin perjuicio de que Erman se encontrara en Argentina y Williams no.

La absolución del imputado en orden a los hechos puntuales de narcotráfico que aquí se cuestionan,

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

guarda estricta relación con una errónea consideración como un mero miembro de la banda criminal, en tanto, la valoración de la prueba en los términos reclamados por la acusación, le hubiese permitido al *a quo* no solo ubicar a Williams Triana Peña en el lugar de mando que ocupó dentro de la organización, sino también, y consecuentemente con ello, tener por configurada su responsabilidad penal en los ilícitos concretos cometidos por aquella.

En efecto, desde ese rol jerárquico ocupado por Williams Triana Peña correspondía analizar la imputación por los hechos de narcotráfico (contrabando de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización). De haberse apreciado la real dimensión de su función dentro de la organización, en modo alguno se hubiese arribado a una solución liberatoria en los tres hechos que se le atribuyeran.

Sin perjuicio, claro está, de la ausencia física del imputado Williams Triana Peña en cada uno de los hechos de narcotráfico, en calidad de líder de la organización, su aporte fue indispensable y determinante para su ejecución.

Por ello, atendiendo a las circunstancias que fueron probadas en la causa, advierto que se ha efectuado una errónea interpretación por parte el *a quo* del rol jerárquico que ocupaba Williams Triana Peña en la asociación ilícita, por lo que corresponde le sean imputados los tres (3) hechos de narcotráfico por los que fue oportunamente acusado y posteriormente absuelto arbitrariamente por ese Tribunal Oral.

b) Situación de Guillermo Adolfo HEISINGER.

El Tribunal consideró que no se había podido demostrar con certeza la hipótesis de los acusadores respecto al conocimiento y voluntad de integrar una organización delictual, con el propósito de ejecutar actos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

Así, reparó en que no se habían hallado elementos de convicción que permitieran acreditar, con el grado de certeza que se requiere que Heisinger haya formado parte de la agrupación ilícita.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Señalaron que se había podido establecer que Heisinger en su calidad de abogado era el asesor jurídico de los hermanos Erman, Johana, y Williams Triana Peña y colaboraba con ellos en la toma de decisiones en cuestiones de tipo societarias, patrimoniales y comerciales o de índole monetaria. Sobre esto, indicaron que todos estos temas vinculados a los giros comerciales o societarios relativos a las empresas que conformaban los Triana Peña podría estar relacionada al blanqueo de capitales, y en tal caso nada tenía que ver con los hechos aquí juzgados, sino que configuraban el objeto procesal de otra causa que se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 12.

El Ministerio Público Fiscal estimó que en este caso, también se realizó una arbitraria evaluación de los hechos y de la prueba.

En efecto entendió que, a lo largo del debate había quedado demostrado que Guillermo Adolfo Heisinger, más allá de su rol como abogado a través del cual intervenía en los negocios lícitos, tenía pleno conocimiento y participaba de las actividades ilícitas de la familia Triana Peña.

Su postura se sustentó en el testimonio de la oficial Fabiana Octaviano quien en el marco de la investigación que involucraba maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico detectaron la presencia de Guillermo Heisinger y Mario Lara Guerra. En el marco de esas tareas se logró intervenir los teléfonos de los nombrados de las que surgió que el 90% de la actividad de Heisinger estaban relacionadas con los Triana Peña y con su colaborador Ignacio Altuve quien lo asesoraba en algunos negocios.

A más de, al momento de llevar a cabo el allanamiento en su domicilio Heisinger manipuló su celular e intentó comunicarse a las 11.59 con Luzmarina Col al abonado 573168759817 que se hallaba en Colombia, esposa de Nelson Triana y a las 11.02 un registro de comunicación con Yohana Triana al abonado 116891-3176 (ver acta de fojas 2344/2345 y capturas de pantallas del celular de fojas 2348/2352). Esta situación fue valorada por la acusación como de gran relevancia, debido a que cuando posteriormente se realizó el

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

allanamiento en el domicilio de Yohana Triana Peña, la misma no pudo ser hallada.

Vale señalar, que la acusación al momento de alegar, sólo sostuvo la imputación respecto al hecho que encuadra en la figura de la asociación ilícita, toda vez que entendió que efectivamente el imputado formaba parte de la asociación criminal, ya que tenía pleno conocimiento y participaba de sus actividades.

Ello así, toda vez que estableció y reconoció que efectivamente Heisinger no tenía contacto ni conocía a todos los integrantes de la asociación, y a partir de esa aclaración es que su participación se estableció dentro de la escala penal, inferior al resto.

Ahora bien, advierto que, como se señalara *ut-supra*, la organización liderada por Erman y Williams Triana Peña contaba con una estructura jerarquizada, brindando cada uno de sus integrantes su aporte personal, de manera coordinada entre sí, teniendo lugar en diversas circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuanto menos desde principios del mes de agosto de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015.

La labor de Heisinger resultó una actividad esencial en lo que hace al funcionamiento de la organización, y consistió en el diseño y planificación de un importante entramado de sociedades comerciales, conformado por distintas personas vinculadas con los comportamientos delictivos imputados, que se encargarían de manejar el flujo de los fondos obtenidos. Algunas firmas fueron identificadas como "SANIS S.R.L.", "INTERNATIONAL TRADE AND COMERCE ITC S.A.", "HARD BU-SINESS S.R.L.", "WEALTHY RANCH S.A.", "SPANO POINT S.A.", "LETS-TRADE S.A.", "CONNECT PLUS PANAMA", "GUJI S.A." y "CRAZY BALL S.R.L.".

Por ello, considero que se dieron en el caso todos los presupuestos objetivos del delito de asociación ilícita, pues existió entre los líderes de la organización y Heisinger un acuerdo previo, indicativo de una relativa permanencia, fue comprobada la relación mantenida en el tiempo entre los acusados y los diversos actos llevados a cabo por el abogado a fin de colaborar con la asociación.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

El delito de asociación ilícita es un delito autónomo y de peligro abstracto que afecta el bien jurídico orden público y la consumación es en el momento mismo en que los autores se asociaron para cometer delitos, por el simple acuerdo de formar parte de la asociación.

No puede soslayarse, sus viajes a Uruguay con Mario Lara Guerra en donde se acreditó que concurrieron a dos casas de cambio; sus designaciones como director/director suplente/presidente en las distintas sociedades de las que formaba parte Erman Triana Peña, que luego vendía o dejaba la titularidad a nombre de su hermana Johana; el viaje con Ignacio Altuve -contador de los Triana Peña- a la República de Colombia para hablar con una persona de origen turco o iraní vinculada a los líderes; sus conversaciones con Altuve acerca de la apertura de cuentas en Luxemburgo o Suiza a nombre de Williams Triana Peña.

Los hechos que se le atribuyen a Heisinger, por sus particularidades, ilustran una consensuada planificación y ejecución con el resto de la organización, previa designación de su rol como creador de un entramado societario para que la estructura narco-criminal pudiese funcionar.

Todos los elementos reseñados constituyen circunstancias que permiten tener por acreditado el elemento "permanencia" que requiere el tipo penal, pues su aporte no se limitó a un simple asesoramiento o a un hecho en concreto, sino que la relación era de carácter permanente.

Por último, cabe remarcar, tal cual lo hiciera el Fiscal General ante esta instancia durante el término de oficina, que el delito de asociación ilícita se atribuye de manera independiente respecto a cada delito individual que cometa la banda, por lo que el argumento del Tribunal acerca de que la conducta de Heisinger estaría siendo investigada en el marco de otra causa por lavado de activos, no resulta idóneo para eximirlo de responsabilidad por su pertenencia a la organización.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció que *"la imputación de la participación en una asociación ilícita es 'autónoma' de la de los delitos que*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

constituyen su objeto, en tanto, tal como se ha entendido desde antiguo, para la punibilidad de dicha conducta es suficiente con 'asociarse': no se trata del 'convenio para ejecutar uno o más delitos, sino de la asociación de individuos para cometer delitos en general, hecho que el Código castiga por la sola circunstancia de ser los sujetos miembros de tal asociación'" (CSJN, voto del juez Petracchi en 'Arancibia Clavel, Enrique L.', resuelta el 8 de marzo de 2005, Fallos: 328:341).

Por ello, estimo que no sólo el fundamento del tribunal resulta inválido desde el aspecto típico, sino que además no aportó fundamentos suficientes para descartar el carácter de miembro de Heisinger en la asociación ilícita.

En definitiva, a mi modo de ver, contrariamente a lo sostenido por el tribunal *a quo,* las constancias del legajo valoradas conforme las reglas de la sana crítica racional alcanzan el grado de certeza necesario para arribar a un fallo condenatorio respecto de ambos imputados.

Es que, atendiendo a todo lo precedentemente indicado, considero por demás acertada la crítica que realiza la parte acusadora en su recurso en tanto ha quedado evidenciado que el *a quo* consideró de modo fragmentario los elementos de juicio arrimados al proceso, omitiendo una visión conjunta de los mismos, lo que ha redundado en la arbitrariedad de la sentencia que, consecuentemente debe ser casada, *in totum* en lo concerniente a la absolución dispuesta respecto de Williams Triana Peña y Heisinger.

Es doctrina inveterada del Superior, que es descalificable el pronunciamiento que carece de los requisitos mínimos que lo sustenten válidamente como tal, en razón de la arbitrariedad manifiesta derivada del apartamiento de las constancias comprobadas de la causa, omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por las partes y de normativa conducente a la solución del litigio, o cuando media fundamentación aparente apoyada sólo en conclusiones de naturaleza dogmática, o en inferencias sin sostén jurídico o fáctico, con el sólo sustento en la

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

voluntad de los jueces. (Fallos 330: 4983; 326:3794; 322:2880, entre otros).

Además, hemos de agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido (cfr. CSJ 402/2014 (50-F)/CS1, Recurso de Hecho, "Fredes, Gonzalo Arturo y otros s/causa n° 13.904", rta. el 6/3/18, *"…que todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción (Fallos: 330:261). 9°) Que el tráfico ilícito de drogas y las modalidades de crimen organizado a él asociado, son una fuente constante y permanente de afectación de derechos de los individuos y de la sociedad. Por eso, si bien en Fallos: 332: 1963 "Arriola" esta Corte descartó la criminalización del consumidor de estupefacientes, también recordó el deber del Estado de mejorar las técnicas complejas de investigación para este tipo de delitos, tendientes a desbaratar las bandas criminales narcotraficantes que azotan a todos los países (ver considerando 29). Asimismo, ratificó "el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir el narcotráfico" y recordó que los compromisos internacionales obligan a la Argentina a "una "coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito, adoptando las medidas necesarias, para que el cultivo, la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta de venta, distribución, despacho, expedición de tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, sean consideradas como delitos que se cometen intencionalmente, y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión y otras penas privativas de la libertad (art. 36 de la Convención)", Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de Naciones Unidas (considerando 28)".*

Por ello, consideró que corresponde **hacer lugar** al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, **anular** la resolución recurrida

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

en lo que respecta a Williamas Triana Peña y Heisinger -puntos XIX y XXXV- y **reenviar** al tribunal *a quo* a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento.

VII. Mensuración de la pena a Gabriel Esteban Zilli.

Previo a emprender el análisis de la fundamentación de la mensuración de la pena impuesta, resulta pertinente realizar unas breves aclaraciones.

Conviene recordar que en términos generales la pena debe ser proporcionalmente determinada, entre otras pautas, según la clase, gravedad y forma de ejecución del hecho, de acuerdo a la culpabilidad y grado del injusto demostrado por cada uno de los intervinientes de manera individual, de tal modo que *"ilícito y culpabilidad son conceptos graduables, y el paso decisivo de la determinación de la pena es definir su gravedad. Para esto es imprescindible recurrir a las circunstancias que fundamentan la punibilidad y establecer su grado."* (Ziffer, Patricia; *Lineamientos de la determinación de la pena*, Ed. Ad-Hoc, 1º reimpresión, 2º edición, pág. 107, Bs.As., 2005).

A fin de graduar la sanción a imponer se deben tener en cuenta las pautas mensurativas objetivas y subjetivas contenidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Se desprende de los citados artículos que la pena que se determine debe individualizar de manera proporcional la magnitud del injusto y la culpabilidad que los autores han puesto en evidencia con la comisión de los hechos aquí constatados.

En ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria sostienen que si bien, en principio la determinación del monto de la pena resulta privativa del juez de mérito, corresponde hacer una excepción a dicha regla, cuando no se advierte una adecuada fundamentación de cuestiones tan trascendentales, es decir que -en definitiva- la valoración que hagan los jueces debe ajustarse a los criterios orientadores fijados por los artículos 40 y 41 del Código Penal, fundamentación que no se suple a través de una simple enunciación de las pautas objetivas y subjetivas enunciadas en dichos artículos, ya que

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la mensuración de la pena debe expresar de manera clara y precisa una ponderación conjunta de los elementos que a tales fines fueron incorporados al juicio.

En esa misma dirección, es menester recordar que a los efectos de mensurar la pena, el artículo 41 de dicho cuerpo legal, distingue entre circunstancias de carácter objetivo (vinculadas con las características del hecho juzgado) y aquellas de índole subjetivo (relacionadas con el autor, su peligrosidad, así como también con aquellas relacionadas con el lugar, modo y ocasión en que aquél fue perpetrado) que deben ser tenidas en cuenta, entre otras circunstancias, como reglas orientadoras al momento de fijar el monto de la pena (Código Penal de la Nación; Comentado y Anotado; Andrés José D Alessio; Editorial La Ley; Tomo I; 2° Edición Actualizada y Ampliada 2009; pág. 635/637).

Sentado ello, entiendo que en el caso, los sentenciantes realizaron un análisis razonable de las circunstancias atenuantes y agravantes.

Por lo demás, es dable señalar que la doctrina ha afirmado que "*Todas aquellas reflexiones que ya han sido tomadas en cuenta por el legislador al establecer el tipo penal, o dicho de otro modo, todas aquellas circunstancias que fundamentan el ilícito no pueden ser consideradas nuevamente al momento de fijar la pena para un hecho concreto. Esto es lo que en la doctrina se conoce como ´prohibición de doble valoración´ por ejemplo no sería posible agravar un homicidio porque el hecho ´culminó con una muerte lamentable´ o un robo, porque para el apoderamiento se utilizó violencia, porque estas modalidades son propias del homicidio y del robo, respectivamente, y tomarlas en cuenta implicaría agravar dos veces por la misma circunstancia: en la elección del tipo penal y en la elección de la pena. Es la prohibición de ´llevar doble contabilidad´, como lo dice Bruns, y alcanza no sólo a los elementos del tipo estrictamente, sino también al fin de la norma*" (ZIFFER, Patricia, "*Lineamientos de la determinación de la pena*", pág. 106, Buenos Aires, Editorial Ad- Hoc, 2005). En base a ello, y sin desconocer tal prohibición, debo señalar que no advierto que el tribunal haya valorado para agravar la pena

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la afectación al control aduanero y las fronteras, como el hallazgo de droga en el domicilio del nombrado Zilli, como alude la defensa.

En definitiva, no se demuestra y tampoco se advierte que la pena dispuesta por el *a quo* carezca de fundamentación suficiente y menos aún, resulte desproporcionada y excesiva.

Por lo demás, de lo asentado en los párrafos precedentes surge que la sentencia impugnada, en lo que respecta a la mensuración de la pena del resto de los imputados, cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En virtud de todo lo expuesto, propicio al acuerdo:

I. HACER LUGAR al recurso del fiscal general en lo que respecta a William Triana Peña, **ANULAR el punto XIX** de la resolución recurrida y **REENVIAR** a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, sin imposición de costas (arts. 470, 530 y 531 del CPPN).

II. HACER LUGAR a los recursos del fiscal general y la parte querellante respecto a Heisinger, y en consecuencia **ANULAR** el punto **XXXV** de la resolución recurrida y **REENVIAR** a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, sin imposición de costas (arts. 470, 530 y 531 del CPPN).

III. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante respecto a los puntos **XXXII; XXXIII y XXXIV** de la sentencia recurrida.

IV. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas de los imputados, con costas (arts. 456, 470, 471 *a contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

V. TENER PRESENTE las reservas del caso federal.

Tal es mi voto.-

El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:

I. Que por coincidir, en lo sustancial, con los fundamentos desarrollados por el colega que inaugura el acuerdo, doctor Daniel A. Petrone, hemos de adherir a la solución propuesta y emitimos nuestro voto en igual sentido.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

II. Ello es así, en tanto, en primer lugar, destacaremos que los recursos vinculados al tratamiento de las nulidades rechazadas por parte del tribunal de la anterior instancia aparecen como meras reediciones de cuestiones que han recibido suficiente contestación en la instancia anterior y únicamente expresan la disconformidad de la parte con lo resuelto, sin que sus manifestaciones desarrolladas en los escritos casatorios logren conmover los argumentos brindados por el tribunal sentenciador.

Sobre esta cuestión, sólo nos interesa recordar que ya hemos tenido oportunidad de convalidar el desarrollo de un debate oral y público que se llevó a cabo a través de una plataforma virtual de videoconferencia (CFP 6147/2017/TO1/CFC3 "Sánchez de Loria, Mariano y otros s/recurso de casación", rta. el 17/9/2021, Reg. 1668/21).

En esa ocasión, recordamos que "*(s)i bien es cierto que desde la sanción del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23984), el juicio oral se desarrolló, en términos generales, reuniendo de manera presencial y en una misma sala de audiencias a todas las partes del proceso, las circunstancias excepcionales que atraviesa no sólo nuestro país sino el mundo entero, como consecuencia de la pandemia declarada por el COVID-19, han obligado a las administraciones de justicia de los países del globo a adoptar herramientas alternativas para garantizar la continuidad del servicio de justicia sin poner en riesgo la salud de las personas involucradas en el proceso y satisfaciendo en la mayor medida posible los principios y garantías vigentes en un Estado de Derecho Democrático*".

Allí también pusimos de resalto que "*(N)uestro país, en consonancia con el resto del mundo, también ha ido adoptando medidas alternativas para brindar un adecuado servicio de justicia en el contexto de la pandemia actual*".

Así, y "*(a) través de numerosas decisiones plasmadas mediante Acordadas, resoluciones y protocolos internos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta Cámara Federal de Casación Penal fueron ajustando su funcionamiento a las diversas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de seguir garantizando la*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

prestación del servicio de justica y cumplir con el aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio establecido".

También destacamos que "*(A)lgunas de esas medidas fueron la habilitación del trabajo remoto a los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación (PJN), haciendo hincapié en la actuación de la justicia penal en cuanto debía prestar especial consideración a las cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas, la violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública; la aprobación e implementación del uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del PJN respecto de todos los jueces y funcionarios de las instancias inferiores que desarrollan su actividad con el Sistema de Gestión Judicial Lex100; entre otras*".

A la par y "*(E)n atención a la prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a los avances logrados en materia de firma electrónica, trabajo remoto y videoconferencia y a la necesidad de garantizar un servicio de justicia eficaz con mayor cobertura de la conflictividad, esta Cámara dispuso ampliar gradualmente algunas de las funciones que se habían estado desarrollando en los tribunales de todo el país y a fin de brindar un servicio de justicia más vasto, con el objetivo de evitar la paralización de los casos y prevenir demoras que podrían afectar de manera irremediable los derechos de las partes (Acordada 10/2020 CFCP). Con esa finalidad, se encomendó a los tribunales a `(a)vanzar en las diversas etapas procesales siempre que las partes puedan acceder digitalmente a la información del caso para realizar sus presentaciones, tanto en aquellas jurisdicciones donde rige el CPPN como donde se encuentra vigente el CPPF (según leyes 27063, 27272 y 27482);* ***previa celebración virtual de las audiencias previstas por la normativa procesal (siempre que los medios tecnológicos lo permitan) y cuando no exista oposición fundada y razonable de parte, debiendo cumplirse, cuando resulte pertinente, con las reglas de la Acordada 1/12´*** *(el destacado nos pertenece). En virtud de las disposiciones mencionadas es que los tribunales orales federales de nuestro país comenzaron a llevar adelante*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

los juicios orales de manera remota y virtual a través de plataformas de videoconferencias (…)".

Por lo tanto, y desde la perspectiva desarrollada, coincido con lo expuesto por el magistrado que me antecede en el orden de votación, toda vez que las partes impugnadoras no han demostrado el vicio que alegaron, en tanto el desarrollo que los jueces sentenciadores imprimieron al debate, a partir de las novedosas y especiales circunstancias sanitarias que se presentaron, no permite aseverar la vulneración de alguna garantía constitucional.

III. Por otra parte, también compartimos los fundamentos brindados por el doctor Daniel Antonio Petrone en el punto "IV" de su voto.

Ello es así, en tanto las críticas vinculadas al tratamiento de la valoración de las pruebas que sustentaron el grado de participación y la responsabilidad penal que tuvieron los imputados en los hechos reprochados, aparecen como meras reediciones de cuestiones que han recibido suficiente contestación por parte del tribunal sentenciador y únicamente expresan la disconformidad de las partes con lo resuelto, sin que las manifestaciones desarrolladas en los escritos recursivos logren conmover los argumentos brindados en el fallo cuestionado.

En este punto, y sobre la calificación legal elegida, nos interesa destacar nuestra posición acerca de que al momento de determinar si se configura el tipo penal de la asociación ilícita debe atenderse el principio de interpretación restrictiva, derivado del art. 18, CN, sólo queden subsumidos en el tipo penal en cuestión aquellos casos que la regulación tuvo estrictamente en miras abarcar, ya que la sanción penal de dichos actos fundada, en especial, en la peligrosidad corre el riesgo de avanzar sobre acciones privadas con menoscabo de las garantías tuteladas en los arts. 14, 18 y 19, de la Carta Magna.

Ahora bien, corresponde, a partir de la casuística particular que se presenta, analizar si, en el *sub examine*, tienen lugar los requisitos típicos del art. 210 del Código Penal respecto de las conductas reprochadas.

Así, es menester recordar que el tipo básico

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

contenido en el artículo 210 del Código Penal (CP) exige la presencia de tres elementos principales: a) la acción de formar parte o conformar una asociación criminal, b) un número mínimo de autores –tres o más personas–, y c) un fin delictivo; constituyéndose así un delito doloso, abarcando el dolo el conocimiento del número que compone la asociación y la finalidad delictiva de ella.

El conocimiento del propósito de delinquir es estrictamente individual, propio de cada uno de los miembros de la organización y, por lo tanto, la demostración de este elemento subjetivo es esencial en el caso judicial para comprobar si se configurase el delito de marras.

A partir estas breves consideraciones, de la reseña que se hicieron de las conductas de cada uno de los imputados, descritas en el voto del juez Petrone (ver punto "IV", acápites "A", "B" y "C"), y de las características de la organización por ellos compuesta, se advierte que se presentan en el caso los requisitos exigidos por el art. 210, CP.

A la par, también debe ser rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la figura aludida.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad formulado por el abogado Beldi, entendemos que carece de una argumentación suficiente que permita su tratamiento, toda vez que no se advierte ni se ha demostrado arbitrariedad o afectación a normas constitucionales con referencia a las circunstancias concretas de la causa.

Es útil memorar la postura sustentada desde antiguo por el cimero Tribunal de Justicia en relación al rol de los jueces en el control de constitucionalidad de las leyes, en cuanto señala que la misión más delicada del Poder Judicial es la de mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquéllos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 328:3573; 338:488 y 339:1077, entre muchos otros).

En esta línea, la mencionada doctrina expresa que es ineludible considerar que la inconstitucionalidad de una ley debe declararse sólo en casos extremos y cuando ésta

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

no admite una interpretación que la haga compatible con los principios de la Constitución Nacional (CN), toda vez que debe estarse siempre a favor de la validez de las normas (Fallos: 14:425; 147:286 y 335:2333, entre muchos otros).

También señaló que la inconstitucionalidad de una norma no debe ser resuelta en un caso dudoso; en la duda los tribunales deben pronunciarse a favor de la validez de la ley, inclusive cuando la duda fuese razonable: *"(P)or consiguiente, tratándose de leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, la presunción de legitimidad de que gozan opera plenamente, correspondiendo, en consecuencia, pronunciarse en favor de su validez aun en aquellos supuestos en que medie una duda razonable acerca de ella (Fallos 68:238; 242:73)"* (Fallos: 300:655).

IV. En cuanto al recurso de la parte querellante (DGA-AFIP), también coincidimos con la propuesta del colega Petrone, en tanto aquélla no logra, a partir de sus agravios, derribar los fundamentos desarrollados para concluir en la absolución de Eugenio Nadin Ardila Angulo, Carlos David Pardey Rozo y Carlos Miguel Potes Ramírez -por imperio de lo dispuesto en el art. 3 del código sustantivo-.

Ello es así, habida cuenta de que los sentenciadores han desarrollado los fundamentos, a consecuencia del examen de las pruebas producidas durante el debate, y, por tanto, no puede concluirse de que se haya producido un apartamiento de las reglas de la sana crítica en su decisión. Así, la resolución impugnada, en este aspecto, luce como una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, y ajena a cualquier supuesto de arbitrariedad.

Por otra parte, nos parece oportuno recordar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que el principio *in dubio pro* imputado preceptuado en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) guarda una estrecha relación con el estado jurídico de inocencia constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional -CN-).

En tal dirección, indicó la Corte Suprema que

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

"(c)uando ese artículo dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme […]" (Fallos: 321:3630).

A lo expuesto precedentemente es menester agregar lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en cuanto a que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En una formulación equivalente, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) determina que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Como directa consecuencia de la garantía constitucional en juego, el Tribunal cimero ha dejado sin efecto decisiones que prescindieron de explicar racionalmente la responsabilidad del acusado a partir de pruebas concordantes (Fallos: 329:5628, "Miguel"), habiéndose precisado, también, que en función del principio *in dubio pro reo* cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza positiva (Fallos 339:1493 "Carrera").

En línea con esos postulados, hemos de señalar que basta que el estado de duda se presente en algún tópico de la construcción de la imputación, responsabilidad, y/o culpabilidad, para que deba dictarse sentencia absolutoria.

Es que el estado de inocencia del que goza todo imputado hasta el momento del dictado de una condena no es un estado que deba ser construido, sino que, por el contrario, el mismo debe ser destruido por la prueba de cargo aportada durante el proceso.

Que lo que se presenta en estos casos, en definitiva, no es otra cosa que *"(e)l particular estado del intelecto, según el cual se origina una vacilación pendular entre los motivos que llevan a tomar una decisión afirmativa*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

o negativa con relación a una determinada cuestión, debido a que los elementos que inspiran esas antagónicas motivaciones no resultan lo suficientemente explícitos o eficaces para determinar una opción convincente. Ocurre cuando los datos existentes son susceptibles de despertar razonamientos equívocos y disímiles, de suerte que se desencadena un contraste tal que no es posible afirmar que intelectivamente se ha obtenido el convencimiento pleno sobre alguna de las contingencias […]" (cfrme. Jauchen, Eduardo M., "Derechos del Imputado", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 110).

De acuerdo con todo ello, y como se dijo precedentemente, la sentencia absolutoria no logra ser refutada por los agravios introducidos y merece ser considerada un acto jurisdiccional válido.

V. De otra también, hemos de coincidir con los argumentos -a los que nos remitiremos a fin de evitar reiteraciones innecesarias- y la solución propuesta por el doctor Daniel Petrone, en lo que atañe a la absolución de Guillermo Adolfo Heisinger y Williams Triana Pena.

VI. Por último, y confrontados los cuestionamientos de los impugnadores con la decisión recurrida, en lo pertinente a la mensuración de la pena, nos encontramos en condiciones de señalar que el fallo cumple con el mandato de la debida fundamentación y los demás requisitos para ser considerado un acto jurisdiccional válido, alejado de la tacha de arbitrariedad invocada.

En ese sentido, advertimos que la determinación y motivación del *quantum* punitivo que precedió a la decisión del tribunal *a quo* fue el resultado de una interpretación armónica de los arts. 40 y 41, CP.

Es decir, se han examinado en el caso aspectos objetivos y subjetivos, y discernido atenuantes y agravantes, para establecer un monto de pena dentro de los márgenes que prevé la escala penal prevista por las figuras por la que resultaron condenados.

Habida cuenta de ello, no se advierte, ni se ha logrado demostrar una hipotética arbitrariedad en los fundamentos del tribunal de sentencia al mensurar las sanciones, desde que los jueces desarrollaron los motivos por

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

los que, en cada caso, correspondía alejarse de los mínimos previstos en las escalas penales.

Debido a estas consideraciones, y como hemos adelantado, coincidimos con la propuesta efectuada por el juez Petrone.

Es nuestro voto.

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

1. En primer lugar, he de aclarar que a los fines de despejar los cuestionamientos traídos a estudio por las defensas, analizaré la sentencia impugnada con ajuste a la doctrina emanada del precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) desde la perspectiva de que el tribunal de casación *"…debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable… el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible, al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular…"*; y que *"…lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación…"*.

Cabe recordar que es en la audiencia de debate donde se producirán los elementos convictivos que influenciarán sobre los integrantes del tribunal, a efectos de que éstos emitan un pronunciamiento final, sea absolutorio o condenatorio. Así las vivencias que ellos adquieran durante el plenario, derivadas de su inmediación con la prueba allí producida, no pueden ser reemplazadas ni siquiera cuando se cuente con un registro íntegro del juicio o algún otro método de reproducción moderno.

La revisión casatoria supone el control de razonabilidad de la sentencia del tribunal, de conformidad con los alcances por previsión constitucional del principio de inocencia y el debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 10 y 11 DUDH; 8 CADH; 14 y 15 PIDCyP.; y reglas 25, 27 y 29 de las Reglas de Mallorca; entre otros).

En efecto, los límites entre lo que es controlable y lo que no lo es, se determinarán por las

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

posibilidades procesales de que se disponga en cada caso particular, las que excluyen todo aquello que esta Cámara Federal de Casación Penal no pueda acceder por depender de la percepción sensorial de la prueba en el juicio oral, pues se encuentran íntimamente relacionadas con la inmediación (cfr. Bacigalupo, Enrique; "Presunción de inocencia *in dubio pro reo* y recurso de casación" en "La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios"; Ed. Ad Hoc; págs. 13, 32, 33 y 44).

Aunque por aplicación de la doctrina emanada a partir del mentado precedente "Casal", se impone el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de revisar, o sea de agotar la "revisión de lo revisable", siendo su límite, lo que surja directa y únicamente de la inmediación; los artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso.

Partiendo del marco dogmático-jurídico establecido en el precedente "Casal" y teniendo especialmente en consideración el límite que tiene esta Cámara sobre aquellas cuestiones observadas por el tribunal de mérito durante el debate -principio de inmediación-, habré de revisar el razonamiento seguido por el *a quo* para dilucidar si las conclusiones a las que arribó se desprenden lógica y necesariamente de las premisas de las que parten.

Por lo demás, los recursos de casación interpuestos por las defensas resultan formalmente admisibles por cuanto se impetraron contra un pronunciamiento condenatorio, hallándose legitimadas las partes recurrentes (art. 459 del CPPN), y se encuentran reunidos los restantes requisitos de admisibilidad formal previstos en los arts.

432, 438, 456, 457, 463 y ccdtes. del CPPN. Asimismo, dicha tesitura se impone de conformidad con lo previsto al respecto por nuestro sistema constitucional y convencional (arts. 18 y 75, inc. 22 de la CN; 14.5 del PIDCyP y 8.2 de la CADH), a fin de garantizar el derecho al imputado a someter el fallo condenatorio a un tribunal superior con una revisión amplia y eficaz.

Por su parte, debe recordarse el alcance amplio de esa capacidad revisora en materia de casación que, con sustento en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" -sentencia del 2 de julio de 2004-, ha sido receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la única compatible con los derechos y garantías invocadas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación que de éstos han efectuado los diversos Organismos y Tribunales competentes (*in re* "Casal", Fallos: 328:3399).

En efecto, los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional impiden cualquier cercenamiento al tratamiento del planteo del recurrente en segunda instancia, tras la mera invocación de rigorismos o afirmaciones dogmáticas (cfr. doctrina emanada a partir del precedente "Giroldi", Fallos: 318:514). Por el contrario, la revisión amplia que corresponde otorgar al recurso de casación a fin de salvaguardar el derecho del justiciable, debe alcanzar todas cuestiones fácticas, con una debida fundamentación de las premisas que han sido ponderadas para sustentar la conclusión a la que se arribó conforme las constancias incorporadas a la causa como derivación de su relación lógica, deductiva o inductiva, como la revisión del derecho aplicable, asegurando de esta manera, la misión que a este Tribunal compete a fin de garantizar la efectiva vigencia de un doble juicio concordante.

Sobre la base de lo referido, se consideran admisibles los recursos de casación deducidos por las defensas.

2. Por su parte, los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Fiscal y la querella también resultan admisibles, en tanto los mismos satisfacen las exigencias de admisibilidad y fundamentación, al haberse introducido agravios de conformidad con los motivos previstos por el art. 456 del CPPN, en las condiciones del art. 463 del mismo texto legal, y han sido deducidos contra uno de los pronunciamientos definitivos previstos en los arts. 457, 458 y 460, por lo que corresponde dar respuesta a los planteos traídos a estudio por las partes (conf. arts. 465 y 468 del CPPN).

3. Adentrada a dar respuesta en primer lugar a los agravios desarrollados por las defensas, corresponde indicar, en lo atinente a los embates dirigidos al desarrollo del juicio oral a través del sistema de videoconferencia-, que se advierte ante todo que las defensas no invocan –y mucho menos fundan- la concurrencia de un perjuicio real.

En efecto, la realización del juicio, del modo en que se llevó a cabo, tuvo sustento, por un lado, en la situación de pandemia y las limitaciones que de ella derivan en virtud de razones de salud pública, y por otro, en la garantía que tiene toda persona sometida a proceso a ser juzgada en un plazo razonable.

Asimismo el debate llevado a cabo en circunstancias como la de autos cumple con las exigencias de oralidad y publicidad (art. 363 CPPN), y deriva de las diversas decisiones adoptadas por la CSJN y esta CFCP para mantener la prestación del servicio de justicia en la situación excepcional generada por la pandemia, medidas que tienden a buscar un equilibrio entre el adecuado funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y el cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional relativas al distanciamiento social, preventivo y obligatorio establecido.

Cabe agregar, en lo atinente a ello, y tal como lo sostuve al emitir mi voto en la causa CFP 6147/2017/TO1/CFC3, "SÁNCHEZ DE LORIA, Mariano y otros s/recurso de casación" (reg. n° 1668/21 de esta Sala I, del 17/9/2021), que si bien en las resoluciones de esta CFCP se previó la posibilidad de oposición de las partes a la realización de algún acto procesal mediante medios digitales,

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

se estableció asimismo que dicha manifestación negativa debía ser fundada y razonable (cfr. p. ej., Acordada 10/2020 CFCP), requisito que no concurre en el presente caso sometido a control jurisdiccional.

4. Ahora bien, con relación a los restantes agravios traídos a estudio por las defensas, adelanto que adhiero a los fundamentos y la solución propuesta por el magistrado que lidera la votación, respecto a lo cual tan sólo desarrollaré una serie de consideraciones.

En ese sentido debo destacar que, de la lectura de los fundamentos de la sentencia dictada en autos, cotejada ella con los elementos de prueba incorporados al expediente, se advierte la correcta valoración de los elementos del caso, que dejan huérfanos de todo sustento los intentos de los imputados y de sus defensas de desligar su responsabilidad por el hecho que se les reprocha.

En efecto, a partir del análisis de la sentencia impugnada, se juzgan correctamente evaluados los extremos del caso, a partir de los que se han verificado los elementos objetivos y subjetivos del delito que se les endilgó a los condenados.

En ese sentido, las probanzas detalladas en el voto del doctor Petrone, permitieron lógica, racional, legal y jurídicamente derribar el estado de inocencia que pesaba sobre los encausados y subsumir jurídicamente las conductas imputadas, contrariamente a lo sostenido por los defensores.

Cabe señalar que se trata de una reedición de los planteos de nulidad y de exoneración de la responsabilidad penal de los nombrados, efectuados durante el debate oral por sus respectivas defensas, que el *a quo* correctamente ha respondido y despejado en todos los casos, y que los impugnantes no agregan nuevos argumentos que permitan revertir el rechazo articulado.

En efecto, el estudio de la sentencia del Tribunal Oral, en correlato con las constancias del expediente y el contenido de los elementos de prueba reunidos durante la investigación, producidos e incorporados al debate, evidencian el desacierto de los argumentos de los

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

recurrentes y conllevan, además, a rechazar los planteos nulidicentes articulados.

En base a todo lo expuesto, no advierto quiebres o fisuras lógicas en el razonamiento desarrollado por el *a quo* que autoricen la tacha invalidante de la arbitrariedad, la que se encuentra debidamente fundada tanto en las constancias agregadas a la causa como en la legislación aplicable al caso.

Cabe referir que en diversos precedentes he sostenido que si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al tribunal de mérito -entre otros recaudos-, tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme las reglas de interpretación de la prueba, resulta claro que la impugnación que invoca la infracción a esas reglas -lógica, psicología, experiencia-, debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (*in re* "Schlenker, Alan y otros s/recurso de casación", de la Sala I CFCP, entre otros), lo que tampoco sucede en el *sub examine*.

En cuanto a la motivación de las sentencias y, en especial, a la indicación del *iter* formativo de la convicción, es decir, el aspecto subjetivo o valorativo que cabe asignarle a la prueba, se debe revisar si el razonamiento fue lógico -dar cuenta de las pruebas que condujeron a la convicción y del curso racional que enlaza los indicios con la certeza sobre la culpabilidad-, o si por el contrario, fue irracional o absurdo.

En este orden de ideas, Jauchen explica que la certeza judicial, en el orden empírico e histórico debe contentarse con una gran verosimilitud. Agrega que *"…el juez deberá revisar prudentemente las hipótesis que se presentan, despojarse de las proclividades del pensamiento a la imaginación y suplirlo por el sentido metódico y autocrítico, y ceñirse siempre a una actitud analítica totalmente objetiva…"* (Jauchen, Eduardo; "Tratado de la Prueba en Materia Penal"; Bs. As.; Ed. Rubinzal-Culzoni; 1992; pág. 608).

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

En el orden de la jurisprudencia interna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que *"…la necesidad de convicción no implica de ninguna manera una remisión al pleno subjetivismo o a lo que simplemente crea el juzgador. Tal creencia sólo sería apta para sustentar una condena si se asienta en pruebas concordantes susceptibles de explicarla racionalmente…"* (M. 794. XXXIX., "Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Andrés Damián Miguel en la causa Miguel, Jorge Andrés Damián s/p.s.a. de homicidio", rta. el 12/12/06).

Sobre el particular es válido recordar que nuestro Máximo Tribunal, en materia de arbitrariedad de sentencias, ha dicho que esa doctrina reviste carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para examinar su procedencia pues, sostener lo contrario, importaría abrir una tercera instancia ordinaria en aquellos supuestos en que las partes estimen equivocadas las decisiones de los jueces que suscriben el fallo (Fallos: 285:618; 290:95; 291:572; 304:267 y 308:2406).

En suma, por todo lo desarrollado en este punto, considero que la decisión cuestionada cumple con los requisitos de motivación. Es así que las críticas de las defensas, que en líneas generales se centraron en la fragmentación de la prueba para poder restarle valor a los elementos probatorios reunidos, no pueden prosperar.

De la lectura de la sentencia impugnada surge que las conclusiones a las que arribó el tribunal *a quo* constituyen la derivación necesaria y razonada de la prueba incorporada al debate y de la aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que los agravios que formulan los recurrentes logren conmover lo resuelto.

La sentencia recurrida en este punto, tiene los fundamentos jurídicos suficientes que impiden su descalificación como un acto jurisdiccionalmente válido Fallos: 301:449; 303:888, entre muchos otros), por lo que corresponde el rechazo de los planteos deducidos por las defensas al respecto.

5. Sobre la reclamada inconstitucionalidad del delito descripto en el artículo 210 del código sustantivo, he

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

de postular su rechazo en atención a las consideraciones que efectuaré a continuación.

a. En primer término, cabe recordar que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, debe hacerse lugar a la inconstitucionalidad. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (C.S.J.N., Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).

Asimismo, el Superior Tribunal de la Nación ha señalado que el Poder Legislativo es el único órgano constitucional que tiene la potestad de valorar conductas, constituyéndolas en tipos penales reprochables y decidir sobre la pena que estima adecuada conforme la actividad que se considera socialmente dañosa (C.S.J.N. Fallos: 209:342). Ha consignado en tal sentido que *"resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas, y asimismo, y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estime pertinente"* y que *"sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada"* (Fallos: 314:424 "Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas - causa n° 6491").

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Además, ha reconocido que es ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (C.S.J.N. Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341; 314:424). Se trata de las llamadas cuestiones o actos políticos, propios de los poderes públicos -Legislativo y Ejecutivo- y que por tanto no son justiciables, por ser actos discrecionales de aquellos. Sostener que todos los actos o cuestiones -aún las políticas-, son justiciables sería establecer el gobierno de los jueces, cosa inaceptable para el sistema republicano que nos rige.

Cabe asimismo recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido como principio que las leyes deben interpretarse conforme a la intención del legislador (Fallos 302:973), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos 299:167), así es que los jueces no pueden sustituir al legislador, sino que deben aplicar la norma como éste la concibió (Fallos 300:700); las leyes deben interpretase conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 312:311, considerando 8º), evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo la unas por las otras y adoptando, como valedero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 1:297, considerando 3º; 312:1614; 321:562; 324:876, entre otros).

La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 303:578 y B. 4143. XXXVIII, "Blum, Nicolás Ricardo y Cartagena, Juan Manuel s/causa nº 4052").

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

En el mismo sentido, y como el derecho penal representa la última línea de defensa en contra de la lesión de valores jurídicos fundamentales y es tarea del legislador articular los lineamientos generales de la política criminal, la apreciación que realiza el legislador constituye una decisión política sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces, ya que representa facultadas específicas de aquél sobre la política criminal, la que solo tendría lugar en el caso de que se lesionen garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional o Tratados Internacionales en que la República sea parte (cfr. causa nº 7976, Sala I, "Montano, Alberto Abel s/recurso de inconstitucionalidad", reg. nº 10.338, rta. el 18/4/2007).

b. Es facultad exclusiva del poder legislativo nacional determinar qué conductas configuran delitos, cuál es la sanción mínima y máxima que corresponde a cada tipo, determinación respecto a la cual el magistrado efectúa la concreta aplicación al caso traído a su jurisdicción.

No corresponde al Poder Judicial en el sistema democrático vigente efectuar un análisis del mérito o conveniencia, acierto o error de la norma, ya que ello es propio de las atribuciones constitucionales que le competen al Poder Legislativo, sino que debe sujetarse a efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad de la norma, en los casos sometidos al control jurisdiccional, siendo infranqueable el límite de los estándares convencionales con jerarquía constitucional o superior a las normas de derecho interno, conforme el art. 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional.

En este sentido, la defensa no ha logrado argumentar de manera suficiente el planteo, ni tampoco ha demostrado que en el caso se haya verificado una aplicación irracional de la norma, extremos que me conducen al rechazo del planteo efectuado.

6. En cuanto a los montos de las penas dictadas, se impone señalar que en lo que respecta a la mensuración de la sanción penal, la determinación y motivación del *quantum* punitivo que debe ser el resultado de

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

la aplicación de una interpretación armónica de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Vale referir al respecto que el art. 41 del código de fondo contiene dos incisos. El primero de ellos, relacionado a las circunstancias del hecho -aspecto objetivo- mientras que el segundo, remite a la persona del autor -aspecto subjetivo-. De esta forma, magnitud del injusto y culpabilidad constituyen pautas ineludibles para la determinación de la pena que, en tanto cuantificable en virtud de las escalas penales previstas por el legislador, exigen ser tenidas en cuenta por el juzgador al momento de graduar la sanción.

Asimismo, conviene precisar que el abordaje de estas circunstancias particulares del caso concreto, constituyen el límite de lo revisable por esta Cámara, al ser cuestiones a meritar producto de las reglas propias de la inmediación (tal ha sido el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal, Matías Eugenio" -Fallos: 328:3399- que impone el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de ser revisado, o sea de agotar la revisión de lo revisable, con el límite impuesto por la inmediación -cfr. considerandos 23, 24 y 25 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 11 del voto del juez Fayt y considerando 12 del voto de la jueza Argibay-; y los precedentes "Niz, Rosa Andrea y otros s/recurso de casación", N. 132. XLV, rta. el 15/06/10; y "Maldonado, Daniel Enrique y otro s/robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado causa nº 1174C", Fallos 328:4343, considerandos 18 y 19).

En lo atinente a la individualización punitiva, corresponde memorar lo resuelto por el Máximo Tribunal respecto a que *"…el ejercicio por los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas no suscita, en principio, cuestiones que quepa decidir en la instancia del art. 14 de la ley 48 -Fallos: 304:1626; 305:293; 306:1669; 308:2547; causas L.1626, XX, 'Lombardo, Héctor R.', del 4 de septiembre de 1984, P. 101, XXII, 'Poblete Aguilera, Norberto', del 6 de diciembre de 1988; A.*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

599, XXII, 'Alias, Alberto y otro', del 29 de agosto de 1989; G. 416, XXII, 'Gómez Dávalos, Sinforiano', del 26 de octubre de 1989; T. 50, XXIII, 'Tavares, Flavio Arístides', del 19 de agosto de 1992, entre otros-, salvo casos excepcionales en los que se ha incurrido en una arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de defensa en juicio, como sostener la sentencia en 'afirmaciones abstractas que no condicen con las constancias de la causa' (V. 324, XXII. 'Villarreal, José Alberto s/pedido de unificación de pena', del 22 de marzo de 1988); o de omitir el tratamiento de circunstancias atenuantes, es decir, cuando el fallo 'sólo explicó el incremento de la pena sobre la base de pautas objetivas, sin fundar cuáles serían las subjetivas que, en conjunta valoración con las anteriores, justificasen el aumento, y omitió considerar la gran cantidad de elementos de juicio favorables respecto de la personalidad de la procesada' -V. 242, XXIII, 'Viñas, Lía Alejandra y otros s/robo calificado', del 13 de agosto de 1992-…".

En este entendimiento, examinada la sentencia atacada advierto que de adverso a lo afirmado por las asistencias letradas, la misma no es arbitraria. En este sentido, el razonamiento del tribunal *a quo* aparece consistente, ha evaluado en forma pormenorizada las pautas de mensuración contenidas en los artículos 40 y 41 del código de fondo, y ha inspeccionado de modo diferencial tanto las agravantes como las atenuantes aplicadas al caso.

La decisión del Tribunal atendió a la totalidad de las circunstancias que rodearon el hecho juzgado y las condiciones personales de los encartados, así como al desvalor de las conductas enjuiciadas, expresados en forma fundada.

Los defectos señalados en los libelos recursivos son insuficientes para descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido, dada la concurrencia de diversas circunstancias agravantes y atenuantes válidamente computadas por el Tribunal, que justifican el *quantum* de las sanciones infligidas, las que no lucen desproporcionadas ni irrazonables y se ajustan a la escala penal aplicable al caso concreto.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

7. Con relación a la absolución de Eugenio Nadin Ardila Angulo, Carlos David Pardey Rozo y Carlos Miguel Potes Ramírez recurrida por el acusador particular, habré de expedirme de modo coincidente al propuesto por los señores jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, por compartir en lo sustancial sus fundamentos.

En primer lugar, respecto a los agravios relacionados con la valoración de la prueba incorporada al proceso, considero que las conclusiones a las que arribó el *a quo*, que dieron lugar a la decisión absolutoria ahora a estudio, han encontrado apoyatura en una correcta ponderación de las constancias probatorias introducidas por las partes durante el juicio, producto del proceso de la inmediación propio de la oralidad y de una derivación razonada del derecho vigente.

En ese sentido, la querella (AFIP-DGA) no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el *a quo* consideró relevantes al disponer la absolución de los encartados.

En efecto, si bien la materialidad del hecho -detalladamente descripta en el voto del doctor Petrone-, se tuvo por acreditada en el debate y no se halla controvertida, no se ha probado con el grado de certeza apodíctica que exige una sentencia condenatoria, la responsabilidad que individualmente se les atribuyera a los nombrados, correspondiendo en consecuencia su absolución por aplicación del beneficio de la duda y del principio *in dubio pro reo*.

Tal como señala el *a quo*, dadas las circunstancias particulares del hecho en el que la maniobra investigada se desplegó, las acciones atribuidas a los encausados no enlazan directamente con el plexo probatorio reunido en autos ni funda éste, con la certeza apodíctica exigida para el estadio procesal en el que fue dictado el fallo impugnado, las pretensiones punitivas dirigidas en su contra.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

En conclusión, se advierte a partir del estudio de la sentencia puesta en crisis y del plexo probatorio del caso, que con relación a los hechos atribuidos a los encartados se configura un supuesto de duda y de insuficiencia probatoria, que no logra ser superado a partir de la valoración efectuada por el tribunal oral y que impone la solución del caso por la aplicación del principio *in dubio pro reo* (art. 3 CPPN).

En efecto, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, por la prueba producida e incorporada al debate no ha logrado erigirse la hipótesis acusatoria como única posibilidad de ocurrencia de los hechos ni a los encausados con una intervención en los sucesos desde el punto de vista objetivo y subjetivo que exigen los tipos penales endilgados, lo que no permite superar el estado de inocencia de los imputados por los delitos que se les atribuyó.

Cabe referir que el principio de *in dubio pro reo* tiene fundamento constitucional en la garantía de presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el art. 8 inc. 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que ninguna persona puede ser tratada como culpable hasta que no se pruebe el hecho que se le atribuye y el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y lo someta a una pena (cfr. Maier, Julio: "Derecho Procesal Penal", T. I, Fundamentos, Ed. Del Puerto, Bs. As. 1996, pág. 498).

El Alto Tribunal ha establecido que *"…[E]l estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso"* (Fallos 308:640). Asimismo, ha sostenido que: *"…la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, aun en el caso de las presunciones (Fallos: 264:301; 269:43; 279:171 y 312; 292:564, 294:331 y 425; 301:909; entre muchos otros)"* (Fallos 321:1173, Consid. 6º).

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Sostiene Maier que *"…la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución..."* (conf. Julio B. J. Maier, "Derecho procesal penal", Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1996, 2° edición, pág. 495).

Se ha dicho también que *"la verdad sólo puede percibirse subjetivamente en cuanto firme creencia de estar en posesión de ella, y esto es lo que se llama estado de certeza, de contenido simple y, por lo tanto, ingraduable. Se presenta cuando se ha desechado toda noción opuesta capaz de perturbar la firmeza de esa creencia"* (Clariá Olmedo, Jorge A.; *Tratado de Derecho Procesal Penal*, Tomo I. Nociones Fundamentales; Ediar S.A. Editores, Bs. As., 1960, pág. 446).

Por su parte, sostiene Mittermaier, en su "Tratado de la Prueba en Materia Criminal" (Madrid, hijos de Reus, Editores, 1901, pág. 61 y ss.) que *"para que haya certeza se exige el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales: 1°) requiéranse un conjunto de motivos, acreditados por la razón y la experiencia, para poder servir de base a la convicción; 2°) es preciso que la preceda un esfuerzo grave e imparcial, profundizado y apartando los medios que tiendan a hacer admitir la solución contraria. El que desea adquirir certeza no cierra jamás la puerta a la duda, antes bien se detiene en todos los indicios que pudieran conducir a ella y sólo cuando la ha hecho desaparecer completamente es cuando su decisión de hacer irrevocable y se asienta sobre la base indestructible de los motivos de la convicción afirmativa. 3°) no puede existir certeza hasta haber sido alejados todos los motivos resultantes de los autos, que tienden a presentar la inculpación como descansando acaso sobre una imposibilidad o lleguen a dar un resultado positivamente contrario al que los demás motivos suministran…"*.

Sigue diciendo este autor que *"conviene distinguir muy bien la probabilidad de la certeza. Hay*

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

probabilidad cuando la razón, apoyándose en motivos graves, tiene por verdadero un hecho, pero sólo en el caso de que los motivos poderosos en contrario no hayan completamente desaparecido. Resulta la probabilidad o de que la convicción no descansa sino en ciertos datos, o que a pesar de su reunión no son todavía bastante poderosos para producir la certeza. En ninguno de estos casos puede tomarse la probabilidad por base de una condena, porque siempre queda lugar a la duda y la conciencia no puede quedar satisfecha de tal modo que parezca haberse desvanecido la posibilidad de lo contrario".

Esa falta de certeza que preside la decisión del caso, me determina a confirmar la aplicación del principio de *in dubio pro reo* a favor de Eugenio Nadin Ardila Angulo, Carlos David Pardey Rozo y Carlos Miguel Potes Ramírez, pues se carece de la clara y concreta determinación de la responsabilidad que le cabe asignar a los incusos en el hecho tenido por acreditado por el tribunal.

Los extremos reunidos no autorizan a tener por acreditados, con la certeza exigida para una decisión condenatoria, los hechos por los cuales fueron llevados a juicio los encartados, por lo que la garantía *in dubio pro reo* resulta adecuadamente aplicada al caso, la que debe respetarse en un Estado de derecho para aplicar lícitamente la pena que por tal suceso le corresponda a cualquier sujeto (cfr. Cafferata Nores, José I., "Cuestiones actuales sobre el proceso penal", Ediciones del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2000, 3a. edición, pág. 51 y ss.).

Por todo lo analizado aquí, concluyo que el plexo probatorio del caso analizado de manera objetiva, integral y armónica, no demuestra con certeza la hipótesis imputativa, sino que en todo caso verifica un grado de probabilidad al respecto, insuficiente para fundar una sentencia condenatoria.

Lo referido me conduce a rechazar el recurso de la querella en lo que a las absoluciones de de Eugenio Nadin Ardila Angulo, Carlos David Pardey Rozo y Carlos Miguel Potes Ramírez respecta.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

8. En lo que atañe a la absolución de Guillermo Adolfo Heisinger (absuelto por asociación ilícita) y Williams Triana Peña (condenado sólo por el delito de asociación ilícita y absuelto por los hechos de narcotráfico), adhiero a la solución propuesta por el señor juez que lidera el Acuerdo en el punto VI de su voto, pues el acabado examen de las circunstancias del caso acreditadas durante la realización del debate oral, a la luz de los parámetros normativos, legales y probatorios que rigen la materia, evidencia el desacierto del dictado de la absolución de los nombrados.

Con relación al imputado Triana Peña, resulta congruente con las constancias de la causa el análisis de la imputación penal dirigida originalmente al encausado por los hechos de narcotráfico, en la medida de que el rol que dentro de la organización delictiva cumplía el nombrado, lo situaría en una posición de disposición y de impartición de órdenes que resultaría -*prima facie*- inescindible de los hechos por los que resultó absuelto.

Por ello, voto por hacer lugar al recurso del acusador público en lo que a este tópico respecta.

Sobre el pronunciamiento absolutorio dictado en favor de Guillermo Adolfo Heisinger, adhiero a la propuesta del doctor Petrone en cuanto a la anulación del decisorio en crisis.

En ese sentido, corresponde hacer lugar a los recursos de casación deducidos por el Fiscal y por la querella, pues existen elementos de cargo que han sido reunidos a lo largo de todo el proceso, y que a juicio de los acusadores sustentarían la hipótesis de que el nombrado, más allá de su rol como abogado por el que intervenía en los negocios lícitos, tenía pleno conocimiento y participaba de las actividades ilícitas de la familia Triana Peña.

Sobre la base de estas consideraciones, coincido con la ponencia que lidera el presente Acuerdo, en cuanto a que la valoración del plexo probatorio reunido en autos ha sido arbitraria.

9. En definitiva, voto por: **I.** Rechazar los recursos de casación deducidos las defensas en las presentes

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

actuaciones, con costas (arts. 456, 470, 471 *a contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN); **II.** Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Querella (AFIP-DGA), ANULAR los puntos dispositivos XIX y XXXV de la sentencia impugnada en cuando dispuso las absoluciones de William Triana Peña y de Guillermo Adolfo Heisinger, respectivamente, y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de mérito para que a través de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la doctrina aquí sentada, sin costas (arts. 470, 530 y 531 del CPPN); **III.** Tener presente las reservas del caso federal planteadas.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal **RESUELVE:**

I. HACER LUGAR al recurso del fiscal general en lo que respecta a William Triana Peña, **ANULAR el punto XIX** de la resolución recurrida y **REENVIAR** a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, sin imposición de costas (arts. 470, 530 y 531 del CPPN).

II. HACER LUGAR a los recursos del fiscal general y la parte querellante respecto a Heisinger, y en consecuencia **ANULAR** el punto **XXXV** de la resolución recurrida y **REENVIAR** a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, sin imposición de costas (arts. 470, 530 y 531 del CPPN).

III. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante respecto a los puntos **XXXII; XXXIII y XXXIV** de la sentencia recurrida.

IV. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas de los imputados, con costas (arts. 456, 470, 471 *a contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

V. TENER PRESENTE las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial –CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítanse al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

#35066931#329599535#20220602091845861

Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa. Ante mí: Walter Daniel Magnone.